

Julio 7 de 1939

18ª REUNION — 16ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los señores Juan G. Kaiser y Carlos A. Pita

MINISTRO PRESENTE:

de Agricultura,

Ingeniero José Padilla;

DIPUTADOS PRESENTES:

Acuña, Aurelio S.
Aguir, Henoch D.
Aguirre Cámara, José
Aguila, Juan Carlos
Alsina, Juan José
Alvarez Colodrero, Carlos
Allperin, Samuel
Amadeo y Videla, Daniel (h.)
Anastasi, Leonidas
Arbeletche, Anibal P.
Barrau, José
Barriouuevo, Gerardo
Basualdo, Honorio
Beiró, Angel Francisco
Biancofiore, Rafael
Boatti, Ernesto C.
Boero, Albino
Cabral, Humberto
Cafferata, Juan F.
Cantilo, José Luis
Cappellini, Luis E.
Carreras, Ernesto L. de las
Castex, I. Mario
Cisneros, Carlos E.
Cooke, Juan I.
Cordero, Octavio
Counel, Carlos D.
De Miguel, Benito
Devoto Acosta, Alcibiades
Diaz, Raúl
Dickmann, Enrique
Duffy, Eduardo N.
Fassi, Santiago Carlos
Garona, Juan A.
Ghioldi, Américo

Gedoy, Raúl
Gómez Grandoli, Clemente
Gómez Rincón, Abel
González, Benjamín S.
Grisolia, Luis
Güerel, José María
Guerrero, José Rafael
Gagliabuehli, Aquiles M.
Guillot, Víctor Juan
Güiraldes, Carlos (h.)
Gutiérrez, José María
Hardoy, Emilio J.
Horne, Bernardino
Illanes, Elío J.
Infante, Faustino
Irigoyen, Carlos
Iriondo, Urbano de
Jaramillo, José María
Jiménez, Mario
Kaiser, Juan G.
Labayen, Juan
Lanus, Adolfo
Lezica Alvear, Florencio
Lima, Vicente Solano
López, Néctor S.
López Merino, Ismael
Maino, Alejandro
Martínez, Benito E.
Martínez Gregorio N.
Medina, Justo G.
Méndez Calzada, Joaquín
Montagna, Carlos P.
Moreno, Ricardo A.
Morrogh Bernard, Juan F.
Mugica, Adolfo
Muniagurria, Walter Julio
Noel, Martín
Onsari, Fabián
Ortiz Basualdo, Samuel
Ortiz de Zárate, Miguel
Osoreo Soler, Manuel E.
Osorio, Miguel
Palacio, Benjamín

Pandolfo, Pío
Pastor, Reynaldo A.
Paz, Eduardo
Peco, José
Peña, Ernesto S.
Pérez, Declindo
Piedrabuena, Carmelo P.
Pinto, Manuel (h.)
Pita, Carlos A.
Pizarro, Néstor A.
Radio, Pedro
Ravignani, Emilio
Repetto, Nicolás
Reyna, Rodolfo
Rocha, Justo V.
Ruggieri, Silvio L.
Saá, Alberto
Saccone, Romeo D.
Sáenz, Mario
Sammartino, Ernesto
Sancerni Giménez, Julián
Sánchez, Adolfo E.
Simón Padrós, J.
Siri, Obdulio F.
Solá, Juan E.
Solana, J. Félix
Solari, Felipe C.
Solari, Juan Antonio
Soldano, Arquímedes A. E.
Solis, Rogelio J.
Soto, Pedro Numa
Susan, José C.
Tamborini, José P.
Tapia, Numa
Teisaire, Eduardo (h.)
Vásquez, Juan Carlos
Vélez, Francisco M.
Vilchez, Martín
Zavala Ortiz, Teobaldo

AUSENTES, CON LICENCIA:

Astesiano, Carmelo I.
Busaniche, Julio A.

Busignani, Mario
Castro Frediani, Manuel L.
Eberlé, Enrique
Hernández, Victorio
Izurieta Fourquet, Agustín
Martínez, Manuel
Noel, Carlos M.
Pinto, Manuel
Quintana, Fenelón
Urien, Enrique César
Vilgré La Madrid, Juan
Zara, Edmundo Leopoldo
Zunino, Marcelo A.

AUSENTES, CON AVISO:

Araujo, Eduardo
Damonte Taborda, Raúl

AUSENTES, SIN AVISO:

Arias Uribe, Juan
Barceló, Alberto
Beristain, Francisco
Bertotto, José G.
Carús, Agustín J.
Eyto, Francisco F.
Fazio Rojas, Lorenzo
Ferreira, Antenor R.
Figueroa, Julio A.
Grassi, Alfredo
Hernández, Clodomiro
Lazo, Plácido C.
López García, Francisco
Martínez, F. Benigno
O'Reilly, Guillermo R.
Pagano, David J.
Paz Posse, Ramón D.
Peña, Solano
Prat Gay, Fernando de
Schoo Lastra, Dionisio
Videla Dorna, Daniel

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Comunicación de comisión.

II.—Despacho de comisión.

III.—Peticiones particulares.

IV.—Proyecto de ley, del señor diputado Ravignani, sobre erección de un monumento al general don Juan Gregorio de Las Heras.

4.—Indicación de pronto despacho del proyecto de ley a que se refiere el número IV de este sumario.

5.—Asuntos entrados:

V.—El señor diputado **Solá**, reproduce un proyecto de ley, sobre creación del instituto nacional de la nutrición.

VI.—Proyecto de ley, del señor diputado **Rocha**, sobre erección de una estatua al doctor **Vicente López y Planes** y de un busto al maestro **Blas Parera**.

VII.—El señor diputado **Connel**, reproduce un proyecto de ley, sobre subsidio al Club Atlético Independiente, de Cruz del Eje (Córdoba).

VIII.—Proyecto de ley, del señor diputado **Pastor**, sobre creación de la biblioteca técnica nacional.

IX.—Proyecto de ley, del señor diputado **Cisneros** y otros, creando la dirección general de bosques.

X.—Proyecto de ley, del señor diputado **Lanús** y otros, por el que se declaran auténticas las ediciones del Himno Nacional Argentino que se ajusten a la versión del maestro **Juan P. Esnaola**.

6.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones, a los señores diputados **Hernández (V.)**, **Izurieta Fourquet** y **Vélez**.

7.—Aclaración del señor diputado **Benetto**, relativa a manifestaciones vertidas en la sesión celebrada el día 6 del corriente en el Honorable Senado.

8.—Se aprueba el despacho de las comisiones de Guerra y Marina y de Presupuesto y Hacienda, sobre adquisición de elementos de salvataje para submarinos.

9.—Se considera el despacho de la Comisión de Legislación Agraria, sobre creación del consejo nacional de colonización.

10.—Asunto entrado:

XI.—Mensaje del Poder Ejecutivo, por el que invita a la Honorable Cámara a concurrir al solemne tedéum a realizarse el 9 del corriente en la iglesia Catedral metropolitana, en conmemoración del 123° aniversario de la Independencia argentina.

—En Buenos Aires, a siete días del mes de julio del año 1933, siendo la hora 15 y 59:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Labayen. — Hago indicación de que se siga llamando un cuarto de hora más.

Sr. Guillot. — Pido la palabra.

Desde luego, habrá asentimiento para aprobar esa indicación, pero conviene dejar constancia de que resulta ya abusivo que después de la media hora de tolerancia reglamentaria, todavía sea necesario tolerar una mayor espera a efectos de que haya quórum, para que la Cámara cumpla con su deber.

Sr. Labayen. — Subscribo totalmente las palabras del señor diputado, pero ellas no quitan que esperemos quince minutos más.

Sr. Guillot. — De todos modos, sería interesante saber si hay número en la casa.

Sr. Presidente (Kaiser). — En este momento hay número en la casa.

Sr. Muniagurria. — Entonces, que se siga llamando.

Sr. Vásquez. — Se podría invitar a los señores diputados a concurrir al recinto.

—A la hora 16 y 7:

2

ACTA

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda abierta la sesión con la asistencia de 88 señores diputados en el recinto.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado **Solís**, se suprime la lectura, y se da por aprobada el acta.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Comunicación de comisión

La Comisión de Legislación Agraria remite la nómina de asuntos que pasan al archivo, en virtud de la ley número 2.714.

9

COLONIZACION NACIONAL

(Orden del día número 73)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Legislación Agraria, ha tomado en consideración los diversos proyectos de ley referentes a «colonización nacional» destinados a su estudio en los últimos períodos parlamentarios; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPITULO I

Consejo agrario nacional, creación, denominación y objeto

Artículo 1º — La Nación aplicará, de acuerdo a las presentes normas, un plan agrario destinado a poblar el interior del país, a racionalizar las explotaciones rurales, a subdividir la tierra, estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y a llevar mayor bienestar a los trabajadores agrarios.

La propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley de acuerdo al interés colectivo.

Art. 2º — Créase un consejo agrario nacional para aplicar en forma permanente esta ley, que funcionará con la autonomía que le acuerda la misma y con jurisdicción en todo el país.

Será una institución de derecho público y privado, siendo sus miembros personal y solidariamente responsables de los actos del consejo, salvo expresa constancia en acta de quien estuviera en contra de sus resoluciones.

Art. 3º — El consejo agrario nacional se compondrá de cinco miembros. Dos en representación del Poder Ejecutivo, uno en representación del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional, uno en representación de las cooperativas agrícolas inscriptas en el Ministerio de Agricultura de acuerdo a la ley número 11.388 y uno en representación de los consejos agrarios locales.

Los representantes elegidos por el Poder Ejecutivo lo serán entre personas de reconocida capacidad en los problemas agrarios, debiendo

la presidencia y vicepresidencia ejercerse por éstos. Todos los miembros del directorio se nombrarán con acuerdo del Senado. Serán inamovibles salvo el caso de mala conducta. Los nombrados en caso de vacante completarán período.

Para funcionamiento del directorio se requiere la asistencia por lo menos de dos tercios de la totalidad de sus miembros.

El presidente ejercerá sus funciones durante un período de seis años y los directores por igual tiempo, renovándose éstos cada tres años, y por sorteo la primera vez. El presidente y los miembros del consejo podrán ser reelectos.

El presidente del consejo ejercerá la representación legal del mismo. Tendrá voz y voto en todos los casos y el suyo será decisivo en caso de empate.

Art. 4º — Tanto el presidente como los directores deberán ser ciudadanos argentinos mayores de veinticinco años de edad y tener cinco años de ejercicio de la ciudadanía en caso de ser naturalizados.

Art. 5º — La remuneración del presidente será de dos mil pesos moneda nacional mensuales y la de los directores de mil pesos moneda nacional mensuales.

Art. 6º — No podrán ser miembros del consejo agrario nacional:

- a) Los que desempeñen cualquier otra función o empleo nacional, provincial o municipal, excepto los de la enseñanza;
- b) Los jubilados nacionales, provinciales o municipales;
- c) Los que formen parte del directorio o administración de bancos o entidades privadas vinculadas a las transacciones en bienes rurales, explotación de bosques, verbales o algodónales, etcétera, o de empresas colonizadoras;
- d) Los que se hallen en estado de quiebra, concurso civil o que tengan en gestión arreglos con sus acreedores;
- e) Los que hubiesen sido procesados por delitos comunes.

CAPITULO II

Funciones y deberes del consejo agrario nacional

Art. 7º — El consejo agrario nacional tendrá las siguientes funciones y deberes:

- a) Administrar el fondo general y los bienes, arrendar y enajenar los inmuebles, así

como realizar las demás operaciones vinculadas con sus fines;

- b) Estudiar planes de constitución de pequeñas propiedades rurales que contemplen metódica y progresivamente todo el territorio de la República, teniendo en cuenta las características agrícolas de cada zona, las vías de comunicación, distancia de los mercados consumidores, estaciones y puertos de embarque y distribución de la población en el país, y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo;
- c) Convenir con los Bancos oficiales e instituciones autárquicas del Estado, la incorporación al régimen de la presente ley de los inmuebles de su propiedad, o que estuvieran gravados a aquéllos, en las condiciones que se estipulen;
- d) Adquirir en remates judiciales o del Banco Hipotecario Nacional inmuebles del dominio privado;
- e) Adquirir directamente inmuebles en cualquier punto del país o proponer al Poder Ejecutivo su expropiación;
- f) Organizar la campaña para aumentar la población rural del país, y a este efecto, realizar con aprobación del Poder Ejecutivo convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero o con instituciones de reconocida solvencia y responsabilidad para radicarlas en la República, mediante contratos de compra-venta o de arrendamientos con opción de compra de los inmuebles que a este fin destine, siempre que esas familias dispongan de medios para iniciar una explotación agraria y provengan de regiones de fácil asimilación al medio argentino;
- g) Fomentar el cooperativismo en todas sus formas aplicando dentro de cada plan, las leyes del hogar, crédito agrícola, cooperativas, u otras que se dicten en el futuro, vinculadas con la economía agraria y la colonización;
- h) Propender en las distintas colonias a la formación de industrias rurales transformadoras de acuerdo con la naturaleza de los cultivos que se realicen en aquéllas; y facilitar la aplicación y fomento del crédito agrario directo, colaborando con el Banco de la Nación Argentina;
- i) Propender a que la instrucción impartida en las escuelas rurales se oriente hacia la formación de la capacidad técnica de los agrarios y sus hijos;
- j) Fomentar la utilización en común de las

maquinarias industriales y agrícolas, a fin de obtener un mayor perfeccionamiento agrario;

- k) Gestionar la utilización de cauces de agua para riego de las tierras de las colonias y estimular el empleo de la energía eléctrica en los trabajos rurales;
- l) Promover la aplicación del seguro agrícola mutuo u oficial en las colonias que administre;
- m) Organizar en el interior y en el exterior por intermedio de la representación diplomática y consular, una propaganda permanente destinada a difundir los propósitos de esta ley y el conocimiento de las zonas agrícolas del país;
- n) Nombrar el personal técnico y administrativo mediante concursos de selección, debiendo exigir para aquellos cargos que lo requieran, títulos expedidos por las universidades o institutos nacionales especializados y, en el caso de ciudadanos naturalizados graduados en el extranjero, siempre que sus títulos hayan sido revalidados en el país. Excepcionalmente podrá designar directamente técnicos extranjeros o del país, de reconocida capacidad, cuando sus actividades fueran necesarias;
- o) Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo la reglamentación de esta ley;
- p) Formular su presupuesto anual de gastos, con la aprobación del Poder Ejecutivo el que podrá introducir modificaciones que no constituyan aumentos y ponerlo en vigencia hasta que sea considerado por el Honorable Congreso;
- q) Dictar su reglamento interno;
- r) Elevar anualmente al Honorable Congreso la memoria descriptiva de la actividad desarrollada.

CAPITULO III

Inmuebles destinados a la colonización

Art. 8º — Para los fines de esta ley se utilizarán los siguientes inmuebles:

- a) Las tierras fiscales que se consideren aptas;
- b) Las que estén en poder de los ministerios, de los bancos oficiales o cualquiera de las otras reparticiones públicas nacionales y que no se utilicen para otros fines del Estado o para los especiales que determinaron su adquisición, o que en adelante pasen a su poder o se adjudiquen en pago de sus créditos, en virtud de las leyes y

reglamentos que las rigen o de convenios que celebren con sus deudores;

- c) Las que el consejo adquiriera directamente por compra o sean expropiadas de acuerdo con la presente ley;
- d) Las del dominio privado o de las provincias o municipalidades que sean ofrecidas para ser incorporadas al régimen de la presente ley.

Art. 9º — Será considerado apto a los fines del inciso c) del artículo anterior todo inmueble que:

- a) No se encuentre a mayor distancia de 30 kilómetros de estación de ferrocarril o de camino de pavimento firme o de 400 kilómetros de mercados interiores o de puertos de embarque;
- b) Sus condiciones ecológicas aseguren la explotación agrícola por el trabajo familiar en su máximo de eficiencia, dentro de prácticas aconsejadas por la técnica y la experiencia de la zona;
- c) Pueda obtenerse una adecuada rotación de los cultivos o la explotación de especies animales;
- d) El costo del transporte se encuentre en relación económica aceptable con el valor del producto;
- e) La cantidad de lluvia caída anualmente y la naturaleza del suelo sean adecuadas a la clase de cultivos para los cuales se les destina.

Art. 10. — La adjudicación de las tierras se hará por licitación pública, en la forma que reglamentará el consejo agrario nacional con aprobación del Poder Ejecutivo o en remate público, cuando dentro de las condiciones que se establecen por esta ley, fueran ofrecidas en esta forma.

Art. 11. — En ningún caso el consejo agrario nacional podrá adquirir tierras de particulares o de instituciones privadas, en otra forma que en las expresadas en el artículo 10, cuyos requisitos no regirán para cuando la compra se efectúe a instituciones del Estado.

CAPITULO IV

Expropiación de inmuebles para la colonización

Art. 12. — En caso de que el consejo agrario nacional no pudiera adquirir tierras en las condiciones especificadas en el artículo 9º para en-

tregarlas a la colonización, queda facultado para realizar su expropiación con la aprobación del Poder Ejecutivo de la que sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley. Con este objeto, se declara de utilidad pública la tierra que el consejo agrario nacional con la aprobación del Poder Ejecutivo juzgue preciso incluir en los planes colonizadores.

Art. 13. — La expropiación de tierra debe referirse a las que en el momento de efectuarse no fueran objeto de una explotación agraria racional verificada directamente por sus propietarios o a extensiones de tierra que no excedan de mil hectáreas de superficie.

Art. 14. — Siendo de interés público el cumplimiento de la presente ley, la indemnización al propietario de la tierra en el caso de que le fuera expropiada, por mediar la circunstancia a que se refiere el artículo 12 no podrá exceder de la que surja de su valor en relación con el de su producción, apreciada en los últimos diez años precedentes al de la expropiación y con prescindencia de todo otro factor que pueda determinar una apreciación distinta.

Art. 15. — Todo predio rural que no sea de jurisdicción municipal, abandonado o no explotado por su propietario durante el término de cinco años, podrá ser expropiado por el consejo agrario nacional con aprobación del Poder Ejecutivo. Al efecto, se declara la utilidad pública los que el consejo agrario nacional juzgue necesario incluir en los planes colonizadores, debiendo sus propietarios ser indemnizados de acuerdo a lo establecido en el artículo 14.

Art. 16. — Cuando las tierras sujetas al régimen de esta ley se concentren de nuevo o se subdividan sin contemplar las necesidades del trabajo agrícola, podrán ser expropiadas por el consejo agrario nacional con aprobación del Poder Ejecutivo. El precio se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, y las mejoras deberán ser indemnizadas.

CAPITULO V

Inmuebles de provincia para la colonización

Art. 17. — Para los planes de constitución de pequeñas propiedades rurales, serán preferidos los inmuebles sitos en las provincias que dicten leyes que dispongan:

- a) Exención hasta por cinco años del impuesto territorial a los inmuebles que se incorporen al régimen de la presente ley, sea por compra o convenio con institucio-

nes oficiales, mientras no sean arrendados o vendidos a los agricultores;

- b) Exención de la contribución territorial por un plazo mínimo de cinco años, a partir de la fecha de la escrituración a los agricultores que instale el consejo;
- c) Exención de todos los impuestos, inclusive el sellado a las actividades del consejo;
- d) Instalación de escuelas, justicia de paz, policía, conservación y reparación de caminos para el transporte de los productos a estación o puerto.

CAPITULO VI

Inmuebles de los bancos e instituciones oficiales para la colonización

Art. 18. — Si los considera aptos, para los fines de la presente ley, el consejo agrario nacional procederá a colonizar con preferencia, los inmuebles adjudicados a los bancos oficiales, Instituto Movilizador, ministerios, o cualquier otra repartición pública nacional.

A este objeto podrá adquirirlas en las condiciones de precio y de plazos para el pago, que estipulen con dichas instituciones, o convenir con éstas el traspaso de los mismos a su favor, en cualquier otra forma.

Art. 19. — Los bancos del Estado, o las instituciones de éste, estarán obligados a ceder al consejo agrario nacional, las tierras de su propiedad que les reclame para ser colonizadas, siempre que les sea garantizado el importe que hubieran invertido para la adquisición de los mismos por su parte.

Los inmuebles que de esta manera se adjudique el consejo, serán pagados en anualidades vencidas con amortización acumulativa del 1 % e interés del 3 % constituyendo hipoteca a favor del vendedor.

CAPITULO VII

Adquisición de inmuebles

Art. 20. — Previa inspección efectuada por dos técnicos de su personal, para la adquisición de inmuebles, el consejo se guiará por estas normas fundamentales:

- a) Toda adquisición será resuelta por el voto de, por los menos, cuatro de sus miembros;
- b) La tasación del inmueble se hará por el valor en el mercado y por el cálculo

de la renta neta probable capitalizada al 5 ½ %. Este tipo de interés podrá ser modificado por el Poder Ejecutivo a propuesta de los dos tercios del consejo;

- c) Para la tasación se tendrá en cuenta:

- 1º Los precios de los productos en un número de años no inferior a diez, elegidos entre los que no puedan ser afectados por fenómenos de carácter extraordinario;
- 2º Los rendimientos promedios en las zonas en un período de diez años.

CAPITULO VIII

Subdivisión y mejoras

Art. 21. — Adquirido un inmueble, el consejo procederá a subdividirlo en lotes, cuya superficie quedará subordinada a la naturaleza y topografía del terreno y deberá calcularse en cada región teniendo en cuenta que el agricultor pueda realizar la mayor parte de la labor agrícola utilizando su trabajo personal y el de su familia y con capacidad productiva suficiente para cubrir sus principales necesidades de vida y acumular un capital que le permita mejorar sus condiciones sociales y económicas y la técnica de su explotación.

Queda autorizado el consejo para vender en remate público las fracciones sobrantes de una subdivisión que no resulten aptas para los fines de esta ley, o que por sus mejoras costosas o inútiles no permitan una pequeña explotación.

Art. 22. — El consejo introducirá mejoras que estime económicamente necesarias en los predios a ofrecerse a los agricultores. Reservará las parcelas para las explotaciones de orientación técnica y experimental a que se refiere el artículo 33.

Reservará el terreno destinado a escuela, siempre que no existiera una a menos de cinco kilómetros y convendrá con el Consejo Nacional de Educación o autoridades provinciales su instalación, donando el terreno a quien corresponda.

Art. 23. — El consejo procurará que los caminos se mantengan en buen estado, a cuyo efecto solicitará la colaboración de la Dirección Nacional de Vialidad, gobiernos de provincia o municipalidades.

El Ministerio de Agricultura facilitará sin cargo, al consejo, todos los elementos necesari-

rios para el arbolado y embellecimiento de caminos y predios.

CAPITULO IX

Venta de predios

Art. 24. — El consejo podrá vender directamente el predio al agricultor que abone, por lo menos, el 10 % del precio de venta al contado, siempre que no sea propietario de inmuebles agrícolas y que reúna los demás requisitos prescriptos por esta ley.

Art. 25. — La venta de los predios se hará previa comprobación de la capacidad económica, profesional y personal de los agricultores. Se entiende por la primera, la posesión de elementos de trabajo y animales en cantidad suficiente para su explotación. La segunda, se comprobará por su actuación en trabajos agrícolas similares, durante un período no menor de tres años, y la tercera, se regirá por las condiciones que determine el reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo.

Art. 26. — Para la venta de los predios serán preferidos, en primer término, los agricultores que:

- a) Formen familia apta para colaborar en el trabajo del predio;
- b) Sean de nacionalidad argentina, o extranjeros con residencia mayor de cinco años, y estén domiciliados en la región.

Art. 27. — El consejo adjudicará dentro de las colonias a que se refiere el artículo 33, el 75 % de los predios que resulten, una vez efectuada la subdivisión a los agricultores a que se refiere el artículo anterior y podrá reservar el 25 % restante para adjudicarlo a los que lleguen del extranjero en virtud de los convenios a que se refiere el inciso f) del artículo 7°.

En ningún caso podrá el consejo conceder en venta o en arrendamiento con opción de compra la totalidad de ese 25 % o la totalidad de los predios que correspondan a colonias que se creen exclusivamente para cumplir con los mencionados convenios a familias de una misma nacionalidad, debiendo tenerse en cuenta para fijar el porcentaje de colonos extranjeros la aptitud de asimilación de los mismos.

Art. 28. — El saldo de venta será abonado:

- a) Con una amortización acumulativa del 1/2 % e intereses del 2 1/2 %, hasta re-

ducirlo al 50 %. Los vencimientos se fijarán en la fecha de mayor ingreso de la explotación.

- b) Con una amortización anual acumulativa e intereses iguales a los que estén en vigencia en el Banco Hipotecario Nacional, el 50 % restante.

Los compradores podrán en cualquier época efectuar amortizaciones extraordinarias en la forma que determine la reglamentación.

Art. 29. — Cuando se haya reducido al 50 % el saldo del precio de venta del crédito hipotecario, el consejo solicitará su transferencia al Banco Hipotecario Nacional, recibiendo cédulas hipotecarias por su valor nominal.

Art. 30. — Mientras los compradores no hayan cancelado o transferido el saldo de su deuda al Banco Hipotecario Nacional, no podrán enajenar el predio sin consentimiento del consejo y aceptación por éste del nuevo adquirente. Las transferencias deberán ser resueltas por el consejo dentro de los sesenta días de formulado el pedido correspondiente. Sin este requisito los registros de la propiedad no anotarán transferencia alguna de dominio de los predios vendidos a los agricultores por el consejo.

Art. 31. — Los agricultores que reúnan los requisitos exigidos y que no estén en condiciones de abonar el 10 % del precio de venta al contado, podrán arrendar los predios con opción de compra, hasta por el término de cinco años, a un precio igual al 3 % del precio de venta.

El consejo queda facultado para declarar la caducidad de dichos contratos, cuando en cualquier momento de su vigencia, constatare la incapacidad del arrendatario para convertirse en propietario, de acuerdo a las exigencias de esta ley.

Podrá también el consejo ampliar prudentemente el término del arriendo cuando, por circunstancias especiales, dentro del mismo el locatario, no hubiera podido cumplir con los requisitos prescriptos para convertirse en propietario.

Art. 32. — Los agricultores que al término del contrato de arrendamiento hayan cumplido con las obligaciones impuestas por aquél y los requisitos prescriptos por esta ley, podrán adquirir el predio que trabajan, siempre que en el acto de subscribir las escrituras, abonen el 10 % del precio de venta.

CAPITULO X

Organización de las explotaciones y normas de cultivo

Art. 33. — En cada inmueble que se subdivida en más de treinta parcelas se formará una explotación con orientación, individualidad y organización propias, con miras a la diversificación de la producción y a la implantación de industrias rurales anexas. Tendrá un consejo de agrarios, un director técnico designado por el consejo nacional y una reserva fiscal para la instalación de chacras experimentales, estaciones zootécnicas, etcétera.

El consejo estimulará y fomentará especialmente en cada colonia, la constitución y funcionamiento de sociedades cooperativas agrarias de producción, de consumo, de comercialización y de industrialización, a cuyo efecto mantendrá servicios gratuitos de información y de gestiones ante las autoridades que correspondan para su reconocimiento.

Art. 34. — Los agrarios mientras no sean propietarios, estarán obligados a seguir las normas de cultivo y explotación que les sean indicadas por el consejo o sus representantes especialmente autorizados.

CAPITULO XI

Consejos agrarios

Art. 35. — El consejo agrario nacional procederá a instituir en las colonias oficiales y en las distintas zonas del país, donde sea necesario y en el número que juzgue preciso para orientar las explotaciones agrarias, racionalizar la producción y tutelar los intereses de los trabajadores agrarios, consejos agrarios que estarán formados por tres miembros que desempeñarán sus cargos ad honórem.

Los miembros de los consejos agrarios serán elegidos por el consejo agrario nacional, entre los principales productores de la zona en que se creen, ejerciendo la presidencia el gerente del Banco de la Nación, el agrónomo regional o el presidente de la cooperativa, en caso de existir en la zona donde se establezcan, o en su defecto el productor que el consejo agrario nacional determine.

Art. 36. — Los consejos agrarios tendrán las siguientes funciones:

1º — Coadyuvar con la acción del Ministerio de Agricultura en todo lo relativo a la orienta-

ción y racionalización de la producción ganadera y agrícola, a la sanidad vegetal y a la organización de la industrialización y del comercio de los productos agropecuarios;

2º — Colaborar en la forma que reglamentará el consejo agrario nacional, con éste, en la acción que debe desarrollar para la ejecución de la presente ley y de la reglamentación de la misma;

3º — Colaborar con la sección de Crédito Agrario del Banco de la Nación Argentina para facilitar la canalización del crédito agrario a los pequeños agricultores y ganaderos;

4º — Actuar como delegados del Ministerio de Agricultura en la acción que éste desarrolla para combatir y extinguir las distintas plagas de la agricultura;

5º — Intervenir en calidad de amigables compondores en los conflictos que se suscitaren con motivo del trabajo de los productores agropecuarios y representarlos en sus gestiones ante el Ministerio de Agricultura y los poderes públicos nacionales, provinciales y municipales;

6º — Fomentar con una propaganda permanente y eficaz, la organización de cooperativas de producción, de comercialización y de consumo.

CAPITULO XII

Fondo de ahorro

Art. 37. — Todo comprador, después de abonar el interés por saldo de precio y su amortización, de acuerdo con el artículo 28, y todo arrendatario después de abonar el precio de su arrendamiento de conformidad con el artículo 31, deberá abonar, además, una suma variable para constituir el «fondo de ahorro», cuyo monto anualmente no podrá exceder del 4 % del precio de venta.

Art. 38. — El consejo fijará anualmente y en cada región el monto de las sumas que los propietarios o arrendatarios deberán ingresar en el «fondo de ahorro». Si los resultados de la explotación anual del predio no permitieran, a juicio del consejo, el cobro de esas sumas, podrá exonerarlos de su pago.

Art. 39. — Las sumas que se abonen en virtud de lo dispuesto por el artículo 39 se depositarán en el Banco de la Nación Argentina a nombre del comprador o arrendatario y a la orden del consejo, en títulos nacionales. Los intereses de estas sumas tendrán el mismo destino.

Art. 40. — El «fondo de ahorro» se destinará para:

- a) Aumentar el fondo de amortización para saldar el precio del predio adquirido, en la forma que el consejo determine;
- b) Reunir la cantidad necesaria para adquirir el predio arrendado;
- c) Servir como fondo de reserva para las contingencias agrícolas, mientras no se haya instituido el seguro agrario.

Solamente cuando el «fondo de ahorro» exceda del 10 % de precio de venta, el excedente se destinará a amortizar su saldo.

Art. 41. — Si el agricultor no pudiese abonar el saldo del precio en las condiciones establecidas e invocare el caso de fuerza mayor como causa de pérdida de sus cosechas, el consejo podrá hacer uso de las sumas destinadas a «fondo de ahorro» para el pago de las anualidades a que se refiere el artículo 28.

El consejo, por unanimidad, podrá suspender transitoriamente el pago total o parcial de los servicios de amortización e intereses de la deuda contraída por los compradores de predios, así como la proveniente por precio de arrendamiento, teniendo en cuenta los antecedentes de cada caso y siempre que no haya saldo disponible en el «fondo de ahorro».

Art. 42. — Una vez efectuada la transferencia a que se refiere el artículo 29, cesará la obligación del comprador de contribuir a formar el «fondo de ahorro», y el consejo aplicará el saldo que resultare para amortización de su deuda.

CAPITULO XIII

Rescisión de contratos

Art. 43. — Todo contrato podrá ser rescindido, si el agricultor:

- a) No reside en el predio con su familia y no lo trabaja;
- b) Deja de pagar una anualidad parcial o totalmente, siempre que esa falta de pago no fuera imputable, a juicio del consejo, a causa de fuerza mayor;
- c) No cumpla con cualquiera de las otras disposiciones de esta ley o del contrato de compraventa o de arrendamiento con opción de compra.

Art. 44. — Siempre que no sea por falta de pago, toda resolución del consejo que declare rescindido un contrato, deberá ser adoptada por dos tercios de la totalidad de sus miembros y comunicada en la época que determine el contrato, la notificación se hará por intermedio del juez de paz del lugar. El comprador tendrá un plazo mínimo de seis meses para desalojar y el arrendatario un plazo mínimo de sesenta días, previo informe del consejo local.

Art. 45. — Queda facultado el consejo a proceder sin forma alguna de juicio, al embargo hasta el 33 % de la renta bruta de cada predio para aplicarla al pago de las anualidades a que se refieren los artículos 28 y 31.

Art. 46. — Queda facultado el consejo a proceder a la venta del predio, por sí y sin forma alguna de juicio, en remate público y con base total de la deuda, si el comprador no hubiese abonado las anualidades a que se refiere el artículo 28.

Art. 47. — En caso de fallecimiento del comprador, el consejo podrá hacer uso del derecho de rescisión, y ceder nuevamente el predio a alguno de los herederos que considere capaz de continuar la explotación agraria, o a un tercero si no hubiera herederos en esas condiciones. En este caso, depositará a la orden del juez y a nombre de la sucesión el monto de las amortizaciones y el valor estimado de las mejoras, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.

Art. 48. — En caso de fallecimiento del arrendatario con opción de compra, queda facultado el consejo para rescindir el contrato. Para una nueva adquisición del predio, deberá preferir a la viuda del locatario o a uno de sus hijos mayor de edad. Declarada la caducidad de la promesa de venta por fallecimiento y no adjudicado el predio a un heredero, el consejo fijará una indemnización por las mejoras efectuadas, de acuerdo a lo dispuesto por esta ley, cuyo importe depositará a la orden de la sucesión respectiva.

CAPITULO XIV

Indemnización de mejoras

Art. 49. — El consejo al declarar rescindido el contrato devolverá lo amortizado, deduciendo lo necesario a fin de que resulte abonado el 3 % del valor de la venta como arriendo anual durante el tiempo que ocupó el lote, e indemnizará las mejoras en el estado en que se encuentren al recibir la posesión del predio, siempre

que no haya sufrido deterioros imputables al agricultor con motivo del desalojo.

Art. 50. — El justiprecio de las mejoras y el monto de la indemnización serán fijados por el consejo previo asesoramiento del consejo agrario local y audiencia del interesado.

CAPITULO XV

Explotación agraria suburbana

Art. 51. — El consejo agrario nacional propenderá al parcelamiento y formación de pequeñas explotaciones agrarias intensivas en los ejidos de las ciudades y villas, conviniendo con las respectivas comunas la forma de realizar la tarea.

Art. 52. — Las explotaciones ejidales se ajustarán a las normas generales establecidas para las rurales, debiéndose tender a formar especialmente pequeñas quintas y granjas. En cada ejido con más de treinta parcelas se organizará una cooperativa y un consejo agrario.

CAPITULO XVI

Colonización privada

Art. 53. — Los propietarios que destinen inmuebles a la colonización y acepten las normas que dicte el consejo con aprobación del Poder Ejecutivo, quedan eximidos por el término de cinco años y por la extensión colonizada, del impuesto territorial desde la fecha en que se extiendan a favor de los colonos respectivos contratos de venta. Quedan, también, exentos de todo impuesto de sellado y derecho de inscripción.

Art. 54. — El consejo gestionará de los gobiernos de provincia la exención del impuesto territorial para los inmuebles a que se refiere el artículo anterior.

Art. 55. — El consejo agrario nacional podrá aceptar inmuebles privados que encuadren dentro de las condiciones que esta ley establece, para colonizarlos dentro de las normas de la misma, cobrando únicamente los gastos que por tal concepto se realicen y acreditando los créditos que por ese hecho resultaren.

CAPITULO XVII

Recursos del consejo

Art. 56. — El consejo agrario nacional dispondrá de los siguientes recursos:

- a) Hasta la cantidad de \$ 30.000.000 m/n., que el Poder Ejecutivo entregará con imputación a esta ley, dentro de los noventa días de promulgada, provenientes de rentas generales o del producido del fondo de beneficios de cambio, o de una operación de crédito interno o externo, pudiendo usarse de los tres medios a la vez;
- b) Hasta la cantidad de \$ 70.000.000 m/n., que el Poder Ejecutivo desde el año siguiente a la promulgación de esta ley entregará anualmente en cuotas de pesos 10.000.000 m/n., o su equivalente en títulos externos o internos;
- c) El producido de la venta y arrendamientos de las tierras regidas por la presente ley;
- d) Los fondos que se recauden en virtud de lo dispuesto por las leyes números 4.167, 5.559 y 10.247, y sus reglamentaciones vigentes;
- e) El producido de las comisiones, de los intereses punitivos, derechos de inspección, etcétera, que fije el consejo y de los legados, donaciones, etcétera, que se le hagan. Estos fondos serán depositados en una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina a la orden del consejo.

Art. 57. — Mientras no se empleen en los destinos previstos por esta ley, los recursos a que se refiere el artículo anterior, el consejo podrá invertirlos hasta un 90 % en títulos nacionales. Los intereses que devenguen estos títulos formarán parte de los recursos del consejo.

CAPITULO XVIII

Disposiciones generales

Art. 58. — Las tierras situadas en las fronteras del país, se destinarán a la formación de colonias agrarias pobladas con familias de ciudadanos nativos. A este efecto decláranse de utilidad pública, las que se encuentren en poder de particulares, las provincias o municipalidades.

Art. 59. — El consejo agrario nacional podrá en las tierras de que disponga, concertar con empresas o compañías capacitadas, la explotación temporal de bosques, sujetas a las condiciones y formas que determine en los casos que la tierra fuese necesaria a los fines de esta ley.

Art. 60. — El consejo podrá adelantar el primer año de explotación a todo arrendatario con opción de compra, semillas, árboles frutales, animales, instrumentos de labranza, materiales de construcción, etcétera, hasta un máximo de \$ 6.000 m/n. cuyo importe restituirá el deudor, en los plazos y forma que determine la reglamentación.

No podrá invertir el consejo en estas operaciones más del 10 % de los recursos que le acuerda la presente ley.

Art. 61. — La suma total que resulte de la venta fraccionada de cada inmueble, no podrá ser inferior a su precio neto de costo, ni excederlo en más de 15 %, que se invertirá exclusivamente en mejoras.

Art. 62. — Los predios vendidos, de acuerdo con lo dispuesto por esta ley, no podrán ser afectados a ningún gravamen que no sea el que corresponda a la hipoteca a favor del consejo agrario nacional, mientras no haya sido cancelada íntegramente, o transferido el crédito al Banco Hipotecario Nacional.

Art. 63. — El predio vendido, las mejoras adheridas al mismo, los frutos del suelo arrendado o vendido y los elementos de trabajo de los agricultores, serán inembargables por deudas contraídas con anterioridad a la firma del contrato de arrendamiento con opción de compra o de compraventa. Serán también inembargables por deudas contraídas con posterioridad a la firma del respectivo contrato, la tierra, las mejoras y los elementos de trabajo del agricultor, salvo el que pudiera realizarse a los efectos del préstamo establecido en los artículos 60 y 67.

Art. 64. — Los efectos del registro de hipoteca durarán hasta la completa extinción de la deuda.

Art. 65. — El consejo cobrará el 6 % de interés por toda deuda de plazo vencido, salvo disposición expresa en contrario adoptada por aquél en cada caso.

Art. 66. — No se podrá adjudicar más de un predio a una misma persona ni a sus hijos o padres, a menos que éstos formen otra familia agricultora, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y lo que establezca su reglamentación.

Exceptúase de lo dispuesto en el párrafo anterior, toda persona que tenga cuatro hijos varones que vivan y trabajan con ella, en cuyo caso podrá adquirir tantos predios como veces reúna este requisito.

Art. 67. — El consejo procurará ubicar especialmente en las explotaciones oficiales a los hijos de agrarios y a los egresados de las escuelas de agricultura y ganadería, con preferencia a los casados, pudiendo habilitarlos con las sumas necesarias para instalaciones y máquinas, hasta la cantidad de \$ 6.000 m/n., que serán reintegrados en la forma que determine el mismo consejo.

Art. 68. — Toda enajenación del predio o transferencia del contrato de arrendamiento con opción de compra que se efectúe sin autorización del consejo, será nula de pleno derecho, salvo que se haya abonado el total del precio de venta.

Art. 69. — Los compradores de predios quedan exonerados del pago de todo impuesto nacional que grave la propiedad raíz, por el término de diez años, a contar desde la fecha de la escrituración.

Art. 70. — El consejo agrario estará exento de todo impuesto en sus operaciones y el cobro de sus créditos se realizará por vía de apremio.

Las maquinarias, equipos, semillas y materiales que sea necesario importar, quedan libres de derechos de aduana.

Art. 71. — El consejo agrario nacional queda autorizado para solicitar la cooperación de los gobiernos de provincia y de las municipalidades, así como la colaboración de las instituciones particulares en la acción de propaganda y divulgación de la presente ley.

Art. 72. — Incorpórase al consejo agrario nacional, la actual Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura con todo el personal que le asigne el presupuesto vigente. La incorporación se efectuará en el momento que el Poder Ejecutivo lo considere conveniente dentro de un plazo máximo de tres años, contando desde la promulgación de esta ley. Una vez incorporada, la Dirección de Tierras dependerá en lo sucesivo del consejo agrario nacional, que tendrá a su cargo el cumplimiento de las leyes números 4.167, 5.559 y 10.247.

Art. 73. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a las de la presente ley.

Art. 74. — Comuníquese, etc.

Disposición transitoria: Hasta tanto se constituyan los consejos agrarios a que se refiere el artículo 35, el representante de los mismos, a que alude el artículo 3º, será designado por el Poder Ejecutivo eligiéndolo entre productores auténticos. Dicho miembro del consejo cesará en su cargo tan luego se nombre a propuesta de los consejos agrarios en la forma que reglamentará

el Poder Ejecutivo, el que debe ejercer la representación de éstos.

Sala de la comisión, septiembre 8 de 1938.

Benjamín Palacio. — Bernardino Horne. — Daniel Amadeo y Videla (h.). — Carmelo I. Astesiano. — Juan Labayon. — Nicolás Repetto. — Tebaldo Zavala Ortiz.

ANTECEDENTES

Proyecto del Poder Ejecutivo

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPITULO I

Comisión nacional de colonización

Artículo 1º — Todas las medidas tendientes a estabilizar la explotación de los inmuebles por el régimen de la pequeña propiedad rural, mediante la creación de núcleos a base de la residencia personal y el trabajo familiar, serán tomadas con sujeción a las disposiciones de la presente ley.

Art. 2º — Créase la comisión nacional de colonización, que funcionará con la autonomía que le acuerda esta ley. Será una institución de derecho público, que tendrá capacidad para actuar privada y públicamente, de acuerdo a lo que establezcan las leyes fundamentales que afecten su funcionamiento, siendo sus miembros personal y solidariamente responsables por los actos de la comisión, salvo expresa constancia en acta de quien estuviera en contra de sus resoluciones.

Art. 3º — La comisión estará integrada por un presidente y dos directores nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, entre personas de reconocidos conocimientos técnico-prácticos y dedicada dedicación a los problemas vinculados con la economía agraria y la colonización.

Art. 4º — Los miembros de la comisión podrán ser reelectos. El presidente ejercerá sus funciones durante un período de seis años y los directores por igual tiempo, renovándose éstos cada tres años y por sorteo la primera vez.

El presidente de la comisión tendrá la representación legal de la misma y los directores lo reemplazarán por turno anual en casos de impedimento.

Art. 5º — Tanto el presidente como los directores deberán ser ciudadanos argentinos, mayores de veinticinco años de edad y tener cinco años de ejercicio de la ciudadanía, si fueran naturalizados.

Art. 6º — La remuneración del presidente será de dos mil quinientos pesos moneda nacional mensuales y la de los directores de mil pesos moneda nacional mensuales.

Art. 7º — No podrán ser miembros de la comisión:

- a) Los que desempeñen cualquiera otra función o empleo nacional, provincial o municipal, excepto los de la enseñanza;
- b) Los que se hallen en estado de quiebra o con curso civil, o que tengan en gestión arreglos con sus acreedores bancarios.

CAPITULO II

Funciones y deberes de la comisión

Art. 8º — La comisión nacional de colonización tendrá las siguientes facultades y deberes:

- a) Administrar, arrendar y enajenar los inmuebles a que se refiere la presente ley, así como realizar las demás operaciones vinculadas con sus fines;
- b) Estudiar planes de constitución de pequeñas propiedades rurales, que contemplen metódica y progresivamente todo el territorio de la República, teniendo en cuenta las características agrícolas de cada zona, las vías de comunicación, distancia de los mercados consumidores y distribución de la población en el país, y someterlos a la aprobación del Poder Ejecutivo;
- c) Convenir con los Bancos oficiales, instituto movilizador y otras instituciones de crédito, la incorporación al régimen de la presente ley de los inmuebles de su propiedad o que estuvieran gravados o aquéllos, en las condiciones que se estipulen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º, inciso b);
- d) Adquirir en remates judiciales o del Banco Hipotecario Nacional, inmuebles del dominio privado;
- e) Proponer al Poder Ejecutivo la adquisición directa o expropiación de inmuebles en cualquier punto del país, a cuyo efecto se declaran de utilidad pública los que fueren necesarios para la ejecución de los planes a que se refiere el inciso b);
- f) Realizar, con aprobación del Poder Ejecutivo, convenios con grupos de familias de agricultores residentes en el extranjero o con instituciones de solvencia y reconocida responsabilidad para radicarlas en la República, mediante contratos de compraventa o de arrendamiento, con opción de compra de los inmuebles que a este fin destine, siempre que esas familias dispongan de medios para iniciar la explotación agraria y provengan de regiones de fácil asimilación al medio argentino;
- g) Facilitar a los agricultores acogidos a las disposiciones de esta ley, la comercialización de los productos de sus explotaciones rurales, a fin de procurarles las mejores condiciones;
- h) Aplicar dentro de cada plan, siempre que los juzgue conveniente, las leyes del hogar, crédito agrícola, cooperativas, u otras que se dicten en el futuro vinculadas con la economía agraria y la colonización;
- i) Organizar una propaganda permanente destinada a difundir los propósitos de esta ley y el conocimiento auténtico de las zonas agrarias del país;
- j) Nombrar, a propuesta del presidente, el personal técnico y administrativo mediante concursos de selección entre personas que ofrezcan garantías de capacidad, debiendo exigir, para aquellos cargos que lo requieran, títulos expedidos por las universidades o institutos nacionales especializados;
- k) Aprobar su presupuesto anual de gastos, con la obligación de someterlo a la aprobación del Poder Ejecutivo, que podrá introducir modificaciones que no constituyan aumentos y poner

- lo en vigencia hasta que sea considerado por el Honorable Congreso;
- l) Dictar su reglamento interno;
- m) Elevar cada año al Honorable Congreso una memoria descriptiva de la actividad desarrollada.

CAPITULO III

Disposiciones generales

Art. 9º — Para los fines de esta ley se utilizarán los siguientes inmuebles:

- a) Las tierras fiscales que se consideren aptas;
- b) Las que estén en poder de los ministerios, de los bancos oficiales o cualquiera de las otras reparticiones públicas nacionales y no se utilicen para fines del Estado o para los especiales que determinaron su adquisición, o que en adelante pasen a su poder o se adjudiquen en pago de sus créditos, en virtud de las leyes y reglamentos que las rigen, o de convenios que celebren con sus deudores;
- c) Las del dominio privado o de las provincias o municipalidades, que sean ofrecidas para ser incorporadas al régimen de esta ley.

Art. 10. — Será considerado apto a los fines de la presente ley, previa comprobación que se hará en la forma que la reglamentación establezca, todo inmueble que:

- 1º No se encuentren a mayor distancia de treinta kilómetros de estación de ferrocarril o de camino de pavimento firme, o de cuatrocientos kilómetros de puerto o de doscientos kilómetros de mercados interiores con adecuada capacidad de absorción;
- 2º Se trate de una superficie suficientemente extensa como para permitir la dirección y administración racional y económica de las pequeñas propiedades rurales a constituirse;
- 3º Sus condiciones ecológicas aseguren la explotación agrícola por el trabajo familiar en su máximo de eficiencia, dentro de prácticas aconsejadas por la técnica y experiencia de la zona;
- 4º Pueda obtenerse una adecuada rotación de cultivos y la explotación de especies animales;
- 5º El mercado sea de fácil acceso para el transporte y venta de los productos de la explotación, conforme a las prácticas corrientes;
- 6º El costo del transporte se encuentre en relación económica aceptable con el valor del producto.

Art. 11. — Para los nuevos planes de constitución de pequeñas propiedades rurales, serán preferidos los inmuebles sitos en las provincias que dicten leyes, que dispongan:

- a) Exención por cinco años del impuesto territorial a los inmuebles que se incorporen al régimen de la presente ley, sea por compra o convenio con instituciones oficiales, mientras no sean arrendados o vendidos a los agricultores;
- b) Exención de la contribución territorial por un plazo mínimo de cinco años, a partir de la fecha de la escrituración, a los agricultores que instale la comisión;

- c) Exención de todos los impuestos, inclusive el de sellado, a las actividades de la comisión;
- d) Instalación de escuelas, justicia de paz, policía y construcción, conservación y reparación de caminos para el transporte de los productos a estación o puerto.

Art. 12. — La cooperación de los gobiernos de provincia y de las municipalidades, será solicitada por el Poder Ejecutivo para los fines que esta ley determina.

Art. 13. — El Poder Ejecutivo recabará la colaboración de las instituciones particulares en la acción de propaganda y divulgación de la presente ley.

Art. 14. — El Poder Ejecutivo exigirá el cumplimiento de esta ley, por intermedio del Ministerio de Agricultura.

CAPITULO IV

Adquisición de inmuebles.

Art. 15. — Previa inspección efectuada por dos técnicos de su personal, la comisión, para la adquisición de inmuebles, se guiará por estas normas fundamentales:

- a) Toda adquisición será resuelta por unanimidad de sus miembros;
- b) La tasación del inmueble se hará por el valor en el mercado y por el cálculo de la renta neta probable, capitalizada al 5 ½ %. Este tipo de interés podrá ser modificado por el Poder Ejecutivo, a propuesta unánime de la comisión;
- c) Para la tasación se tendrá en cuenta:

- 1º Los precios de los productos en un número de años no inferior a cinco, elegidos entre los que no puedan considerarse afectados por fenómenos de carácter extraordinario;
- 2º Los rendimientos promedios en las zonas en un periodo de cinco años.

Art. 16. — La comisión, en ningún caso, podrá adquirir un inmueble a un precio mayor que el menor fijado por cualquiera de sus miembros. El precio aconsejado, se mantendrá en reserva hasta después de la subasta o de solicitar al Poder Ejecutivo la expropiación del inmueble.

El presidente o la persona que éste designe, hará las adquisiciones de acuerdo a lo que determine la reglamentación respectiva.

Art. 17. — Si los considera aptos para los fines de la presente ley, la comisión podrá aceptar la transferencia de inmuebles adjudicados a los bancos oficiales, instituto movilizador, ministerios o cualquier otra repartición pública nacional, previa aceptación por éstos del precio y condiciones que aquella estipule.

Si las condiciones y precio propuestos no fueran aceptados, el inmueble será ofrecido a la venta en remate público, dentro de los sesenta días de la notificación que la comisión hará a la entidad o repartición pública propietaria. En ese acto la comisión deberá sostener o podrá mejorar la base de conformidad con las normas del artículo 15.

Si la comisión se adjudica el inmueble, abonará el precio en anualidades vencidas con amortización acumulativa del 1 % e interés del 3 % constituyendo hipoteca a favor del vendedor.

CAPITULO V

Subdivisión y mejoras

Art. 18. — Adquirido un inmueble, la comisión procederá a subdividirlo en lotes cuya superficie quedará subordinada a la naturaleza y topografía del terreno y deberá calcularse en cada región teniendo en cuenta que el agricultor pueda realizar la mayor parte de la labor agrícola utilizando su trabajo personal y el de su familia y que su capacidad productiva deberá alcanzar a cubrir sus principales necesidades de vida.

Queda autorizada la comisión para vender en remate público las fracciones sobrantes de una subdivisión, que no resulten aptas a los fines de esta ley, o que por sus mejoras costosas o inútiles, no permitan una pequeña explotación.

Art. 19. — La comisión podrá introducir las mejoras que estime económicamente necesarias en los predios a ofrecerse a los agricultores.

Podrá además reservar el terreno destinado a escuela, construir su edificio y convenir con el Consejo Nacional de Educación o autoridades provinciales su instalación, donando el inmueble a quien corresponda.

Art. 20. — La comisión, antes de ofrecer los predios, iniciará las gestiones pertinentes para proporcionar a los agricultores escuela, justicia de paz y policía, y, una vez instalados, tomará las medidas necesarias para estimular y fomentar la constitución y funcionamiento de sociedades económicas y culturales.

Art. 21. — La comisión procurará que los caminos se mantengan en buen estado todo el año, a cuyo efecto solicitará la colaboración de la Dirección Nacional de Vialidad, gobiernos de provincia y municipalidades.

El Ministerio de Agricultura facilitará, sin cargo, a la comisión todos los elementos necesarios y posibles para el arbolado y embellecimiento de los caminos de acceso a los predios.

CAPITULO VI

Normas de cultivo y explotación

Art. 22. — La explotación de los predios deberá basarse principalmente en los tipos que tengan suficiente tradición en la zona.

Art. 23. — Cualquiera sea el tipo de explotación, los diversos cultivos y labores rurales se harán procurando que los miembros hábiles de la familia agricultora empleen en trabajo útil el mayor número de días del año.

Art. 24. — La comisión, de común acuerdo con el agricultor, podrá asumir la dirección técnica de un predio en cada colonia, garantizando una renta mínima razonable.

Los agricultores, mientras no sean propietarios, estarán obligados a seguir las normas de cultivo y explotación que les sean indicadas por la comisión o sus representantes especialmente autorizados.

CAPITULO VII

Venta de predios

Art. 25. — La comisión podrá vender directamente el predio al agricultor que abone, por lo menos, el 10 % del precio de venta al contado, siempre que no sea propietario y reúna los demás requisitos prescriptos por esta ley.

Art. 26. — La venta de predios se hará previa comprobación de la capacidad económica, profesional y personal de los agricultores. Se entiende por la primera, la posesión de elementos de trabajo y animales en cantidad suficiente para su explotación. La segunda, se comprobará por la actuación en trabajos agrícolas similares, durante un período no menor de tres años; y la tercera, se registrará por las condiciones que determine el reglamento de la comisión, aprobado por el Poder Ejecutivo.

Art. 27. — Para la venta de los predios serán preferidos, en primer término, los agricultores que:

- Formen familia apta para colaborar en el trabajo del predio;
- Sean de nacionalidad argentina, o extranjeros con residencia mayor de cinco años, y estén domiciliados en la región.

Art. 28. — El saldo de precio de venta será abonado:

- Con una amortización anual acumulativa del $\frac{1}{2}$ % e interés del $2\frac{1}{2}$ %, hasta reducirlo al 50 %. Los vencimientos se fijarán en la fecha de mayor ingreso de la explotación;
- Con una amortización anual acumulativa e interés iguales a los que estén en vigencia en el Banco Hipotecario Nacional, el 50 % restante.

Los compradores podrán en cualquier época efectuar amortizaciones extraordinarias en la forma que determine la reglamentación.

Art. 29. — Cuando se haya reducido al 50 % el saldo del precio de venta del crédito hipotecario, la comisión solicitará su transferencia al Banco Hipotecario Nacional recibiendo las cédulas por su valor nominal.

Art. 30. — Mientras los compradores no hayan cancelado o transferido el saldo de su deuda al Banco Hipotecario Nacional, no podrán enajenar el predio sin consentimiento de la comisión y aceptación por ésta del nuevo adquirente. Las transferencias deberán ser resueltas por la comisión dentro de los sesenta días de formulado el pedido correspondiente. Sin este requisito los registros de la propiedad no anotarán transferencia alguna de dominio de los predios vendidos a los agricultores por la comisión.

Art. 31. — Los agricultores que reúnan los requisitos de esta ley y no puedan abonar el 10 % del precio de venta al contado, podrán arrendar los predios que ofrezca la comisión con opción de compra, hasta por el término de cinco años a un precio igual al 3 % del precio de venta.

La comisión hará conocer estos ofrecimientos por avisos publicados durante treinta días, por lo menos.

Art. 32. — Los agricultores que al término del contrato de arrendamiento hayan cumplido con las obligaciones impuestas por aquél y los requisitos prescriptos por esta ley, podrán adquirir el predio que trabajan, siempre que en el acto de suscribir la escritura correspondiente, abonen el 10 % del precio de venta.

Art. 33. — El contrato de arrendamiento con opción de compra podrá ser renovado:

- Si el arrendatario no ha podido reunir el fondo necesario para adquirir el predio;
- Si el arrendatario no ha rendido, a juicio de la comisión, suficientes pruebas de capacidad para transformarse en propietario.

CAPITULO VIII

Fondo de ahorro

Art. 34. — Todo comprador después de abonar el interés por saldo de precio y su amortización de acuerdo con el artículo 28 y todo arrendatario después de abonar el precio de su arrendamiento de su conformidad con el artículo 31, deberá abonar además una suma variable para constituir el «fondo de ahorro» cuyo monto anualmente no podrá exceder del 4 % del precio de venta.

Art. 35. — La comisión fijará anualmente y en cada región el monto de las sumas que los propietarios o arrendatarios deberán ingresar en el «fondo de ahorro». Si los resultados de la explotación anual del predio no permitieran, a juicio de la comisión el cobro de estas sumas, podrá exonerarlos de su pago.

Art. 36. — Las sumas que se abonen en virtud de lo dispuesto por el artículo 34, se depositarán en el Banco Central a nombre del comprador o arrendatario y a la orden de la comisión en títulos nacionales. Los intereses de estas sumas tendrán el mismo destino.

Art. 37. — El fondo de ahorro se destinará en:

- a) Aumentar el fondo de amortización para saldar el precio del predio adquirido, en la forma que la comisión determine;
- b) Reunir la cantidad necesaria para adquirir el predio arrendado;
- c) Servir como fondo de reserva para las contingencias agrícolas.

Solamente cuando el fondo de ahorro exceda del 10 % del precio de venta, el excedente se destinará a amortizar su saldo.

Art. 38. — Si el agricultor no pudiese abonar el saldo de precio en las condiciones establecidas e invocar el caso de fuerza mayor como causa de pérdida de su cosecha, la comisión podrá hacer uso de las sumas destinadas a fondo de reserva para el pago de las anualidades a que se refiere el artículo 28.

Art. 39. — Una vez efectuada la transferencia a que se refiere el artículo 29, cesará la obligación del comprador de contribuir a formar el «fondo de ahorro» y la comisión depositará a la orden del comprador el saldo que resultare en una cuenta similar en el Banco de la Nación Argentina.

CAPITULO IX

Rescisión de contratos

Art. 40. — Todo contrato será rescindido si el agricultor:

- a) No reside y trabaja el predio con su familia;
- b) Deja de pagar una anualidad parcial o totalmente, siempre que esa falta de pago no fuera imputable, a juicio de la comisión, a causa de fuerza mayor;
- c) No cumple con cualquiera de las otras disposiciones de esta ley o del contrato de compraventa o de arrendamiento con opción a compra.

Art. 41. — Siempre que no sea por falta de pago, toda resolución de la comisión que declare rescindido un contrato, deberá ser adoptada por unanimidad y comunicada en la época que determine el contrato. La noti-

ficación se hará por intermedio del juez de paz del lugar. El comprador tendrá un plazo mínimo de un año para desalojar y el arrendatario, un plazo de treinta días.

Art. 42. — La comisión hará constar en los contratos su facultad de proceder por sí, sin forma alguna de juicio, al embargo hasta el 33 % de la renta bruta de cada predio para aplicarla al pago de las anualidades a que se refieren los artículos 28 y 31.

Art. 43. — La comisión hará constar también en los contratos, su facultad de proceder a la venta del predio por sí y sin forma alguna de juicio, en remate público y con base total de la deuda, si el comprador no hubiese abonado las anualidades a que se refiere el artículo 28.

Art. 44. — En caso de fallecimiento del comprador, la comisión podrá hacer uso del derecho de rescisión y ceder nuevamente el predio a alguno de los herederos que considere capaz de continuar la explotación agraria, o a un tercero si no hubieran herederos en esas condiciones. En este caso, depositará a la orden del juez y a nombre de la sucesión el monto de las amortizaciones y el valor estimado de las mejoras, de acuerdo con lo dispuesto por esta ley.

CAPITULO X

Indemnización de mejoras

Art. 45. — La comisión, al declarar rescindido el contrato devolverá lo amortizado e indemnizará las mejoras en el estado en que se encuentren al recibir la posesión del predio, siempre que no haya sufrido deterioros imputables al agricultor con motivo del desalojo.

Art. 46. — El justiprecio de las mejoras y el monto de la indemnización serán fijados por la comisión. Si fuera adoptado por unanimidad será irrevocable y, en caso contrario, podrá ser apelado ante un tribunal constituido por dos productores y el juez federal de la sección, quien los designará de una lista de treinta, confeccionada anualmente por la comisión.

Art. 47. — El procedimiento ante el tribunal a que se refiere el artículo anterior, será verbal y actuado. Después de oír al apelante, o recibir el escrito presentado por el mismo, el tribunal dará traslado a la comisión o su representante legal en el domicilio que se haya constituido en el contrato, por el término de diez días.

La comisión podrá contestar por escrito o verbalmente. En este caso se dejará constancia en acta de lo pertinente.

El tribunal dictará sentencia dentro de los treinta días subsiguientes y su fallo será definitivo e inapelable. La notificación podrá hacerse verbalmente, por cédula o por telegrama.

El tribunal podrá usar gratuitamente del telégrafo nacional para las comunicaciones y notificaciones y la correspondencia que expida gozará de libre franqueo.

Art. 48. — Para los arrendamientos a que se refiere esta ley, no regirán las disposiciones de la ley número 11.627.

CAPITULO XI

Explotación agraria suburbana

Art. 49. — La comisión organizará el cultivo de parcelas próximos a centros de población con características industriales, en lugares donde los medios de transporte permitan el traslado económico de los obreros o empleados diariamente del lugar habitual de trabajo, o del que habiten, a la parcela de tierra.

Art. 50. — La parcela de tierra y el tipo de explotación será calculado teniendo en cuenta que el obrero o empleado propietario pueda realizar, personal o familiarmente la mayor parte de la labor agrícola en el tiempo que le deje libre su ocupación habitual.

Art. 51. — Queda autorizada la comisión para:

- Realizar convenios para construir una casa habitación cargando su costo en el precio de venta de la parcela;
- Realizar convenios con las autoridades municipales para instalar en los espacios libres, jardines o huertas que permitan la enseñanza de esas labores a los obreros o empleados residentes en los centros de población, destinándose su producido a uso personal de los obreros o empleados inscriptos;
- Dirigir, previo consentimiento de su propietario, la explotación de la huerta, jardín, etcétera, de lotes sitios en el ejido de los centros de población.

Art. 52. — La comisión establecerá, en cada caso, la forma y condiciones en que realizará la explotación agraria suburbana.

CAPITULO XII

Recursos de la comisión

Art. 53. — La comisión nacional de colonización dispondrá de los siguientes recursos:

- La cantidad de 20.000.000 de pesos moneda nacional que el Poder Ejecutivo entregará dentro de los noventa días de la promulgación de esta ley, con imputación a la misma;
- El producido de la venta y arrendamiento de las tierras regidas por la presente ley;
- Los fondos que se recauden en virtud de las disposiciones de las leyes números 4.167, 5.559 y 10.247 y sus reglamentaciones vigentes;
- El producido de las comisiones, intereses punitivos, derechos de inspección, etcétera, que fije la comisión.

Estos fondos serán depositados en una cuenta especial en el Banco Central de la República a la orden de la comisión.

Art. 54. — Mientras no se empleen en los destinos previstos por esta ley, los recursos a que se refiere el artículo anterior, podrá invertirlos la comisión hasta un 90 % en títulos nacionales. Los intereses que devenguen estos títulos formarán parte de los recursos de la comisión.

CAPITULO XIII

Disposiciones especiales

Art. 55. — La suma total que resulte de la venta fraccionada de cada inmueble, no podrá ser inferior a su precio neto de costo, ni excederlo en más del 15 por ciento.

Art. 56. — La comisión podrá también enajenar directamente predios a agricultores que a su juicio estén en condiciones de ser compradores, aunque no llenen los requisitos previstos por el artículo 2º, siempre que abonen por lo menos el 30 % del precio de venta al contado y acepten por el saldo una hipoteca del mismo tipo de amortización e interés fijados por el Banco Hipotecario Nacional.

Art. 57. — Los predios vendidos de acuerdo con lo dispuesto por esta ley, no podrán ser afectados a ningún gravamen que no sea el que corresponda a la hipoteca a favor de la comisión nacional de colonización, mientras no haya sido cancelada íntegramente, o transferido el crédito al Banco Hipotecario Nacional.

Art. 58. — El predio vendido, las mejoras adheridas al mismo, los frutos del suelo arrendado o vendido y los elementos de trabajo de los agricultores, serán inembargables por deudas contraídas con anterioridad a la firma del contrato de arrendamiento con opción de compra o de compraventa. Serán también inembargables por deudas contraídas con posterioridad a la firma del respectivo contrato, la tierra, las mejoras y los elementos de trabajo del agricultor.

Art. 59. — Los efectos del registro de hipoteca, durarán hasta la completa extinción de la deuda.

Art. 60. — La comisión cobrará el 6 % de interés por toda suma que se adeude, salvo disposición expresa en contrario adoptada por aquélla en cada caso.

Art. 61. — No se podrá adjudicar más de un predio a una misma persona ni a sus hijos o padres, a menos que éstos formen una familia agricultora, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y lo que establezca su reglamentación.

Art. 62. — Toda enajenación del predio o transferencia del contrato de arrendamiento con opción de compra que se efectúe sin autorización de la comisión, será nula de pleno derecho, salvo que se haya abonado el total del precio de venta.

Art. 63. — Los compradores de predios quedan exonerados del pago de todo impuesto nacional que grave la propiedad raíz, por el término de diez años, a contar desde la fecha de escrituración.

Los contratos que se celebren en virtud de lo dispuesto por esta ley, quedarán libres de impuestos fiscales nacionales, de sellado y derecho de inscripción.

Art. 64. — Incorporase a la comisión nacional de Colonización, la actual Dirección de Tierras y Colonias del Ministerio de Agricultura, con todo el personal que le asigne el presupuesto vigente a la fecha de sanción de la presente ley. La incorporación se efectuará en el momento en que el Poder Ejecutivo lo considere conveniente dentro de un plazo máximo de tres años, contando desde la promulgación de esta ley.

Una vez incorporada, la Dirección de Tierras y Colonias dependerá en lo sucesivo de la comisión nacional de colonización, que tendrá a su cargo el cumplimiento de las leyes números 4.167, 5.559 y 10.247.

Art. 65. — El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley.

Art. 66. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a las de la presente ley.

Art. 67. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel Angel Cárcano.

Apéndice

La reducción del saldo de precio de venta al 50 % mediante el sistema establecido por los artículos 34 a 39, del adjunto proyecto, se opera así:

Pago regular 100/100

Fondo amortizante:	1½ % anual.
Interés:	2 ½ " "
Fondo de previsión:	Cuota inicial \$ 3.--
	anual " 4.--
	Interés anual: capitaliza-
	ción semestral " 5 %

Tiempo: 9 años 18 días.

Pago regular 60 %

Fondo amortizante:	½ % anual.
Interés:	2 ½ " "
Fondo de previsión:	Cuota inicial \$ 3.—
	" anual " 2.40
	Capitalización semestral " 5 %

Tiempo: 12 años.

Pago regular 30 %

Fondo amortizante:	½ % anual.
Interés:	2 ½ " "
Fondo de previsión:	Cuota inicial \$ 3.—
	" anual " 1.20
	Capitalización semestral " 5 %

Tiempo: 17 años, 4 meses, 16 días.

II

Proyecto de despacho de la ley agraria

Artículo 1º — La Nación aplicará, de acuerdo a las presentes bases, un plan agrario, destinado a poblar el interior del país, a racionalizar las explotaciones rurales, a subdividir la tierra y a llevar mayor bienestar a los trabajadores del campo. La acción comenzará y se extenderá en forma progresiva, desde las zonas más pobladas, de tierras más ricas y cercanas a estaciones y puertos.

La propiedad de la tierra queda afectada al progreso social y sujeta por tal motivo a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley.

Art. 2º — Créase, para aplicar en forma permanente el plan, un consejo agrario nacional, autónomo y con jurisdicción en todo el país.

Será una institución del derecho público que tendrá capacidad para actuar privada y públicamente, siendo sus miembros personal y solidariamente responsables por los actos del consejo, salvo expresa constancia en acta, de quien estuviera en contra de sus resoluciones.

Se crearán consejos provinciales o seccionales, que dependerán del consejo nacional. Este, además, deberá coordinar su acción con los organismos análogos que crearen las provincias.

Art. 3º — El consejo agrario podrá adquirir tierras por donación o compra, y solicitar la expropiación al Poder Ejecutivo de toda superficie de más de 500 hectáreas fuera de los ejidos y de 100 hectáreas dentro de éstos, que no fuere explotación modelo y trabajada directamente por su propietario, la cual se considerará de utilidad pública, como también de los terrenos o propiedades en las ciudades, que fueren necesarias.

Todas las tierras del Estado, Bancos e instituciones oficiales, sin destino especial, pasarán a ser administradas por el consejo y sujetas al plan general.

La colonización privada queda sometida al control e inspección y a las normas que dicte dicho organismo.

Art. 4º — Las tierras se enajenarán sometidas a la condición de que podrán ser expropiadas en cualquier tiempo y contra cualquier propietario, por el precio de origen, previa indemnización de mejoras, cuando la tierra subdividida se concentre de nuevo o se subdivida sin contemplar las necesidades del trabajo agrícola en forma excesiva o sea motivo de especulación sobre su valor.

Art. 5º — Toda tierra abandonada o no explotada por su propietario, durante un término de cinco años, pasará al dominio del Estado y será entregada al consejo agrario, previa indemnización de acuerdo al valor de producción.

Los inmuebles situados en centros urbanos se destinarán a la construcción de casas para obreros, o para instalar mercados, puestos de venta, exposiciones u otros servicios.

Art. 6º — Las tierras se subdividirán de acuerdo a su ubicación, zona, producción y destino, para ser entregadas en propiedad a los agrarios.

Cada núcleo tendrá su programa a desarrollar y la superficie de cada lote no podrá exceder de 100 hectáreas si es para agricultura y de 500 hectáreas si es para ganadería.

Se ubicará en tierra propia, en primer lugar, a los trabajadores del país y luego el consejo procederá a introducir productores extranjeros, seleccionándolos entre los más adaptables a nuestro medio, vida y costumbres.

Art. 7º — El consejo agrario nacional tendrá su sede en Rosario y se compondrá de nueve miembros. El presidente y dos directores serán nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, entre personas de reconocida capacidad y destacada dedicación a los problemas agrarios. Los otros cargos serán integrados por un representante del Banco de la Nación, uno del Banco Hipotecario, uno de la Cámara Argentina de Colonización, uno de las cooperativas agrarias del país, un delegado de los consejos agrarios provinciales y seccionales y un representante del Consejo Nacional de Educación.

Durarán en sus cargos seis años y serán inamovibles, salvo el caso de notoria mala conducta, debidamente comprobada. Los nombrados en caso de vacantes, completan período. Pueden ser reelectos. El vicepresidente y secretarios, serán nombrados por el consejo.

Art. 8º — Los consejos provinciales y seccionales, se compondrán de cinco miembros. El consejo nacional nombrará el presidente y un miembro, que deben ser de la zona y capacitados en cuestiones agrarias. Los otros miembros serán nombrados, uno por las cooperativas agrícolas, otro por el Poder Ejecutivo de la provincia donde funciona, o por el gobernador si se tratare de un territorio, y el último, por los consejos agrarios locales.

La duración de sus mandatos y demás disposiciones estipuladas para los miembros del consejo nacional, les serán aplicables a los que integran los organismos seccionales.

Art. 9º — El consejo agrario nacional preparará su presupuesto anual, el cual será remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo.

El presidente gozará de una remuneración mensual de \$ 2.000 y los directores de \$ 1.500 cada uno.

Los presidentes de los consejos provinciales o seccionales tendrán una remuneración mensual de \$ 1.000 y los otros miembros de \$ 600 cada uno.

Art. 10. — No podrán integrar los consejos agrarios:

- Los que formen parte del directorio o administración de otros Bancos o de entidades privadas, vinculadas a las transacciones en bienes rurales, explotación de bosques, yerbales, algodonales, etcétera, o de empresas colonizadoras con fines de lucro;
- Los que se hallen en estado de quiebra o suspensión de pagos;

- c) Los que perciban dietas, sueldos, jubilaciones o cualquier otro emolumento de la Nación, provincias o municipalidades, salvo que renuncien a su percepción o al sueldo que le corresponda;

Art. 11. — El consejo agrario nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

- 1º Administrar el fondo general, los bienes y todas las tierras del Estado, sin destino especial;
- 2º Preparar la carta orgánica que reglamente la ley, la que se elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación, incluyendo en la misma, las facultades y obligaciones de los consejos seccionales y locales;
- 3º Practicará el inventario de todos los bienes que le corresponda administrar y preparará los planes definitivos de las explotaciones agrícolas, industriales y ganaderas, que se funden en base a los estudios técnicos;
- 4º Fomentará el cooperativismo en todas sus formas y la organización sindical de los productores, propendiendo a la formación de industrias de transformación entre éstos;
- 5º Levantará la fábrica nacional de maquinarias e implementos agrícolas, para servir a las necesidades del país;
- 6º Realizará la campaña para poblar el interior e introducirá inmigración seleccionada, con destino a la formación de nuevos núcleos agrarios en todo el país. Esta doble acción deberá efectuarse en forma enérgica, a fin de duplicar en diez años, la población rural de la República;
- 7º Fijará las condiciones de los contratos, la superficie de los lotes, la fecha y forma de pago, si es en moneda o con parte de la producción, las limitaciones al dominio y restricciones que se estipulen para beneficio y perfeccionamiento común;
- 8º Tendrá el gobierno forestal, debiendo adoptar las medidas necesarias para la repoblación de bosques;
- 9º Organizará el almacenamiento, transporte y comercialización de los productos, así como el aprovisionamiento común;
10. Propenderá a la aplicación y fomento del crédito agrario directo;
11. Cuidará especialmente de la educación adaptada, con la creación de escuelas rurales especiales y de la formación de la capacidad técnica de los agrarios y sus hijos;
12. Organizará la utilización en común de las maquinarias industriales y agrícolas, para su aprovechamiento económico, a fin de obtener mayor rendimiento y perfeccionamiento agrario;
13. Propenderá a la utilización de los cauces de agua para riego y empleo de la energía eléctrica en los trabajos rurales;
14. Formará una caja de previsión solidaria entre los productores, para el caso de pérdida parcial o total de la producción, especialmente para cubrir los gastos de semilla, laboreo y manutención de la familia;
15. Anualmente elevará su memoria al Congreso, debiendo realizar amplia publicidad de la ley y sus resoluciones. Editará, además, un boletín mensual;
16. Nombrará el personal técnico y administrativo que fuere necesario, el cual gozará de estabi-

lidad después de los seis meses de su nombramiento, debiendo organizar el escalafón;

17. El presidente será el director general agrario, y el que ejecutará las resoluciones del consejo.

Art. 12. — En cada inmueble que se subdivida se formará una explotación con orientación, individualidad y organización propia, y tendrá un consejo de agrarios, un director técnico durante el tiempo necesario, una cooperativa, una reserva fiscal para instalaciones necesarias, donde se formarán viveros, semilleros y plantales, para aprovechamiento y perfeccionamiento común.

Art. 13. — El consejo de agrarios de cada colonia, se compondrá de cinco miembros elegidos por votación directa entre los pobladores. El consejo local será el representante de éstos, actuará dentro de las facultades que le acuerde la ley y la reglamentación que se dicte, y especialmente propenderá al progreso y defensa común.

Art. 14. — Los lotes serán adjudicados en propiedad, previa selección de los aspirantes, sujetos a las siguientes limitaciones, que subsistirán en forma permanente, para el adquirente y sus sucesores:

- 1º Prohibición de especular con el mayor valor de la tierra;
Toda venta, enajenación, gravamen o subdivisión, debe hacerse con la autorización previa del consejo agrario nacional, con informe de los consejos seccionales y locales;
- 2º Deben ser explotados convenientemente y de acuerdo a las orientaciones técnicas que se fijen;
- 3º Residir personalmente y con la familia en el lote adjudicado.

Art. 15. — Si el adjudicatario no cumpliera con alguna de las disposiciones estipuladas o fuera persona indeseable, con previo informe del consejo local y audiencia del acusado, el consejo seccional procederá, si resultare probada la imputación, a rescindirle el contrato, lo cual se producirá con la simple notificación de la resolución. El interesado podrá apelar ante el consejo nacional. El lote deberá ser desalojado en el término de 60 días de notificado, quedando las mejoras hasta cubrir sus deudas a favor del Estado, debiendo éste indemnizarle si hubiere saldo favorable.

Art. 16. — Cuando no hubiere producción anual o se perdiere la misma por fuerza mayor o causa no imputable al agrario, debidamente constatada, la cuota del año se correrá al año siguiente, sin acumularse y sin interés punitorio.

En el caso de pérdida parcial, el consejo agrario fijará el porcentaje de la cuota a abonarse por cada colono, teniendo en cuenta lo producido y las necesidades del mismo, previo informe de la dirección técnica y del consejo de colonos. El saldo pasará a los años subsiguientes, sin interés punitorio.

Art. 17. — En caso de fallecimiento del titular, podrá el consejo caducar el lote y adjudicarlo preferentemente al cónyuge sobreviviente o a alguno de los hijos mayores, quienes deberán indemnizar a los otros herederos la parte proporcional de las mejoras y precio pagado.

En el caso de adjudicarse a un tercero, éste abonará a los herederos del causante el importe de las mejoras y el precio pagado.

Las tasaciones serán efectuadas por los consejos seccionales, previo informe técnico y vista al consejo local.

Art. 18. — A todo hijo de agrario, con capacidad de trabajo, al llegar a la mayoría de edad, el Estado le entregará un lote y el importe para mejorarlo, hasta \$ 6.000 m/n., si no tuviere capital para instalarse.

Art. 19. — Decláranse inembargables los lotes adjudicados de acuerdo a esta ley y sus mejoras, por deudas contraídas con anterioridad a su adjudicación.

Posteriormente, sólo podrán ser embargados con previo conocimiento del consejo agrario, el cual podrá evitar la medida, fijando la forma de pago, de acuerdo a las posibilidades del deudor.

Art. 20. — Declárase inembargable toda propiedad rural y urbana cuyo valor no exceda de \$ 10.000 m/n., siempre que sea la única propiedad y esté habitada por su dueño, así como también hasta el 20 % de la producción anual del agrario hasta un valor de \$ 2.000 m/n. con deducción de las cuotas por arrendamiento o amortización del precio de compra de la tierra, según el caso. Este privilegio se extiende a los herederos del titular.

Art. 21. — El consejo agrario nacional promoverá al parcelamiento y formación de pequeñas explotaciones agrarias intensivas en los ejidos de las ciudades y villas, conviniendo con las respectivas comunas la forma de realizar la tarea.

Art. 22. — Las explotaciones ejidales se ajustarán a las normas generales establecidas para las rurales, debiéndose tender a formar especialmente pequeñas quintas y granjas. Cada ejido tendrá su cooperativa, un consejo de agrarios y una escuela rural.

Art. 23. — Las tierras situadas en las fronteras del país, podrán ser expropiadas por el Estado y destinadas a la formación de núcleos agrarios con nativos, de acuerdo a las bases especiales que dicte el consejo agrario, sin perjuicio de las normas generales estipuladas.

Art. 24. — Para el cumplimiento del plan permanente agrario, créanse los siguientes recursos:

- a) Provenido de la venta de títulos que el Poder Ejecutivo realizará anualmente y entregará al consejo, por un valor mínimo de 10.000.000 de pesos;
- b) Importe de la venta y arrendamiento de tierras fiscales, así como de la explotación de bosques, cuotas de riego, etcétera;
- c) Provenido de impuestos progresivos al mayor valor y al ausentismo, que se establezcan por ley especial;
- d) Provenido del 1 o/oo sobre todo inmueble que exceda de 2.500 hectáreas hasta 5.000 hectáreas, desde esa superficie hasta 20.000 hectáreas, el 2 o/oo, y el 3 o/oo sobre toda propiedad que exceda de esa extensión.

Art. 25. — Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir hasta 100.000.000 de pesos, en series anuales de 10.000.000 cada una, en títulos de la deuda pública, que se denominarán de «Transformación agraria argentina», con destino a los fondos del consejo agrario nacional.

Los títulos devengarán un interés del 4 % y tendrán una amortización anual acumulativa del 2 % como mínimo.

Art. 26. — El producido de la venta de tierras y subsidiariamente los fondos especiales, se aplicarán al pago de servicios e intereses de los títulos que se emitiesen.

Art. 27. — Las tierras serán adquiridas en forma de licitación pública o en remate, pudiéndose abonar su precio con títulos a la par.

En todos los casos, previamente deberá realizarse un

estudio técnico completo de la tierra y resolver el consejo la adquisición con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.

Las que posean las instituciones oficiales, se convendrá la forma en que el consejo agrario se hará cargo de ellas a los fines del parcelamiento y explotación.

Art. 28. — La parcelación deberá ajustarse a un programa en cada caso. Los lotes no podrán exceder de los límites establecidos en el artículo 6º, salvo caso especial que el consejo nacional deberá fundar y resolver con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros.

Se fijará técnicamente la orientación de cultivos y producción de cada núcleo, a cuyas normas deberán ajustarse los trabajos.

Art. 29. — Los agrarios sin capital y con capacidad, serán habilitados con el dinero necesario hasta la suma de \$ 6.000 m/n. por cada familia, para la casa-habitación, instalaciones, alambrados, implementos, semillas y plantales.

Dicha suma se amortizará conjuntamente con el precio de la tierra, en los mismos plazos y con igual interés.

Art. 30. — Las parcelas se venderán al precio de costo de la tierra con un recargo que no excederá del 12 %, para realización de las obras de beneficio colectivo y organización de la reserva fiscal.

Los plazos y las cuotas serán determinadas en cada caso, pudiendo establecerse el pago con porcentaje de la producción.

Art. 31. — Cada productor adquirirá por sí una sola parcela, pero podrá comprar una más por cada cuatro hijos varones que vivan y trabajen con él. La adjudicación se hará previo concurso público, con estricta selección y previo informe sobre los aspirantes.

En igualdad de condiciones tendrán preferencia los nativos, los hijos de agrarios y los casados.

Art. 32. — El título definitivo deberá otorgarse una vez abonado el valor total de la compra y cumplidas las demás condiciones impuestas en interés de la colectividad. En los títulos se harán constar las restricciones permanentes al dominio que establece esta ley.

Art. 33. — Las tierras que se subdividan, quedan exentas de todo impuesto por el término de cinco años.

Art. 34. — El consejo agrario podrá realizar ensayos de explotaciones agrícolas cooperativas.

Art. 35. — El Banco de la Nación aplicará especialmente la ley de crédito agrario en los núcleos que se formen de acuerdo al plan enunciado, fomentará la organización de cooperativas y la adquisición de maquinarias en común por intermedio de éstas.

Art. 36. — El consejo agrario estará exento de todo impuesto en sus operaciones y el cobro de sus créditos se realizará por vía de apremio.

Las maquinarias, equipos, semillas y materiales que sea necesario importar, quedan libres de derechos de aduana.

Art. 37. — Incorpórase al consejo agrario nacional la actual Dirección de Tierras y Colonias y la Dirección de Parques Nacionales, quedando facultado el Poder Ejecutivo para refundir, además, en dicho organismo, las oficinas y el personal que crea necesarios.

El Ministerio de Agricultura facilitará, sin cargo, todos los elementos necesarios, provenientes de viveros, semilleros, laboratorios y demás oficinas centrales y regionales.

Art. 38. — Quedan derogadas todas las leyes que se opongan al cumplimiento de la presente, así como también las leyes, decretos y resoluciones vigentes sobre tierras públicas.

Las disposiciones del Código Civil que establecieren normas contrarias, no se aplicarán en cuanto a la tierra o propiedades comprendidas dentro del régimen de esta ley.

El consejo agrario estudiará y proyectará las leyes especiales que fuere necesario dictar, de acuerdo a las normas generales precedentes.

Art. 39. — Comuníquese, etc.

Bernardino Horne.

III

Dirección nacional de colonización

Creación — Denominación — Objeto

Artículo 1º. — Con el objeto de realizar un plan agrario destinado a poblar el interior del país, racionalizar las explotaciones rurales, subdividir la tierra y llevar mayor bienestar a los trabajadores del campo, créase la dirección nacional de colonización que funcionará como entidad autónoma.

Será una institución de derecho público, con capacidad funcional y presupuestaria, siendo sus miembros personal y solidariamente responsables de sus actos, salvo, expresa disconformidad consignada en acta, con las resoluciones del directorio que por esta ley se crea.

Art. 2º. — El directorio estará integrado por cinco miembros, elegidos, dos en representación del Poder Ejecutivo; uno en representación del Banco de la Nación y del Banco Hipotecario Nacional; uno en representación de las cooperativas agrícolas inscriptas en el Ministerio de Agricultura de acuerdo a la ley número 11.388 y uno en representación de los productores agrarios no asociados, en la forma que reglamentará para estos últimos el Poder Ejecutivo.

Los representantes elegidos por el Poder Ejecutivo lo serán entre personas de reconocida capacidad en los problemas agrarios, debiendo la presidencia del directorio ejercerse por el que designe el Poder Ejecutivo entre sus representantes. Todos los miembros del directorio se nombrarán con acuerdo del Senado, serán argentinos y durarán en el ejercicio de sus funciones seis años, pudiendo ser reelectos, renovándose cada tres años y por sorteo la primera vez.

La sede del directorio será en la ciudad de Rosario.

Art. 3º. — El presidente del directorio tendrá una asignación mensual de dos mil pesos y de un mil pesos cada uno de los miembros restantes.

Declarase incompatible el cargo de presidente y miembros del directorio con el de cualquier función o empleo público o jubilación nacional, provincial o municipal.

Tampoco podrán formar el directorio como presidentes o vocales:

- a) Los que integren el directorio o administración de bancos o de entidades vinculadas a transacciones de inmuebles rurales, empresas colonizadoras, explotación de bosques, yerbales, algodones, tabacales, viñedos, arrozales, caña de azúcar, cereales, producción, industria y comercio de haciendas;
- b) Los fallidos y los que hubieran cesado civilmente en sus pagos;
- c) Los que hubieren sido procesados.

Plan de colonización

Art. 4º — A los fines de esta ley, la dirección nacional de colonización procederá a fomentar un plan, que desarrollará paulatinamente. El plan aludirá a la adquisición de tierras para la colonización y a su distribución con el mismo objeto.

Art. 5º — La adquisición se hará dentro de las bases siguientes:

- a) Adquirirá y subdividirá tierras para entregarlas a la colonización, en las distintas zonas actualmente colonizadas del país, prefiriendo las que estén más próximas a los puertos, a los mercados interiores de consumo y a las que por su productividad, sean más aptas para instalar en ellas una explotación de carácter agrario;
- b) La adquisición de las tierras se efectuará por licitación pública, en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo, o en remate público, cuando dentro de las condiciones que se establecen por esta ley, fueran ofrecidas en esta forma;
- c) En ningún caso la dirección nacional de colonización, podrá adquirir tierras de particulares o de instituciones privadas, en otra forma que en las expresadas en el inciso anterior, cuyos requisitos no regirán para cuando la compra de tierras se efectúe a instituciones del Estado;
- d) En el caso de que la dirección nacional de colonización, no pudiera adquirir tierras en las condiciones especificadas en el inciso a) para entregarlas a la colonización, queda facultada para pedir la expropiación al Poder Ejecutivo de la que le sea necesaria, a los fines del cumplimiento de la presente ley. Con este objeto se declara de utilidad pública la tierra que la dirección nacional de colonización, con aprobación del Poder Ejecutivo, juzgue preciso incluir en el plan colonizador;
- e) En ningún caso, la expropiación de tierras, puede referirse a las que en el momento de efectuarse aquéllas fueren objeto de una explotación agraria, verificada directamente por sus propietarios, o a extensiones de tierras, que no excedan de 1.000 hectáreas de superficie;
- f) Siendo de interés público el cumplimiento de la presente ley, la indemnización al propietario de la tierra, en el caso de que le fuere expropiada, no podrá exceder de la que surja de su valor, en relación con el de su producción apreciada en los últimos cinco años precedentes al de la expropiación, y con prescindencia de todo otro factor, que pueda determinar una apreciación distinta;
- g) El precio de la tierra que la dirección nacional de colonización adquiere de las instituciones del Estado, para el cumplimiento de esta ley, deberá ser fijado teniendo en cuenta como base, el criterio establecido en el inciso f);
- h) La dirección nacional de colonización, previamente a la adquisición de la tierra, deberá realizar un estudio técnico completo acerca de su aptitud productiva, y para resolver la compra deberá efectuarlo con el voto de por lo menos cuatro de los miembros de su directorio.

Art. 6º — Las tierras adquiridas por la dirección

nacional de colonización se entregarán a la colonización bajo las bases siguientes:

- a) Las tierras se subdividirán de acuerdo a su ubicación, zona, producción y destino, para ser entregadas a los agrarios en propiedad. La superficie de cada lote no podrá exceder de 100 hectáreas si es para ser dedicado a la agricultura y de 500 hectáreas si se dedica a la ganadería.

La tierra será adjudicada, en primer lugar, a los productores agrarios del país y luego la dirección nacional de colonización, con aprobación del Poder Ejecutivo procederá a introducir productores extranjeros, seleccionándolos entre los más adaptables a nuestro medio, vida y costumbres, para que puedan adquirirla, en las mismas condiciones que los productores establecidos ya en la República;

- b) Los lotes serán adjudicados en propiedad, previa selección de los aspirantes, sujetos a las siguientes limitaciones que subsistirán para el adquirente y sus sucesores, hasta el pago total de los mismos:

1º Prohibición de especular con el mayor valor de la tierra. Toda venta, gravamen o subdivisión, debe hacerse con la autorización previa de la Dirección Nacional de Colonización;

2º Deben ser explotados convenientemente y de acuerdo con la orientación técnica que se fije por la dirección nacional de colonización;

3º El adjudicatario debe residir con su familia en el lote adjudicado y trabajarlo directamente.

- c) Las tierras subdivididas, se venderán a los productores agrarios que las adquirirán a precio de costo, con un recargo que no excederá del 12 %. Los plazos y las cuotas a abonarse se fijarán para cada caso por la dirección nacional de colonización;

- d) Cada productor, sólo puede adquirir una parcela, pudiendo adquirir una más por cada 4 hijos varones que vivan y trabajen en común;

- e) La adjudicación de las parcelas de tierras, se hará por concurso en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo. En igualdad de condiciones se preferirán para la adjudicación los argentinos con familia y a los hijos de agrarios en las mismas condiciones;

- f) El título de propiedad definitivo deberá otorgarse una vez satisfecho el importe total de la compra. En los títulos provisionales se harán constar las restricciones al dominio que establece esta ley;

- g) Si el beneficiario de un lote, adjudicado de acuerdo a la presente ley, no cumpliere con las obligaciones impuestas por la misma, la dirección nacional de colonización, mediante un procedimiento judicial, sumario y verbal, procederá a probar la imputación y una vez probada, se rescindirá el contrato de venta. El adjudicatario procederá a restituirlo en el plazo de 60 días a la dirección nacional de colonización, quedando las mejoras, introducidas, afectadas al pago de

la deuda que aquél tuviere, y si existiera excedente, le será éste satisfecho por la dirección nacional de colonización;

- h) Cuando en el lote adjudicado no hubiere producción anual, o se perdiere la misma, por fuerza mayor, o causa no imputable a su adjudicatario, previa constatación de estos extremos, la cuota del año a abonarse por el importe de la tierra, se correrá al año siguiente, sin acumularse y sin intereses punitivos.

Si la pérdida de la cosecha ha sido parcial, la dirección nacional de colonización fijará el porcentaje de la cuota que debe abonarse por el adjudicatario. El saldo de la misma pasará para abonarse en los años siguientes, en la forma que se determine por la dirección nacional de colonización, sin intereses punitivos;

- i) En caso de fallecimiento del titular de un lote, podrá la dirección nacional de colonización declarar la caducidad del contrato o bien adjudicarlo al cónyuge sobreviviente o a alguno de los hijos mayores, quienes deberán indemnizar a los otros herederos la parte proporcional de las mejoras introducidas y el precio pagado, en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo.

Atribuciones de la dirección nacional de colonización

Art. 7º — La dirección nacional de colonización tendrá las siguientes atribuciones y deberes.

- a) Administrar el fondo de colonización que por esta ley se crea y los bienes inmuebles que adquiriera a los fines del cumplimiento de la presente ley;

- b) Preparar la carta orgánica que reglamente esta ley, elevándola al Poder Ejecutivo para su aprobación;

- c) Fomentar el cooperativismo entre los productores y su organización sindical, propendiendo a la implantación de industrias de transformación entre éstos;

- d) Fijará las condiciones de los contratos de venta de lotes, la superficie de los mismos, y la fecha y forma de pago;

- e) Propenderá a la aplicación y fomento del crédito agrario;

- f) Anualmente elevará su memoria al Congreso, debiendo realizar amplia publicidad de la ley y de sus resoluciones. Además editará un boletín mensual;

- g) El presidente del directorio tendrá la administración general de la dirección nacional de colonización y será el encargado de ejecutar las resoluciones de ésta;

- h) Nombrará el personal técnico y administrativo que fuere necesario, el cual gozará de estabilidad, después de seis meses de su designación, debiendo organizar el escalafón;

- i) Formulará el plan colonizador y lo ejecutará con la aprobación del Poder Ejecutivo;

- j) Administrará la tierra de propiedad fiscal y formulará y ejecutará con aprobación del Poder Ejecutivo el plan de colonización de la misma;

- k) Tendrá el gobierno forestal y adoptará las medidas que por esta ley se establecen, para la repoblación y explotación de bosques.

Inembargabilidad.

Art. 8º — Declárase inembargables los lotes adjudicados de acuerdo con la presente ley y sus mejoras, por deudas contraídas con anterioridad a su adjudicación.

Los embargos por deudas contraídas con posterioridad a su adjudicación, podrán hacerse efectivos, sobre el excedente resultante, una vez satisfecho el importe del lote, que quedará afectado en primer término con garantía hipotecaria a dicho pago.

Art. 9º — En caso de venderse por ejecución judicial un lote de los adjudicados de acuerdo a la presente ley, el adquirente para comprarlo, deberá obtener la aprobación previa de la dirección nacional de colonización que la otorgará si el interesado estuviere en las condiciones determinadas por la misma y su reglamentación.

De la colonización extensiva y su explotación.

Art. 10. — Cuando la dirección nacional de colonización, disponga para la colonización, de una superficie no inferior a 5.000 hectáreas, la subdividirá en parcelas de la superficie a que se refiere el inciso a) del artículo 6º, formando una explotación, con individualidad, orientación y organización propia, la que será dirigida por un técnico agrario durante el tiempo que sea necesario, formando una cooperativa, entre los adquirentes de los lotes y estableciendo una escuela de enseñanza común y agraria adaptada al medio. El director técnico y la escuela deberán ser costeados por la cooperativa que se organice.

Consejos agrarios

Art. 11. — La dirección nacional de colonización procederá a instituir en las distintas zonas del país, a donde sea necesario y en el número que sea preciso, para orientar las explotaciones agrarias, racionalizar la producción y tutelar los intereses de los trabajadores del campo, consejos agrarios, que estarán formados por tres miembros, que desempeñarán sus cargos ad honórem.

Los miembros de los consejos agrarios serán elegidos por la dirección nacional de colonización, entre los principales productores de la zona en que se creen, ejerciendo la presidencia el gerente del Banco de la Nación Argentina, el agrónomo regional o el presidente de la cooperativa, en caso de existir en la zona a donde se establezcan, o en su defecto, el productor que la dirección nacional de colonización determine.

Art. 12. — Los consejos agrarios tendrán las siguientes funciones:

- 1º Coadyuvar con la acción del Ministerio de Agricultura, en todo lo relativo a la orientación y racionalización de la producción ganadera y agrícola, a la sanidad vegetal y a la organización de la industrialización y del comercio de los productos agropecuarios;
- 2º Colaborar en la forma que reglamentará la dirección nacional de colonización con éste, en la acción que debe desarrollar para la ejecución de la presente ley y de la reglamentación de la misma;
- 3º Colaborar con la acción de la sección crédito agrario del Banco de la Nación Argentina para facilitar la canalización del crédito agrario, a los pequeños agricultores y ganaderos;
- 4º Actuar como delegados del Ministerio de Agri-

cultura en la acción que éste desarrolla, para combatir y extinguir las distintas plagas de la agricultura;

- 5º Intervenir en calidad de amigables componedores, en los conflictos que se suscitaren con motivo del trabajo de los productores agropecuarios y representarlos en sus gestiones ante el Ministerio de Agricultura y los poderes públicos nacionales, provinciales y municipales;
- 6º Fomentar con una propaganda permanente y eficaz, la organización de cooperativas de producción, de comercialización y de consumo.

La colonización en los ejidos urbanos

Art. 13. — La dirección nacional de colonización propenderá al parcelamiento y formación de pequeñas explotaciones agrarias intensivas, en los ejidos de las ciudades y villas, conviviendo con las municipalidades respectivas, la forma de realizar la tarea.

Art. 14. — Las explotaciones ejidales se ajustarán a las normas que se establecen en la presente ley, debiendo la dirección nacional de colonización, en la formación de los lotes, y en su explotación, propender a que se establezcan en ellos, pequeñas quintas y granjas.

La colonización de la tierra, de los bancos e instituciones oficiales y de particulares

Art. 15. — La dirección nacional de colonización, procederá a colonizar de acuerdo a las normas que se establecen en la presente ley, la tierra que considere conveniente y apta, de propiedad de los bancos del Estado o de las instituciones autárquicas de éste.

A este fin, podrá adquirirla, satisfaciendo su precio en los términos establecidos en los incisos f) y g) del artículo 5º o conviniendo con dichas instituciones, el traspaso a su favor, en la forma que se acuerde, con el mismo objeto.

Art. 16. — Los bancos del Estado, o las instituciones autárquicas de éste, estarán obligados a ceder a la dirección nacional de colonización los terrenos de su propiedad que ésta les reclame para ser colonizados, siempre que les sea garantizado el importe que se hubiere invertido para la adquisición de los mismos por su parte.

Art. 17. — La dirección nacional de colonización podrá, asimismo, colonizar de acuerdo a las normas que se determinan en la presente ley, las tierras de propiedad particular que con dicho objeto les sean ofrecidas. En tal caso, obrará como un simple mandatario del titular de los mismos, y su responsabilidad será la establecida por el Código Civil para los mandatarios.

La colonización y administración de las tierras fiscales

Art. 18. — Las tierras de propiedad fiscal serán colonizadas por la dirección nacional de colonización de acuerdo a las normas fijadas por esta ley.

Art. 19. — Sin perjuicio de ellas, y con respecto a las mismas, procederá especialmente a formular un plan colonizador, fijando el destino que convenga darse a las tierras fiscales según su calidad y condiciones de aprovechamiento, clasificándolas en zonas o colonias pastoriles, agrícolas, mixtas, forestales, determinando los lugares o regiones, en que deban fundarse pueblos o colonias.

En el mismo plan, establecerá de conformidad con dichas características, las bases para su realización colonizadora y procederá a ejecutarlo, con la previa aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 20. — La administración de las tierras de propiedad fiscal, que actualmente corresponde a la Dirección de Tierras y Colonias, pasa a la dirección nacional de colonización, que a tal objeto tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Realizar obras de fomento en las tierras fiscales, a los efectos de su mejor distribución y explotación, directamente o con el concurso de reparticiones técnicas, caminos, irrigación, desecamiento, galpones, tinglados y elevadores de granos, empalmes de líneas férreas, etcétera;
- b) Construir viviendas y mejoras en los lotes rurales para facilitar la radicación de familias agricultoras;
- c) Arrendar las tierras de propiedad fiscal, demarcando los lotes, en solares, quintas, chacras, lotes agrícolas, mixtos y forestales, estos últimos dentro o fuera de las colonias pastoriles, a los fines de su locación, subscribiendo los contratos correspondientes, con o sin derecho a compra, pudiendo arrendar a título precario las tierras afectadas a reservas y hasta tanto se dé a las mismas el destino que motive su reserva;
- d) Fijar las cuotas de los arriendos y los plazos de pago de los mismos;
- e) Acordar prórrogas para el cumplimiento de obligaciones o para el pago del precio de los arriendos;
- f) Prorrogar a sus respectivos vencimientos los contratos de arrendamiento ya aprobados y los que se celebren en adelante, siempre que se cumplan satisfactoriamente las condiciones del arrendamiento;
- g) Declarar caducas las concesiones en venta o arrendamiento, actualmente en vigencia, con pérdida de las sumas oblatas y mejoras incorporadas, cuando no se cumplan en los plazos estipulados, las obligaciones contractuales;
- h) Disponer provisionalmente las reservas que sea necesario establecer con fines de utilidad pública, dando cuenta al Poder Ejecutivo para su correspondiente ratificación;
- i) Aplicar y requerir el pago de multas en que hubieren incurrido los adquirentes de tierras fiscales, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contraídas, de conformidad con las disposiciones que rijan sus respectivas concesiones;
- j) Dictar disposiciones tendientes a la mejor selección del poblador o arrendatario de tierras fiscales;
- k) Ordenar directamente el cobro por vía judicial, de lo que se adeudara por concesionarios u ocupantes de tierras fiscales, por cualquier concepto, una vez agotados los trámites administrativos o para promover el desalojo a los que detentaren sin derecho ni título alguno, tierras fiscales;
- l) Declarar salidos del dominio fiscal las tierras objetos de escrituraciones municipales, anteriores a la vigencia de la ley número 4.167 y las escrituradas con posterioridad, como consecuencia de concesiones anteriores y siempre que no medien hechos que exijan un pronunciamiento del Poder Ejecutivo;
- m) Mientras no se dicten leyes que reglamenten la creación de centros urbanos en propiedades particulares de los territorios nacionales, deberán someterse a la dirección nacional de colonización

los proyectos de sus trazados, de acuerdo a los reglamentos que ésta dicte;

- n) Otorgar los títulos definitivos a los adquirentes de tierras fiscales, que hubieren cumplido íntegramente con las condiciones estipuladas para su enajenación, los que serán subscritos sin excepción por el Poder Ejecutivo.

Financiación

Art. 21. — El consejo agrario dispondrá de los siguientes recursos:

- a) Hasta la cantidad de \$ 30.000.000 m/n., que el Poder Ejecutivo entregará con imputación a esta ley, dentro de los noventa días de promulgada, provenientes de rentas generales o del producido del fondo de beneficios de cambio, o de una operación de crédito interno o externo, pudiendo usar de los tres medios a la vez;
- b) Hasta la cantidad de \$ 70.000.000 m/n., que el Poder Ejecutivo desde el año siguiente de la promulgación de esta ley entregará anualmente en sumas de \$ 10.000.000 m/n. o su equivalente en títulos externos o internos;
- c) El producido de la venta y arrendamiento de las tierras regidas por la presente ley;
- d) Los fondos que se recaudan en virtud de las disposiciones de las leyes números 4.162, 5.539 y 10.247 y sus reglamentaciones vigentes;
- e) El producido de las comisiones, intereses punitivos, derechos de inspección, etcétera, que fije el consejo y de los legados, donaciones, etc., que se le hagan.

Estos fondos serán depositados en una cuenta especial en el Banco Central de la República a la orden del consejo.

Art. 22. — Comuníquese, etc.

Benjamín Palacio.

IV

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Autorízase al Banco Hipotecario Nacional para adquirir en todo el territorio de la República, tierras aptas para la explotación agrocolagánadera, con preferencia en las proximidades de estaciones de ferrocarriles y puertos de embarque fluviales o marítimos.

Art. 2º — Previa división de las tierras adquiridas, en fracciones no mayores de cincuenta hectáreas, serán entregadas en propiedad, a precio de costo y por sorteo, de acuerdo a las siguientes disposiciones:

- a) Ser el adquirente ciudadano argentino, nativo o naturalizado, casado, con hijos, con antecedentes de buena conducta y con aptitudes para los trabajos agrícolas;
- b) No tener otra propiedad rural;
- c) Obligarse a habitar el campo con su familia, construyendo una habitación adecuada, dentro de los seis meses de su adquisición;
- d) No adquirir más de una parcela por familia;
- e) Destinar una parte de la propiedad, a explotación de granja, dando preferencia a los productos propios de la zona, y otra parte a la plantación de árboles frutales y forestales en la forma y cantidad que reglamente el Poder Ejecutivo.

Art. 3º — Las propiedades que hayan pasado a pertenecer al Banco de la Nación Argentina y al Banco Hipotecario Nacional podrán dividirse y enajenarse de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º y 2º de esta ley.

Art. 4º — Autorízase al Banco Hipotecario Nacional, para emitir hasta cien millones de pesos moneda nacional (\$ 100.000.000 m.n.) en cédulas hipotecarias que se denominarán «cédulas hipotecarias de la pequeña propiedad rural», con el 5 % de interés, 1 % de amortización y 0,25 % de comisión, las que serán destinadas a la adquisición de las tierras a que se refiere el artículo 1º.

Art. 5º — El precio de compra será abonado en los plazos que correspondan con un interés del 5 %, 1 % de amortización y 0,25 % de comisión.

Art. 6º — A las sumas que los adquirentes deben abonar por amortización e intereses, se agregará una cuota equivalente a un seguro de vida, quedando, en caso de fallecimiento, canceladas todas las obligaciones y la propiedad escriturada definitivamente en favor de la familia del comprador.

Art. 7º — Una vez amortizado el capital, el banco otorgará escritura definitiva de la propiedad a favor del adquirente.

Art. 8º — La compra, enajenación y división de los campos estará a cargo de una sección especial creada al efecto, dependiente del Banco Hipotecario Nacional.

La reglamentación determinará las demás condiciones en que dicha compra, enajenación y división, hayan de efectuarse.

Art. 9º — Los impuestos territoriales que graven las propiedades adquiridas por esta ley, deberán recaer siempre sobre la tierra libre de mejoras.

El Poder Ejecutivo de la Nación solicitará de los gobiernos provinciales la sanción de este principio en sus respectivas leyes impositivas.

Art. 10. — Las propiedades adquiridas de acuerdo a esta ley, deberán ser inscriptas como «bien de familia» y gozarán de los privilegios (salvo los derechos del banco) que establece la ley número 10.234, de amparo y donación a la familia argentina.

Art. 11. — El producido de los servicios de amortización e intereses, será invertido por el Banco Hipotecario Nacional en la adquisición de nuevas tierras a los fines de la presente ley.

Art. 12. — Comuníquese, etc.

Juan F. Cafferata. — Carlos D. Courd.

V

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I

Artículo 1º — Créase el consejo nacional de colonización con carácter de entidad nacional autárquica. La que podrá asimismo proponer convenios con las provincias para que el Poder Ejecutivo gestione de las mismas la organización de cuerpos análogos, en relación directa con el consejo nacional de colonización.

Art. 2º — Constitución del consejo nacional de colonización:

- a) El consejo nacional de colonización estará constituido por nueve miembros designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado; durarán

seis años en sus funciones, se renovarán por mitades cada tres años, con excepción del presidente, y podrán ser reelectos;

- b) Para desempeñar el cargo de consejero, se requiere ser argentino;
- c) El presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y un primer vocal serán elegidos por mayoría de votos por los consejeros en votación secreta.

Los miembros electos desempeñarán su función durante el primer período íntegro; los cuatro consejeros, vocales restantes, durarán la mitad del primer período;

- d) Además, se formará un consejo consultivo en el que tendrán voz sin voto los representantes que determine el Poder Ejecutivo y se envíen de los ministerios que tengan relación con este objeto; los Bancos de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional y Consejo Nacional de Educación. Estos representantes se expedirán por escrito cuando el presidente les requiera sus opiniones. Dichos miembros no percibirán otro estipendio especial.

II

Finalidad y atribuciones del consejo nacional de colonización

Art. 3º — Siendo la finalidad del consejo nacional de colonización:

- a) Orientar, dirigir y organizar en forma directa o indirecta, según el caso, la *colonización racional de la República*, en su doble aspecto social y técnicoeconómico, de acuerdo a las condiciones naturales y las necesidades de cada provincia y territorio;
- b) La orientación y organización de la enseñanza agrícola y cooperativa tendente a la colonización creando colonias, escuelas vocacionales y de especialización (de cooperativas agrícolas granjeras e industriales), nacionales y particulares incorporadas, para lo que se autoriza a requerir y coordinar la cooperación del Consejo Nacional de Educación y de la Dirección de Enseñanza Agrícola y Fomento Rural del Ministerio de Agricultura y de toda otra rama oficial de enseñanza agropecuaria, escalonando la colonización racional;
- c) La organización y fomento de la colonización racional de la República, directamente y por medio de la cooperación y seleccionando la inmigración.

III

Facultades que se otorgan al consejo nacional de colonización

Art. 4º — Se faculta al consejo nacional de colonización para:

- a) Administrar toda la tierra pública nacional y la de instituciones oficiales dedicadas a la colonización pastoril, forestal, agricolaganadera, granjera e industrial; subdividirla y dar en posesión a quienes las habiten y trabajen las parcelas desde una hectárea hasta la superficie que

puede explotar una familia, atendiendo la posibilidad de ésta y todas las diversidades regionales y las de productividad y distancia. Hacer reconocer las tierras, estudiar su capacidad y practicar la mensura y entrega de lotes amojonados por el personal de su dependencia y utilizando otros servicios públicos que le sean necesarios;

- b) Efectuar colonización con egresados de colonias escuelas, y de todos los demás establecimientos de enseñanza agrícola, inclusive los menores de colonias, reformatorios, que sirven a la ley número 10.903; y otras instituciones oficiales y particulares que se incorporen que protejan la infancia abandonada y los adultos inmigrantes, indígenas, desocupados de ambos sexos, liberados, y demás atendidos por la asistencia social y patronatos nacionales, provinciales, particulares y semioficiales adheridos;
- c) Estudiar la capacidad económica de la República y las conveniencias del intercambio, utilizando todos los servicios oficiales existentes, y aconsejar la creación de los que consideren necesarios a esos fines;
- d) Aconsejar y organizar los medios de fomento y defensa de la producción y del consumo, en general, con el auxilio de la cooperación para suprimir los intermediarios internos e internacionales, pudiendo utilizar los servicios del Estado y colaboración del personal diplomático y consular, en la forma que se reglamentará;
- e) Implantar los mejores métodos de colonización cooperativa y la más adecuada distribución de las tierras mediante pagos al contado, en cuotas y también en especie, teniendo en cuenta la capacidad de labor según se reglamente; determinando el crédito personal de conformidad a las condiciones morales;
- f) Determinar el valor y la extensión de las parcelas que, según las zonas, se considerarán: granja de subsistencia familiar que, por esta ley se declara propiedad inembargable sujeta a la formalidad que fije el consejo;
- g) Aceptar las tierras fiscales de provincias y de dominio privado que se ofrezcan a la colonización;
- h) Controlar la colonización privada, la que deberá acogerse a las normas que determine el consejo nacional de colonización, evitando toda especulación, abuso o ganancia ilícita y monopolio;
- i) Planear la ubicación reservada, dentro de las colonias para la instalación de todo servicio público y social;
- j) Preparar anteproyectos de leyes que regulen la actividad en los diversos campos de la producción, elaboración e intercambio. Y estudiar escalas equitativas de impuestos adicionales que es preciso aplicar a tierras baldías, o con escasas mejoras o semiabandonadas y, donde se propagan plagas perjudiciales a la economía social o a la salud pública;
- k) Estudiar el plan de financiación y disponer medios de publicidad;
- l) Proponer al Poder Ejecutivo el proyecto de reglamento y sus modificaciones pertinentes;
- ll) Cumplir y hacer cumplir toda legislación agraria y de cooperación concordante con la presente ley;

m) Racionalizar las oficinas que le sean transferidas por ministerios y otras reparticiones nacionales, cuyo personal permanecerá incluido en los mismos ítems de la ley de presupuesto actual hasta que se le incluya bajo el rubro correspondiente;

n) Elegir y proponer al personal que necesiten en más, justificadamente;

ñ) Aplicar el plan de la educación granjera cooperativa en la conscripción militar;

o) Fundar una sociedad cooperativa general central y organizar una federación de sociedades cooperativas, que se ocupe bajo el contralor del consejo nacional de colonización, de todas las operaciones relativas a la actividad colonizadora, industrial y de intercambio interno y exterior, de seguro y educación especiales, de acuerdo a un presupuesto.

IV

Funciones del consejo nacional de colonización

Art. 5º — Serán obligaciones del consejo nacional de colonización:

- a) Las que emanen de la finalidad señalada y facultades conferidas por los artículos anteriores;
- b) Recibir bajo inventario todos los bienes destinados a la colonización;
- c) Abrir y hacer llevar una cuenta detallada de todas sus operaciones de colonización y contabilidad propia, por intermedio del Banco de la Nación Argentina;
- d) Elevar una memoria y balance anual al Poder Ejecutivo dentro de los treinta días de la fecha de su creación que señalará el término de cada ejercicio, rindiéndose cuenta de lo realizado y solicitando la sanción o decreto de nuevas disposiciones que considere necesarias al mejoramiento paulatino de sus servicios y ampliación de la esfera de su actividad;
- e) Efectuar por intermedio de cada uno de los bancos nacionales las operaciones concernientes a la venta de las tierras que ellos pongan a la disposición del consejo nacional de colonización;
- f) Coordinar la acción colonizadora con la de asistencia social nacional.

V

Medios y fuentes de recursos concedidos al consejo nacional de colonización

Art. 6º. — Para iniciar las operaciones de colonización:

- a) Al promulgarse la presente ley, los Bancos de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional pasarán al consejo nacional de colonización el balance de inmuebles rurales que han debido adjudicarse en cobro de sus créditos, liquidando estos créditos con intereses y gastos hasta el día de la promulgación de esta ley;
- b) Y, los pondrán a ese precio neto, a disposición del consejo nacional de colonización.

Art. 7º — El consejo nacional de colonización estará dotado de recursos propios, con cuyos excedentes acu-

mulará el «Fondo Propio de Fomento Permanente de colonización», como ser:

- a) Fondo inicial: Durante tres años a contar del corriente, la ley de presupuesto le asignará el subsidio de cinco millones de peso moneda nacional para iniciar sus operaciones y cubrir los gastos que demande la colonización, de rentas generales con imputación a la presente ley.

Y como fuentes de recursos regulares y permanentes, se le asigna, a contar del día de la promulgación de la presente ley;

- b) El 5 % de las entradas brutas de la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales;

- c) Se le transfieren, asimismo, a contar del día de la promulgación de la presente ley, los siguientes porcentajes de impuestos, que serán depositados por las oficinas respectivas, acreditándolos en la cuenta corriente del consejo nacional de colonización, en el Banco de la Nación Argentina, consiguiente a la percepción de los mismos:

El 10 % del impuesto de la nafta, que percibe la Dirección de Vialidad;

El 10 % de los impuestos señalados para la defensa de la producción agropecuaria;

El 1 % de lo que percibe el fisco nacional por impuestos a los réditos;

- d) La percepción de los impuestos que se crean para ese fin exclusivo, por la presente ley y la multas y penalidades que se aplican actualmente sobre los impuestos nacionales y municipales, la que se realizará por intermedio del Banco de la Nación Argentina;

- e) El 1 % que se agregará a la contribución directa a todo predio que exceda de dos mil hectáreas y será transferido por la oficina respectiva;

- f) El 1 % sobre el valor de toda transacción respecto de inmuebles cuyo precio exceda de veinte mil pesos moneda nacional pagadera por el comprador en las ventas y por el prestamista en las hipotecas;

- g) El 20 % de la entrada bruta de los espectáculos de las canchas de fútbol y box, y el 10 % sobre el resultado de toda especulación a base de juego y espectáculo de numeroso público;

- h) La nueva aplicación del impuesto a las transacciones recargando a los artículos suntuarios y bebidas alcohólicas; y excluyendo los alimentos, la ropa y calzado necesarios a la vida modesta;

- i) Se le adjudica íntegra y directamente el importe de todos los fondos muertos y radicados en los bancos en todo el país, sean oficinas o particulares, ya se trate de depósitos para fines especiales que no hayan sido retirados en su oportunidad, por quienes corresponda, habiendo decaído su derecho; o, en general, el saldo acreedor de toda cuenta inmovilizada durante diez años.

A tal fin se ordena a todos los bancos pasar un balance de esos rubros a la Contaduría General de la Nación y efectuar los depósitos de dichos fondos en la cuenta especial «fondo propio de fomento permanente de colonización», a la orden del consejo nacional de colonización radicada en el Banco de la Nación Argentina, casa central de esta Capital, en seguida de promulgada la presente ley; y, toda vez que una

cuenta muerta cumpla los diez años del último movimiento;

- j) El 1 % de los descuentos de carteras bancarias que se obtienen en el Banco de la Nación Argentina, a cargo exclusivo de la entidad solicitante;
- k) Percibir los arrendamientos de las tierras fiscales correspondientes desde el día de la promulgación de la presente ley, y todo lo que por obligación vencida, esté pendiente de cobro;
- l) Las sucesiones que recaerán en colaterales, desde el cuarto grado inclusive, salvo disposición testamentaria en contra; pasarán íntegramente al acervo de «Fondo Propio de Fomento Permanente de Colonización», transmitiéndoselas sin gastos y libres de otros impuestos.

Art. 8º — El consejo nacional de colonización tendrá su sede central en la ciudad de Buenos Aires y podrá establecer comisiones fijas o enviadas ad-hoc, en los territorios nacionales y en las provincias que adhieran, respondiendo a las gestiones que el Poder Ejecutivo hará en cumplimiento del artículo 1º de la presente ley.

Art. 9º — Quedan derogadas todas las leyes y demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 10. — Comuníquese, etc.

Manuel Pinto (h.). — Aníbal P. Arbeletche.

VI

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPITULO I

Creación, denominación y objeto

Artículo 1º — Desde la promulgación de la presente ley, las actuales reparticiones denominadas Dirección General de Inmigración, Dirección General de Tierras, Dirección de Irrigación y Dirección de Parques Nacionales, se refundirán para integrar una nueva institución, que se denominará consejo nacional de colonización, regida por las disposiciones de la presente.

Art. 2º — El consejo nacional de colonización tendrá a su cargo la administración general de las tierras del Estado, dirección de la inmigración, la colonización, administración del riego y gobierno forestal.

Art. 3º — Tendrá su sede en la Capital de la República y será una institución autónoma, con capacidad para actuar privada y públicamente, en base a las leyes generales de la Nación y las especiales que afecten su funcionamiento. Los actos que realice y los contratos que celebre el consejo nacional de colonización por intermedio de sus representantes oficiales, con instituciones o particulares, para realizar los objetivos de esta ley, quedan eximidos de los impuestos con que las leyes de la Nación, gravan esos actos o contratos.

CAPITULO II

Administración

Art. 4º — Estará administrado por un consejo central rentado, compuesto de cinco miembros, los que durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Se renovarán por mitades. El consejo, por

mayoría de votos, se dará un presidente y un vice. La remuneración mensual del presidente será de \$ 1.500 m.n. y de \$ 4.000 m.n. mensuales para los demás miembros, distribuyéndose en proporción a la asistencia de cada uno. Se entenderá que los nombrados, por vacantes producidas dentro de cada período, completan el término que correspondía en cada caso.

Art. 5º — De estos miembros, dos serán nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, y los restantes en representación de cada una de las siguientes instituciones: uno, por el Banco de la Nación Argentina; uno, por el Banco Hipotecario Nacional, designados por sus respectivos directorios; y uno por los consejos locales de colonización oficial.

Deberán ser argentinos, personalmente vinculados a las actividades agrarias, y resultarán solidariamente responsables por los actos del consejo, contrarios a las finalidades de esta ley, salvo que en las actas de sus reuniones haya quedado constancia expresamente contraria. La acción será pública y durará hasta los tres años subsiguientes, en que el miembro haya abandonado tales funciones.

Art. 6º — No podrán formar parte del consejo a quienes comprendan las siguientes causales:

- a) Los que formen parte del directorio o administración de bancos o de entidades privadas, vinculadas a las transacciones en bienes rurales, explotación de bosques, yerbales o minas o de empresas colonizadoras con fines de lucro;
- b) Los que se hallen en estado de quiebra o suspensión de pagos;
- c) Los que perciban dietas, sueldos, jubilaciones o cualquier otro emolumento pecuniario de la Nación, provincias o municipalidades.

Art. 7º — El Poder Ejecutivo podrá intervenir el consejo nacional de colonización en los siguientes casos:

- a) Por renuncia de todos los miembros;
- b) En caso de grave conflicto interno y hechos bien notables, que pongan en peligro la buena marcha de la institución;
- c) A pedido de dos de los miembros o del presidente del consejo y en mérito de las causales del inciso anterior.

No podrá ser interventor quien se encuentre comprendido en las disposiciones del artículo anterior. Sus responsabilidades serán las mismas que alcanzan al presidente o miembros del consejo.

Atribuciones y obligaciones del consejo

Art. 8º — Sin perjuicio de las funciones que le sean encomendadas, por otras disposiciones legales o reglamentarias, el consejo tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- 1º Administrar el fondo general de colonización y los bienes e instalaciones a su cargo, así como todas las tierras del Estado, sin destino especial y con las responsabilidades que establece y determina el Código Civil;
- 2º Preparará la carta orgánica que reglamente esta ley, dentro de los 30 días de constituido y la elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación;
- 3º Celebrará sesiones ordinarias, por lo menos cuatro veces al mes, y extraordinarias, cuando lo

disponga el presidente o por lo menos dos de sus miembros;

- 4º Llevará un registro especial, con anotación de todo lo tratado en las sesiones y nombre de los asistentes;
- 5º Sesionará hasta con tres de sus miembros y sus resoluciones en mayoría se considerarán, con ese mismo número de votos, incluso el de su presidente o reemplazante legal;
- 6º Organizará todas las dependencias técnicas y administrativas, y, con acuerdo del presidente, nombrará o removerá, según las conveniencias y orden administrativo, los funcionarios referidos en el artículo 11;
- 7º Tener los fondos depositados en el Banco de la Nación Argentina;
- 8º Estudiará con el presidente el plan general de colonización y lo elevará a la consideración del Poder Ejecutivo dentro de los 90 días;
- 9º Fijar las condiciones de los contratos, superficies de lotes, fees de pago, permutas e indemnizaciones que hubiere lugar;
10. Organización de las cooperativas y de los consejos locales de colonia;
- 11.—Gestionar de los bancos oficiales el crédito necesario para los colonos de su dependencia y acordar las formas de pago;
12. Realizar trabajos generales o construcciones en las colonias o tierras bajo su custodia, por administración contratada o licitación de acuerdo con la ley de contabilidad;
13. Adquirir artículos, materiales, implementos, plantas o semillas, por licitación pública, o sin ella, hasta la suma de \$ 3.000 moneda nacional;
14. Negociar por el precio o las condiciones de pago más convenientes, los productos que reciba en pago de ventas o arrendamientos;
15. Administración general de la inmigración y del riego;
16. Aceptar con beneficio de inventario, herencias, legados y, en la forma ordinaria, todos los bienes muebles e inmuebles;
17. Preparar anualmente el presupuesto y cálculo de recursos, para ser elevado al Poder Ejecutivo antes del 1º de abril y aplicarlo provisionalmente, según el artículo 9º de la ley número 11.260, pero sin excederse en gastos;
18. Devolver a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones el importe de los sueldos vacantes. (artículo 10, ley número 11.260);
19. Gobierno forestal y administración de los parques nacionales;
20. Fomento del turismo.

Del presidente

Art. 9º — Es el jefe de la administración, responderá ante el consejo, de la buena marcha de ésta y de los trabajos que se ejecuten:

- 1º Atenderá diariamente las tareas inherentes a su cargo;
- 2º Presidirá las reuniones del consejo, tendrá voz en las deliberaciones y su voto será en caso de desempate;
- 3º Ejecutará las disposiciones del consejo; es su reemplazante legal y en su nombre, actuará en los actos públicos y trato oficial;

- 4º Podrá realizar arreglos judiciales o extrajudiciales, con acuerdo del consejo y representará en juicio como mandante o demandado, o podrá confiar poderes para estos trámites o los administrativos en que deba actuar;
- 5º Designar encargado técnico-administrativo al frente de cada colonia;
- 6º Podrá, asimismo, nombrar, remover o ascender directamente, los empleados de su dependencia, con excepción de los que requieren acuerdo especial del consejo, salvo las suspensiones por falta grave;
- 7º Establecer el escalafón y llenar los puestos por concurso;
- 8º Llevar al día el inventario general de bienes y registros especiales;
- 9º Por acefalía, licencia o impedimento material será reemplazado por el vicepresidente, o éste a su vez, por el miembro de mayor edad, pero asumirán idénticas obligaciones y deberes. Se dará conocimiento al Poder Ejecutivo;
10. Comunicará, igualmente, al Poder Ejecutivo o cualquiera de las instituciones a que se refiere el artículo 5º, la cesantía y sus motivos, del representante de aquéllas en el seno del consejo.

Art. 10. — Al promulgarse esta ley, el Poder Ejecutivo reglamentará de inmediato la forma en que las instituciones a que se refiere el artículo 5º deberán elegir sus representantes al consejo, y designará a su tiempo un comisionado al solo efecto de proceder a su organización y designación de autoridades.

Personal superior

Art. 11. — El Consejo Nacional de Colonización tendrá un secretario general, que lo será también del consejo; contador, tesorero, ingeniero agrónomo asesor, asesor letrado y cinco jefes técnicos de división, como personal superior de la institución. Estos últimos tendrán, respectivamente, a su cargo las cinco reparticiones que lo integran:

- a) Colonización;
- b) Tierras y bosques;
- c) Inmigración;
- d) Riego;
- e) Parques nacionales y turismo.

Art. 12. — Queda terminantemente prohibido y de hecho cesará inmediatamente todo miembro del consejo o empleado a sueldo de la administración que por sí o por intermedio de terceros verifique operaciones o trámites particulares con esta institución o suministre informes indebidos.

Consejos locales

Art. 13. — En cada colonia oficial tendrá su sede un consejo local honorario, presidido por el agrónomo regional e integrado por tres colonos y el encargado técnico-administrativo de la misma colonia. Sus reuniones ordinarias serán quincenales, y las extraordinarias, a solicitud de, por lo menos, dos de los miembros que deben integrarla. Una copia de sus resoluciones deberá elevarse inmediatamente al consejo general.

Contabilidad

Art. 14. — El cierre de los ejercicios financieros se verificará anualmente el 31 de diciembre, debiendo elevar de inmediato al Poder Ejecutivo los balances y rendiciones de cuentas pertinentes para su aprobación y conocimiento de la Contaduría General de la Nación. Esta última repartición podrá, asimismo, intervenir en cualquier momento la contaduría y tesorería del Consejo nacional de colonización y verificar todas las comprobaciones que estime pertinentes.

CAPITULO III

Fondo nacional de colonización

Art. 15. — A los fines de esta ley, créase un fondo nacional de colonización, con los siguientes recursos:

- 1º Producido general por venta y arrendamiento de tierras fiscales;
- 2º Producido general por la explotación de bosques o afines y riego;
- 3º Producido general por venta de lotes de colonia y de productos animales o vegetales, provenientes de las colonias;
- 4º Arrendamiento de locales, instalaciones o maquinaria;
- 5º Recursos establecidos por la ley número 817, como asimismo de otras leyes especiales que se sancionen;
- 6º Producido por la administración de riego y de parques nacionales;
- 7º Recursos provenientes de empréstitos que se autoricen a este fin;
- 8º Importe de multas, pérdida de depósitos de garantía o de intereses que se impongan por falta de cumplimiento de disposiciones legales;
- 9º Donaciones, legados o aportes de diversa índole;
10. Negociación de cédulas hipotecarias, títulos de renta o el rédito de éstos y de depósitos en efectivo.

Art. 16. — Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir y mantener en circulación, a los fines de esta ley, un empréstito interno que se denominará empréstito colonizador Alberdi, hasta la suma de \$ 30.000.000 moneda nacional, en series anuales de \$ 10.000.000 cada una, en bonos al portador de un valor de \$ 5.000, 1.000, 500 y 100 m/n., que no se colocarán a menos de la par, interés máximo de 5 ½ % anual, pagaderos por semestres vencidos y 2 % de amortización anual acumulativa mínima, que se hará por sorteo a la par, o por licitación sobre ella; pudiendo el Poder Ejecutivo en cualquier momento que lo juzgue conveniente y previo informe del consejo nacional de colonización, cancelar definitivamente los efectos de esta ley, respecto a los bonos no colocados. Los títulos y cupones de este empréstito estarán exentos de todo impuesto nacional o provincial, actual o futuro.

Art. 17. — Quedan especialmente afectados para atender los servicios de amortización de los bonos que se emitan por esta ley, el producido de la venta de tierras y el fondo de colonización. Los servicios del primer semestre podrán pagarse de rentas generales, pero con cargo de reintegro.

Art. 18. — Anualmente se fijará en la ley de presupuesto general de la Nación, una partida destinada a sufragar los gastos administrativos del consejo nacional de colonización.

CAPITULO IV

De las tierras colonizables

Art. 19. — Previamente establecido el plan concreto de colonización, el consejo utilizará a tal efecto, preferentemente, las tierras aptas que por esta ley quedan bajo su custodia y no tienen otro destino especial.

Los campos a colonizar tendrán una superficie con capacidad para no menos de 30 lotes agrícolas más las reservas para las actividades auxiliares de la colonia. Con ubicación económica respecto a los centros de embarque o de consumo. Altos, de cultivo directo, con no menos de un 97 % de tierra francamente apta para la agricultura y con agua «dulce» abundante y de económica extracción.

Adquisición y formas de pago

Art. 20. — En los casos que fuera necesario adquirir tierras a este mismo fin, únicamente se verificará mediante licitación pública debidamente condicionada y con aprobación del consejo los pagos deberán efectuarse con bonos a la par únicamente.

El precio de compra en ningún caso podrá exceder de los \$ 250 m/n. por unidad de superficie y dentro del cual deberán preferirse, muy en particular, aquellas tierras cuyo valor sea lo más inferior posible al de su renta capitalizada. La preferencia, en cuanto a las ofrecidas por las instituciones oficiales de crédito y aun del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, sólo se tendrá en cuenta a igualdad de calidad y precios.

Trazado de las colonias

Art. 21. — Cada colonia dispondrá de dos caminos diagonales de 30 metros de ancho, que se crucen en su centro geométrico, y caminos secundarios de 15 metros.

Contará con una reserva de 120 hectáreas para villa, ubicada dentro de lo posible en la parte central y otra de igual superficie destinada a la colonia escuela y chacra experimental, viveros, etcétera.

Art. 22. — Según el carácter de la explotación proyectada y el valor de la tierra, los lotes de colonia no tendrán una superficie menor de 6 hectáreas, ni mayor de 120.

Se entregarán alambrados y con la subdivisión más indispensable. Además, si se creyera conveniente, se invertirán hasta \$ 12.000 m/n. en la construcción de una casa habitación rústica, de dos piezas y dependencias, molino y tanque, y un pequeño cobertizo.

Art. 23. — La reserva para villa, expresada en el artículo 20, tendrá en su centro una plaza de cuatro hectáreas; alrededor de ésta, manzanas conviniendo cada una 4 solares de 40 por 40 metros, y en el resto de la superficie, lotes de quinta de 2 y 4 hectáreas, y todos ellos separados por calles de 15 metros de ancho. La reserva para plaza, manzanas y lotes de quintas quedarán delimitadas mediante un alambrado, y como única mejora introducida en ellos.

Art. 24. — Frente a la plaza se dará ubicación a la casa de la colonia, en la cual tendrá su sede el encargado técnicoadministrativo de la misma, la cooperativa, una sala de primeros auxilios, salón biblioteca para reuniones generales, y el club social y deportivo.

Otras reservas se destinarán a depósitos generales de la colonia, dependencias de servicios públicos y un gran campo de deportes.

CAPITULO V

Colonización

Organización cooperativa

Art. 25. — Cada colonia deberá constituir un centro cooperativo, en cuanto a consumo, industrialización y venta de la producción. El consejo nacional de colonización organizará, cuando lo crea oportuno, tal sistema y llevará su contralor regular.

Podrá destinar hasta un 5 % del fondo de colonización en dotar a estas colonias de depósitos generales para la producción, compra de maquinarias e implementos más indispensables para la cosecha e industrialización que más convenga, y cederlos en arrendamiento a aquéllas.

Del mismo modo, propiciará la instalación de mercados regionales, para la venta de la producción de sus colonias y con la colaboración de las autoridades municipales en los grandes centros poblados.

El Banco de la Nación Argentina dará preferente atención a los pedidos de créditos de estas cooperativas.

Requisitos para aspirar a lotes de colonia

Art. 26. — Los aspirantes a colonos deberán ser agricultores profesionales, no tener otra propiedad rural, sanos, de buenos antecedentes, casados y con hijos. Pueden ser, igualmente, viudos, con hijos, entre los cuales, uno por lo menos, varón y de mayor edad.

El titular del lote no podrá ser menor de 20 años —mayoría de edad que se reconoce al solo efecto de esta ley,—ni mayor de 55. Se los preferirá rigurosamente en el siguiente orden:

- a) Arrendatarios rurales del país;
- b) Egresados de colonias escuelas, cuarteles de colonización o de cualquier otro establecimiento con enseñanza agrícola práctica;
- c) En general, argentinos o extranjeros, prácticos en tareas agrícolas.

Los indígenas deberán ser agrupados en colonias especiales y cuya organización el consejo nacional de colonización propondrá oportunamente. Del mismo modo, en cuanto a las conveniencias de que en determinadas zonas sean colonos argentinos únicamente. A los efectos de una mayor selección y contralor, el consejo nacional de colonización llevará un registro especial, con el nombre, nacionalidad, domicilio y demás antecedentes de los que aspiren a lotes de colonia o de cualquier otra tierra.

Venta de lotes de colonia

Art. 27. — Tanto los lotes de colonia como los de quinta y solares de villa, saldrán a la venta con base inferior a la de su posible renta capitalizada, si fueran de tierras fiscales, a precio de costo, cuando provienen de tierras adquiridas. A este valor de la tierra se agregará el de las mejoras fijas y movibles que en ellas se hubieran introducido hasta el momento de ser adjudicadas, más un 12 % como recargo, por gastos de mensura y dirección técnicoadministrativa.

En venta, cuando se trate de lotes de colonia o en general tierras de cultivo, se realizará en forma directa o mediante licitación privada si fueran muchos los interesados.

El que resulte adjudicatario depositará de inmediato un 10 % del importe de la cuota anual y el resto al suscribir el contrato respectivo. Se le extenderá un título provisional de propiedad, reconociendo hipoteca por el saldo deudor.

Forma de pago

Art. 28. — El colono abonará el importe de su lote en cuotas anuales de un 4 % de amortización, sin intereses y 1 % por gastos administrativos.

La primera anualidad la hará en la forma establecida en el artículo anterior, la segunda, al iniciarse el tercer año agrícola, y las sucesivas al iniciar el siguiente año agrícola.

Por causas de fuerza mayor, el consejo nacional de colonización queda facultado para acordar las moratorias que crea pertinentes, pero en este caso las anualidades atrasadas el colono deberá abonarlas con un 6 % de interés.

Art. 29. — El comprador podrá anticipar en cualquier forma sus pagos, pero la escritura definitiva no se extenderá bajo ningún concepto antes de los 15 años de residencia efectiva en el lote y de haber cumplido con todas las obligaciones contraídas.

Estos lotes, así como toda su producción, quedarán exentos de todo gravamen en vigor o a crearse durante los cinco primeros años.

De los contratos

Art. 30. — Sin perjuicio de otras obligaciones reglamentarias, se hará constar en los contratos que el colono se obliga a:

- a) Radicación obligatoria y con la familia, en término no menor de 15 años;
- b) Conservar las mejoras existentes en el lote;
- c) Acatar las indicaciones oficiales que se le formulen;
- d) Cooperación obligatoria;
- e) Plantar y conservar, por lo menos cinco árboles por hectárea;
- f) Prohibición de preñar la producción, si no es con los bancos oficiales y con intervención del consejo nacional de colonización;
- g) Orden de los pagos y causas de rescisión.

Rescisión

Art. 31. — Serán causas de rescisión de contrato, además de las expresamente determinadas en el artículo anterior:

- a) Ser dueño de otra propiedad rural;
- b) Abandono del lote;
- c) Atraso en el pago de sus anualidades, concepto malicioso o derivado de su incapacidad;
- d) Subarriendo o aparcería;
- e) Realizar actos contrarios a los propósitos de esta ley;
- f) Comisión de delitos punibles.

Prevía información sumaria, testifical y oído al colono, según el caso, éste podrá ser desalojado dentro de los primeros quince días, sin indemnización.

En casos de divorcio o separación legal, el cónyuge que resulte culpable deberá abandonar de inmediato el lote, y de hecho transferidos sus derechos a su esposa e hijos.

Art. 32. — Por fallecimiento o impedimento involuntario del colono y de su esposa, y siempre que se compruebe tal imposibilidad de cumplir con las obligaciones contraídas, se rescindirá el contrato, acordándosele treinta días para el desalojo, y como única indemnización, el colono o sus deudos recibirán el 40 % del importe calculado por las mejoras fijas y útiles del punto de vista agrario que haya introducido en el lote y con deducción de las anualidades adeudadas.

En igual forma corresponderá indemnizar a los arrendatarios rurales que estando al día con sus pagos tuvieran que abandonar su lote.

Producción preferida

Art. 33. — Dentro de la racionalización de la producción, que integrará los planes de esta colonización, el consejo nacional de colonización contemplará a la vez la posibilidad de cultivar y obtener, en cuanto sea posible, aquellos productos de origen animal o vegetal que aun se importan al país en apreciables cantidades.

Además, por sobre la monocultura, en las explotaciones referidas, primará la orientación hacia la chacra de subsistencia.

En las chacras experimentales de las colonias, como así también en las dependientes del Ministerio de Agricultura, se realizarán todos los estudios pertinentes en tal sentido, y a las cuales podrán concurrir periódicamente los colonos, para cerciorarse prácticamente de los resultados obtenidos y ventajas de las distintas disciplinas agrícolas y de industrias de la granja.

CAPITULO VI

Enseñanza con fines de colonización

Colonias escuelas

Art. 34. — Con la cooperación efectiva del Consejo Nacional de Educación y del Ministerio de Agricultura, el consejo nacional de colonización organizará en cada colonia a su cargo un instituto que se denominará colonia escuela, en la cual se administrará gratuitamente, al par que la enseñanza primaria, la agrícola práctica. Y, preferentemente, para los hijos de los propios colonos.

Podrán internarse en estos institutos niños de ocho hasta dieciséis años, y la enseñanza quedará comprendida en un plan básico de estudios de cuatro años.

Funcionarán anexas a la chacra experimental de la colonia y dispondrán de todas las dependencias que tales instalaciones requieran.

Cuarteles de colonización

Art. 35. — El consejo nacional de colonización podrá crear en su oportunidad y en reserva de tierras fiscales aptas para la agricultura de cada territorio nacional, chacras colectivas en superficies no menores de 1 000 hectáreas, dotadas de construcciones, viveros y demás instalaciones adecuadas, que se denominarán cuarteles de colonización, y en los cuales se administrará a los adultos práctica agrícola gratuita.

Los aspirantes deberán ser argentinos, no mayores de treinta años, sanos y de buenos antecedentes.

Recibirán casa, alimentación e instrucción necesaria y se ajustarán rigurosamente a las disciplinas de orden y trabajo que los reglamentos establezcan. Tendrán

derecho a permanecer internados sólo durante un año agrícola, al cabo del cual se les entregará un 30 % del beneficio líquido que hubiera producido dicha explotación colectiva.

CAPITULO VII

Inembargabilidad

Art. 36. — Por disposición expresa de esta ley, decláranse inembargables los lotes de colonias fiscales con todo su contenido y producción, por deudas contraídas por el colono antes de su escrituración definitiva, salvo de las que provienen con instituciones del Estado nacional o provinciales.

En cuanto a las demás tierras fiscales, vendidas en virtud de esta ley, sólo son embargables por deudas contraídas por sus construcciones fijas o refeción de las mismas. En cuanto a su producción sólo podrá ser embargada hasta en un 30 por ciento.

En cualquiera de estos casos, considérase al consejo nacional de colonización como deudor privilegiado.

Decláranse, igualmente, inembargables por deudas del Estado con respecto a terceros.

Hogar de amparo

Art. 37. — Modifícase el artículo 13 de la ley número 10.284, que dejará de ser una ley especial e incorpórase al texto de la presente en la siguiente forma:

«Declárase inembargable toda propiedad urbana o rural, cuyo valor no exceda de \$ 10.000 m/n., a condición de que en el momento de ser inscripta en el registro especial que a tal efecto dispondrán los juzgados de paz de su jurisdicción, como hogar de amparo, debiendo estar libre de gravámenes y habitada personalmente por su dueño. Este privilegio es por esa sola propiedad y no alcanza a las deudas por gravámenes fiscales o provenientes de la construcción o refeción de la vivienda. El trámite se verificará en papel simple y surtirá efectos con respecto a terceros, desde dicho acto. Por fallecimiento del propietario, este amparo se hará extensivo para la viuda y sus hijos, hasta mayoría de edad, en que recién podrá dividirse con arreglo a derecho común.»

CAPITULO VIII

Destino general de las tierras públicas

Art. 38. — Clasifícanse las tierras públicas por su destino, en cuatro grandes categorías:

- a) De edificación;
- b) De cultivo;
- c) De arrendamiento;
- d) De fronteras.

El consejo nacional de colonización propondrá de inmediato al Poder Ejecutivo la reglamentación pertinente, en que quede establecido expresamente que no se hará ninguna adjudicación de tierras fiscales, si no es con la condición expresa de explotación y residencia personal.

Tierras de edificación

Art. 39. — Las tierras ubicadas dentro de la planta urbana de los pueblos, sin destino especial y solares

de villa, tal cual se refiere el artículo 23, se las subdividirá en lotes económicos edificables, adjudicándose en subasta pública un solo lote por persona y en las siguientes condiciones:

- a) Obligación de cercarlo y edificarlo, por lo menos con una habitación de material y cocina, antes de cumplirse el primer año de serle adjudicado, salvo de que ya existieran dichas mejoras;
- b) Pago en anualidades, anticipando la primera, según artículo 25, y las siguientes a partir del tercer año de la compra en el remate;
- c) Prohibición absoluta de subarriendos, ventas o transferencias, antes de la fecha de escrituración, y obligación de conservar las mejoras existentes en el lote;
- d) Escrituración no antes de los quince años de la posesión y residencia efectiva en el lote, y constatado el cumplimiento de las obligaciones contraídas;
- e) Caducidad, según los artículos 29 y 30.

Tierras de cultivo

Art. 40. — Las tierras de cultivo, que por su reducida extensión u otras circunstancias especiales, no puedan ser colonizadas, según esta ley, se las subdividirá, cuando así convenga, en parcelas de 6 a 120 hectáreas, y se entregarán a la venta, debidamente amojonadas, en las condiciones de los artículos 26, 27, 28, 29 y 30. Excepcionalmente la cooperación obligatoria. En cambio, el adjudicatario quedará obligado a levantar en el lote su casa habitación de dos habitaciones y cocina, antes del primer año de compra.

Art. 41. — Si a juicio del consejo nacional de colonización resultara económicamente conveniente establecer colonias agrícolas oficiales en zonas de tierras fiscales susceptibles de ser regadas, planeará su realización, y oportunamente lo someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo, a fin de que a su vez gestione el Congreso nacional la sanción de la ley respectiva que acuerde los recursos necesarios para las obras de riego.

Tierras de arrendamiento

Art. 42. — Toda tierra fiscal, no susceptible de ser colonizada antes de los tres años, o que no pueda ser enajenada según los artículos anteriores y en general las que no sean susceptibles de su racional explotación agrícola, no podrán ser enajenadas bajo ningún concepto y sí sólo entregadas en arrendamiento.

Interin el consejo nacional de colonización no resuelva las condiciones especiales de arrendamiento de las tierras en cuestión, se regirán por las vigentes, en cuanto no se opongan a esta ley.

Quedan, también, comprendidas en calidad de tierras de arrendamiento las reservas que se establecen en virtud de la ley número 5.559.

Art. 43. — A los fines del artículo anterior, se arrendarán en lotes amojonados, cuya extensión, a juicio del consejo nacional de colonización, pueda abastecer el sostenimiento de una familia y por períodos de tres años, siempre sucesivamente con opción a otros tres, hasta su destino agrícola definitivo.

Durante el arrendamiento o al término del mismo, estando el ocupante al día en sus pagos y obligaciones y siempre que con dos meses de anticipación haya expresado por escrito su propósito de no acogerse a los beneficios que establece el artículo 32, podrá acordarsele

en venta el lote donde haya levantado su casa habitación, pero en superficie de hasta 120 hectáreas y en las pertinentes condiciones generales que corresponda, según los artículos 39 y 40.

Tierras de fronteras

Art. 44. — Suspéndese toda entrega de títulos de propiedad de tierras fiscales ubicadas a lo largo de las fronteras, de los territorios nacionales, dentro de un ancho de 30 kilómetros.

El consejo nacional de colonización formará sobre la base de esas tierras y siempre que por la capacidad ecológica y del terreno y conveniencia económica así lo permita, colonias de explotación mixta, en lotes de hasta 120 hectáreas, debiendo los aspirantes ser argentinos nativos y llenar expresamente las condiciones de explotación y residencia personal. En general, se registrarán de acuerdo con las disposiciones establecidas en la presente ley.

CAPITULO IX

Régimen de la colonización privada

Art. 45. — Declárase obligatoria la inscripción y aprobación de todo plan de colonización y contratos respectivos, que se propongan realizar particulares, empresas o instituciones en los territorios nacionales.

Todo acto realizado por aquéllas, sin llenar este requisito, se lo considerará insanablemente nulo y sin ningún valor legal.

Los Bancos de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional no concederán los créditos que acuerdan sus leyes orgánicas, a tales fines, cuando los particulares o instituciones interesadas no se ajusten a tal disposición.

Art. 46. — El consejo nacional de colonización hará efectiva de inmediato la apertura de un registro especial, que se denominará registro de colonización privada, destinado a la inscripción de todo plan no oficial de colonización.

Los interesados adjuntarán a sus solicitudes los recaudos que establezcan las reglamentaciones de la presente, y sus contratos; además, deberán ajustarse a las exigencias de leyes agrarias vigentes; no contendrán cláusulas restrictivas de la nacionalización de extranjeros o que comprometan los derechos o garantías individuales que la Constitución consagra.

Art. 47. — El consejo nacional de colonización auspiciará preferentemente, dentro de las colonizaciones particulares, las organizadas por instituciones de beneficencia y asistencia social. Sólo gozarán de franquicia consular y aduanera los inmigrantes que justifiquen ser llamados por éstas, y las de origen oficial.

Establecerá, asimismo, el servicio de control y vigilancia de las organizaciones a que se refiere el artículo anterior y en particular de aquellas colonizaciones con propósito de lucro.

CAPITULO X

Disposiciones generales

Art. 48. — Las provincias que deseen acogerse a los beneficios de esta ley, deberán hacerlo mediante ley especial de sus respectivas Legislaturas, que contemple el privilegio absoluto de la presente y la facilidad en todo sentido para su aplicación; y en cualquier caso

se verificará en sus tierras fiscales aptas o en las que adquirieran a ese fin.

Queda expresamente establecido que, ante todo, el consejo nacional de colonización colonizará en tierras fiscales, quedando facultado, igualmente, para hacerlo en tierras sin destino especial que estén a cargo del Consejo Nacional de Educación, transferidas especialmente a esos efectos.

Coordinación administrativa

Art. 49. — Las relaciones del consejo nacional de colonización con el Poder Ejecutivo se realizarán por intermedio del Ministerio de Agricultura, al cual se elevarán las memorias anuales, balances y toda otra publicación o información dispuesta por ley.

Art. 50. — Dicho ministerio facilitará sin cargo alguno, al consejo nacional de colonización, los informes y asesoramiento técnico que requiera, materiales y elementos necesarios para el arbolado y experiencias en sus chaclas de colonia.

Coordinará del mismo modo su acción en cuanto a la acción educativa y cooperativa señaladas.

El consejo nacional de colonización podrá gestionar directamente, ante la Dirección Nacional de Vialidad, todo cuanto pueda considerar necesario para el mejor éxito de su acción colonizadora.

CAPITULO XI

Reformas legales

Art. 51. — Las concesiones de explotación de bosques fiscales y de pastaje en los mismos, no serán renovadas hasta tanto se dicte la ley respectiva sobre régimen del gobierno forestal.

El consejo nacional de colonización, elevará a la consideración del Poder Ejecutivo dentro de los ciento veinte días de su constitución, un anteproyecto de ley en la materia, en cuanto a la administración definitiva de los parques nacionales y zonas forestales de reserva fiscales para el turismo.

Art. 52. — Propondrá, igualmente, al Poder Ejecutivo las reformas necesarias a la ley de inmigración vigente; la ley básica de riego; de arrendamientos agrícolas.

Oportunamente estudiará la forma más viable del punto de vista impositivo, para reducir el latifundio.

CAPITULO XII

Publicidad

Art. 53. — El consejo nacional de colonización dará a esta ley amplia difusión, haciendo conocer a los agricultores sus alcances y beneficios.

Anunciará en la campaña con suficiente antelación, la formación de las nuevas colonias y condiciones generales para aspirar a sus beneficios, y en igual forma, en cuanto a la venta y arrendamiento de tierras fiscales. Mensualmente publicará un boletín gratuito, en el que se reseñará detalladamente cuanto gestión y operación ha realizado en dicho período.

Art. 54. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente.

Art. 55. — Comuníquese, etc.

Francisco F. Eyto.

Sr. Presidente (Kaiser). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Palacio. — Señor presidente: toca al Congreso, avocarse al estudio de unas de las leyes más trascendentales sometidas a su consideración en los últimos años y quizás, en todos los tiempos de su ya larga evolución como cuerpo esencial en la vida política del país.

Su trascendencia radica y puedo afirmarlo sin eufemismos y sin hipérbole, en que realizar la que fuera aspiración incontenible de los fundadores de la nacionalidad, de crear en esta parte del continente americano, un pueblo fuerte y viril, capaz de plasmar en el espacio y en el tiempo, sus grandes ideales de libertad y de justicia.

Alberdi en su *Bases* memorable, alude a la grandeza del país con 50.000.000 de habitantes y aconseja escapar a «la soledad de los desiertos incommensurables de América, por medio de la colonización, que como quiera que haya sido en el pasado, dice, le debemos nuestra existencia y es posible que se la deban en el futuro millares de pueblos americanos».

Sarmiento, al inaugurar la estatua de Belgrano en 1873, presiente a nuestra bandera «acaudillando 100.000.000 de argentinos hijos de nuestros hijos» y en *Argirópolis* aconseja que utilicemos la tierra y que atraigamos las emigraciones y que sepamos seducirlas y mezclarlas, porque la emigración, dice, de naciones viejas a las nuevas, hace el papel de vapor en la industria: centuplica las fuerzas y produce en un día el trabajo de un siglo, agregando «que América tiene esta gran misión en la civilización universal».

Y Avellaneda, que con Rivadavia comparte la honda preocupación por el problema de la tierra argentina, asocia a su fervor por la inmigración a la que quiere suscitarla por todos los medios, la idea de la colonización como el medio de dar fácil acceso a la tierra al inmigrante, para que tenga como él decía, la certeza consoladora de que algún día terminará su peregrinación sobre la tierra.

Su trascendencia también radica en que aspira a consolidar nuestro poderío económico resquebrajado por el vendaval de la hora actual, que al derribar los cimientos de la economía y de las finanzas clásicas, pone en grave peligro su estabilidad en el presente y su exitosa evolución en el futuro.

Radica, igualmente, en que tiende a dar contornos de primera magnitud a la Nación, lo que es y será imposible, mientras permanezca despoblada y sus hijos vagabundos y errantes en

su propia patria, como los restos flotantes de un naufragio.

Radica, asimismo, en que anhela cimentar de manera definitiva las instituciones sociales y políticas de la República, creando la libertad económica en sus grandes masas, sin la cual, aquéllas, son presa fácil de la demagogia o del verbalismo intrascendente y banal, capaces el uno como el otro de operar su derrumbe.

Radica, en fin, en la necesidad que ya es indirectiva fundamental y básica, restablecer en lo posible el equilibrio en la distribución de la escantiosa riqueza del país, acortando la distancia que separa a sus distintas clases, que engendra su lucha incesante, agudizada por la injusticia erigida como norma de convivencia social.

—Ocupa su asiento, el señor ministro de Agricultura, ingeniero don José Padilla.

Radica, en fin, en la necesidad que ya es impostergable y urgente, de estabilizar en la tierra argentina a sus grandes masas rurales y a los hombres de buena voluntad que vengan a habitarla, al amparo de sus leyes básicas, y en la tarea que debemos emprender sin demora, de acentuar las medidas de gobierno que eleven el standard de vida de los pobladores de nuestros campos, que racionalicen su producción y que la coloquen en condiciones ventajosas en los mercados interiores e internacionales de consumo.

Con lo que dejo dicho, queda sintetizada la importancia indudable de la ley, que la Comisión de Legislación Agraria trae a consideración de la Honorable Cámara, cuyos propósitos se precisan por otra parte, en el primer artículo de su largo y voluminoso despacho.

Antes de entrar al análisis general del mismo, a los hechos que lo determinan y a las consecuencias benéficas que traerá a la República esta ley de colonización, séame permitido referirme a los elementos con los que se lo ha elaborado, esbozando a grandes rasgos sus antecedentes legislativos, y diciendo siquiera sea de paso, el procedimiento por el que se ha llegado a su estructuración, hasta exhibirlo como la expresión unánime del pensar y del sentir, de todos los sectores que integran a esta Honorable Cámara.

En el período legislativo anterior, la Comisión de Legislación Agraria se avocó al estudio del grave problema que desde hace más de 30 años, viene preocupando a todos los hombres públicos que han tenido sobre sí la responsabilidad

del gobierno del país, en sus ramas Ejecutiva y Legislativa.

Tenía a su disposición el enorme material acumulado en tan largo lapso.

Numerosos legisladores de esta Cámara y en el Senado, se habían planteado el problema de la colonización del país, presentando iniciativas tendentes a resolverlo.

Lo mismo habían hecho, gran número de sus jefes de Estado, desde el doctor Quintana, que, por intermedio de su ministro de Agricultura doctor Damián M. Torino, abordara el problema, enviando un mensaje y proyecto de ley durante su ya lejano gobierno, aspirando a resolverlo, hasta los presidentes Sáenz Peña, con sus ministros doctores Mujica y Lobos, el presidente Alvear, con su ministro doctor Le Breton, el presidente Irigoyen con sus ministros Pueyrredón e ingeniero Demarchi y el presidente Justo con sus ministros de Tomaso y Cárcano, para no aludir sino a los más recientes, cuyos mensajes y proyectos de ley, son conocidos, en los que partiendo de puntos de apreciación más o menos semejantes, penetran en el complejo problema de la colonización del país, lo analizan y estudian con erudición y clara visión de su indudable importancia proponiendo adecuadas soluciones para el mismo.

A este enorme material se agregaba las leyes sobre tierras e inmigración de septiembre de 1876; la ley número 4.167, dictada en 1903 bajo el gobierno del presidente Roca y de su ministro de Agricultura, doctor Escalante; la ley número 5.559 que proyecta el presidente Figueroa Alcorta y que tuvo como líder a su ministro de Obras Públicas, Ezequiel Ramos Mejía, destinada al fomento de los territorios nacionales por medio de su colonización, combinada con la ejecución de obras públicas, destinadas ha hacerla viable y floreciente a aquéllos; la ley número 6.712, destinada a comprender en el régimen de la mencionada ley número 5.559 al territorio de Misiones; la ley de *homestead* número 10.284 y la amplísima legislación que sobre la materia nos proporciona la legislación extranjera, entre las que se destacan las leyes colonizadoras últimas de Chile, Méjico, Paraguay, Colombia y la extinguida República Española, todo ello sin contar con las leyes en virtud de las cuales pueden desenvolver verdaderas tareas colonizadoras los Bancos Hipotecario y de la Nación y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias.

Por último, tenía la comisión como material de información y de estudio, que a la vez proporcionaba la ventaja de haber pasado por el

tamiz de la experiencia en nuestro propio país, las leyes de colonización dictadas en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, durante los gobiernos, respectivamente, de los doctores Fresco, Etchevehere y Molina. En base de este amplísimo material, su inteligente secretario diputado doctor Horne, fué encargado de redactar un proyecto de despacho entonces, el que presentado al seno de la comisión el año pasado, fue objeto de un largo y meditado estudio por ésta, introduciéndole las modificaciones que creyó necesarias, hasta dejarlo redactado, en los términos que conocen los señores diputados.

No debo dejar de destacar que a numerosas de las sesiones de la comisión en que fué estudiado y considerado este arduo problema de la colonización, concurrió el señor ministro de Agricultura, ingeniero Padilla, exponiendo el criterio del Poder Ejecutivo sobre el mismo.

El despacho que considera la Honorable Cámara, tiene su aquiescencia y es expresión también de su inteligente colaboración, prestada a la comisión en todo momento.

Los antecedentes legislativos en materia de colonización, tienen como aspiración dominante atraer la inmigración europea para acelerar el proceso demográfico de la República, siguiendo el conocido lema alberdiano de que gobernar es poblar, y las medidas que proponen para realizarlo conducen, por medios diversos, a la división de la propiedad raíz y al arraigo de los trabajadores agrarios en la misma.

Prescindiendo de la ley de *homestead*, número 10.284, que ya en 1906 la proponía el diputado Pera, bajo la denominación de «ley de amparo», tendente a dotar a todo padre de familia argentino, o extranjero que se naturalizara, de una parcela de tierra de 20 a 200 hectáreas, para subvenir a sus necesidades vitales, y de las leyes de tierras vigentes, que aluden principalmente al régimen de las tierras fiscales, a su administración, al arriendo y al parcelamiento de las mismas, pues tales instrumentos legales no pueden catalogarse como leyes tendentes a implantar racionalmente una colonización en el país, los antecedentes legislativos existentes y los propios proyectos remitidos por los Poderes Ejecutivos que se han sucedido en el país, casi diría desde la organización nacional, no tienen otras finalidades y medios que las que dejo enunciadas.

En 1910, el diputado Saavedra Lamas propugna por reglamentar el artículo 25 de nuestra Carta Fundamental, que ordena al gobierno federal fomentar la inmigración europea y no restringir, limitar ni gravar con impuesto

alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes, y proyecta garantías hasta de 20.000.000 de pesos oro a las empresas colonizadoras que se crearan para constituir en el país núcleos coloniales formados por familias traídas directamente del extranjero, autorizando las expropiaciones que fueran necesarias para dotarlas de tierras, iniciativa que amplía en 1912, confiando mayores atribuciones al Poder Ejecutivo con idéntico propósito.

Los proyectos de los diputados Parera, presentado en 1912, el de los diputados de la Torre y Lagos en 1914, el del diputado Le Breton en 1918, el de los diputados Anello y González Zimmerman en 1921, el del diputado Quirós en 1922, el del diputado de Tomaso en 1924, y los más recientes del diputado Costa Méndez, presentado en 1933, y el de los diputados Cafferata y Courel, Pinto y Arbeletche y Ertó, que con sus fundamentos se transcriben íntegramente en la orden del día que considera la Honorable Cámara, abordan el problema de la colonización, creando unos, instituciones autárquicas para desenvolverla, haciéndola depender otros, directamente del Poder Ejecutivo de la Nación, estableciendo financiaciones distintas para llevarla a cabo, que se traducen unas veces en la emisión de títulos de la deuda pública para la adquisición de tierras y su parcelamiento y entrega en propiedad a los agrarios y otros, en la entrega de dicha propiedad, para ser pagada por los adquirentes mediante facilidades acordadas por el Banco Hipotecario o por el Banco de la Nación.

El despacho que considera la Honorable Cámara, hunde sus raíces en todos estos antecedentes legislativos; en los proyectos enviados por los Poderes Ejecutivos a que antes me he referido; en las ideas expuestas sobre colonización en los eruditos mensajes de que venían acompañados, entre los que me permito destacar el del ministro de Agricultura del doctor Alvear, doctor Le Breton, y tiene como antecedente inmediato y fundamental el proyecto de ley remitido por el presidente Justo y que suscribe su ministro de Agricultura, doctor Cárcano, en las postrimerías del gobierno de éste.

¿Por qué el país debe ser dotado de una ley de colonización, y es inconcebible que todavía no la tenga, a pesar de que funda todo su poderío económico en la producción de sus tierras ubérrimas, en consorcio magnífico, con la labor y el esfuerzo de sus clases agrarias?

¿Es admisible que la tierra argentina permanezca todavía sujeta al régimen que nuestra legislación civil le impone a toda la propiedad raíz sin distinción alguno, cuando sus características, sus modalidades y el bienestar colectivo imponen una legislación inherente sólo a ella, que contemple las exigencias de aquél y las crudezas de la realidad económica actual?

Es sabido que nuestra legislación civil tiene un régimen idéntico para la propiedad raíz, sea urbana como rural.

El individualismo más excluyente lo preside. El *jus utendi* y *abutendi* de la legislación romana, que se trasunta más tarde en el Código de Napoleón, se exhibe en el dominio de la propiedad raíz argentina, tal como ha sido estructurado por Vélez Sársfield.

De ahí que, entre nosotros, el dueño de un bien raíz dispone de él en absoluto, de acuerdo con sus conveniencias y necesidades propias, con prescindencia del interés colectivo, que para exteriorizarse y hacerlo cesar, tiene que valerse de los procedimientos excepcionales que la Constitución y las leyes de fondo han puesto en sus manos.

El dueño de un predio puede lo mismo usarlo y hacerlo progresar, que desnaturalizarlo en su destino, abandonarlo como destruirlo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º, don Carlos A. Pita.

En la legislación moderna y sobre todo en la doctrina, hay una marcada evolución en lo que se refiere al concepto del derecho de propiedad, en el sentido de suprimir, o cuando menos atenuar, el individualismo absoluto que lo domina, atribuyéndole un concepto más amplio y subordinando su ejercicio al interés y a las necesidades de la colectividad.

En mayo de 1927 se reúne en Córdoba el I Congreso Nacional de Derecho Civil y declara «que el concepto individualista absoluto bajo el cual está organizada la institución del dominio en nuestro Código Civil, debe ser substituído por otro más amplio que concilie el interés social y particular, garantizando el uso y goce de la propiedad raíz mientras se mantenga en acción conforme a su destino. El Estado debe intervenir para que la propiedad cumpla la función social que le es propia.»

Este concepto se refirma por la III Conferencia Nacional de Abogados, reunida en Mendoza en noviembre de 1933, cuando declara, después de un concienzudo informe del doctor

Lafaille, «que el dominio, cualquiera sea la naturaleza de su objeto, y en particular el relativo a los inmuebles, debe ser reglamentado por la ley con el criterio de que no sólo envuelve derechos para su titular, sino también obligaciones a cargo de éste, frente a la colectividad...»

Si éste es el concepto moderno del derecho de propiedad en general, aludiendo lo mismo a la propiedad urbana que a la rural, en presencia de las características y modalidades de ésta, del rol social y económico que siempre ha jugado en el desenvolvimiento de los cuerpos sociales desde los tiempos más remotos de la historia hasta ahora, es indiscutible que la tierra que produce bajo la influencia del trabajo y del esfuerzo humano, no puede estar sujeta al mismo régimen que al que ampara y dentro del cual se desenvuelve la propiedad urbana.

El ingeniero Emilio A. Coni en una monografía publicada en 1920, resume en un cuadro las diferencias substanciales existentes entre la propiedad rural y urbana, que es muy interesante, que no voy a leer, pero que me permito pedir se inserte en el Diario de Sesiones, a esta altura de mi exposición.

Entre las diferencias más importantes que señala son las siguientes: el trabajo individual en la tierra rural es grande, mientras que es nulo o reducido en la propiedad urbana.

Asimismo, el trabajo que se incorpora a la tierra rural es grande, como pequeño o nulo a las demás tierras, sucediendo otro tanto con el valor moral que es grande en la tierra de producción, mientras que es reducido o nulo, en la propiedad urbana, como en la propiedad ganadera.

(Diferencias técnicas, económicas y sociales en las tierras)

	Tierra urbana	Tierra rural agrícola	Tierra rural ganadera
Superficie de sustentación	100 %	1 %	1 %
Depósito de reservas naturales	Nulo	Grande	Grande
Instrumento de producción	Nulo	Grande	Grande
Satisface necesidades	Locales	Locales	Locales
		Nacionales	Nacionales
		Universales	Universales
Duración servicios	Eterna	Limitada	Limitada
Servicios	Inseparables	Separables	Separables
	No acumulables	Acumulables	Acumulables
	Unico	Variados	Variados
Renta monopolística	Constante	Accidental	Inexistentes
Renta diferencial producida por	Ubicación	Ubicación	Ubicación
		Facilidad	Facilidad
Crecimiento del producido	Regular	Irregular	Irregular
Producido regido por causas	Locales	Universales	Universales
Riesgo de la producción	Pequeños	Grandes	Menores
Porción del trabajo individual en el producido	Nulo o pequeño	Grandes	Pequeño
Proporción del trabajo social en el producido	Grande	Menor	Menor
Porción del trabajo natural en el producido	Nulo	Grande	Predominante
Separación del trabajo individual y del social en el producido	Fácil	Imposible	Fácil
Trabajo individual necesario para la producción de servicios	Momentáneo	Permanente	Permanente
Provecho una vez aplicado capital y trabajo	Inmediato	Dilatado	Inmediato
Inversión de capital productivo	Rápido	Lenta	Rápido
	Limitada	Limitada	Limitada
Trabajo incorporado al suelo	Nulo	Grande	Nulo o pequeño
Valor moral	Nulo	Grande	Nulo o pequeño
Producido neto, producido bruto	4/5	1/5	3/5
Necesidad de la propiedad individual	No	Sí	No

De estas diferencias surge el concepto que día a día se abre paso en la economía moderna, según el cual el fundamento del derecho de propiedad a la tierra agraria, no es otro que el trabajo, desde que es el consorcio entre éste, como se ha dicho, con el de las fuerzas de la

naturaleza, el que arranca a la tierra su producción en sus formas más variadas.

«El trabajo, dice el viejo economista Adán Smith, es la potencia productiva. La tierra es ampliamente productiva, gracias al trabajo.»

Y Bastiat, agrega: «Muéstrase en cualquier

parte del globo una tierra que no haya sufrido la influencia de la acción directa o indirecta del hombre y yo os presentaré una tierra desprovista de valor.»

La exposición de estas ideas a grandes rasgos, me lleva señores diputados, a sostener que si el trabajo fundamenta el derecho a la tierra agraria, que si por otra parte el interés social y colectivo imponen la conveniencia y la necesidad de que la tierra pertenezca en primer término a los que la trabajan, una legislación como la que se proyecta, debe desenvolverse de acuerdo con estas normas, y no tener las trabas que dentro de otros conceptos e ideas pudieran oponérsele.

El despacho que considera la Honorable Cámara, se ha redactado y se funda en estas claras directivas de bien público.

Es hora de que la tierra argentina vaya al dominio de los que se apresten a trabajarla y hacerla producir para labrar su propio bienestar, que será el bienestar de la Nación.

La comisión, con las normas que estatuye en su despacho, que tiene como directivas básicas colonizar al país, dando acceso a la tierra, a los que por distintos motivos no pueden llegar a ella y al mismo tiempo acelerar su proceso demográfico, no pretende derogar los principios de nuestra legislación civil, a que he aludido, relativos al régimen de la propiedad rural.

Tampoco tiene el propósito de crear para ésta en general, otras restricciones y límites que los que tiene actualmente por nuestro Código Civil.

Pero sí, está en su firme decisión, que las tierras que serán materia de esta ley de colonización en las distintas formas que lo prevé y proyecta, caigan dentro del régimen de excepción que para ellas crea en lo que se refiere a su adquisición, expropiación, pago, transferencia, inembargabilidad, rescisión de contratos, arriendos, etcétera. Los principios que dejo expuestos, así lo exigen.

La colonización oficial que se proyecta tiene de a darle cumplida satisfacción.

A una legislación de esta naturaleza, también la determinan consideraciones de carácter social, económico y político.

De los 279.000.000 de hectáreas que tiene el país, están bajo cultivo tan sólo 30.000.000, y 124.000.000 destinadas a campos de pastoreos, a pesar de que serían aptas para cereales 80.000.000 y 109.000.000 más para agricultura y ganadería.

Según las cifras del censo agropecuario levantado en 1937, las explotaciones agrarias alcanzan a 439.874, en las que se ocupan y tienen trabajo 164.871 propietarios y 197.174 arrendatarios.

El área que se siembra en el país con cereales, según el mismo censo, oscila alrededor de 18.000.000 de hectáreas, y las explotaciones de productos industriales, como la caña de azúcar, el algodón, la yerba mate y el tabaco, alcanzan a una superficie que oscila alrededor de 26.000 hectáreas.

Mientras esto sucede en nuestro país, Francia tiene 8.000.000 de explotaciones agrarias y Estados Unidos más de 6.500.000 chacras.

Si se repara que la población de la República asciende a más o menos 13.000.000 de habitantes, tenemos que es ínfima la cantidad de individuos dedicados a las labores agrarias, reducida en extremo la proporción de explotaciones agrarias y, más aún, en poder de propietarios, pues al resto que tiene el país, la cultiva y trabaja el proletariado rural, y sumamente limitada la extensión objeto de un trabajo agrícola racionalmente practicado.

Estamos muy lejos de haber realizado todavía la visión de Sarmiento, el elogio de cuyas ideas agrarias en el cincuentenario de su muerte, hiciera tan elocuentemente nuestro distinguido colega el señor diputado Repetto.

Todavía, como decía el genial educador de nuestro pueblo, «choca el aspecto de la pampa que ostenta su lisa y velluda frente, imagen del mar en la tierra, la tierra como el mapa y aguardando todavía que se le mande a producir plantas y toda clase de simientes.»

El derecho a la tierra de los que se apresten a trabajarla, hace necesaria la creación de la propiedad campesina, que es la única que permite la más elevada utilización del esfuerzo humano.

Hay en ello un profundo interés de carácter social.

Estabilizar la población errante de la República en una parcela de terreno, con cuyos frutos pueda hacer frente a sus necesidades vitales y a las de su familia, es asentar el orden social sobre bases ciertas y duraderas.

Hay que tender a crear la clase propietaria de la tierra, extirpando el arrendatario que no cumple ni está en condiciones de hacer por ella lo que aquél.

Ya el ministro Le Breton lo decía en su recordado mensaje aludiendo a los precaristas: «El peón, arrendatario o mediero, a quienes

es ajena la sensación de la propiedad de la tierra, no encuentran estímulo suficiente para trabajarla bien y con cariño en el escaso salario o en el beneficio limitado y difícil que reciben», y agregaba: «se trabaja precariamente en tierra ajena; la rotación de los cultivos se descuida y el tambo mal equipado produce en condiciones inferiores. Las pequeñas industrias granjeras que hacen vivir la familia del agricultor el año entero, no surgen en tierras de otros, ni se planta el árbol de lento desarrollo cuando no se sabe si a su sombra jugarán sus hijos, o se pasará la vejez de quien lo plante.»

Y Benthon, el senador eminente de la Unión Americana, citado por Avellaneda en su magnífica obra sobre la tierra pública, agrega aludiendo a los arrendatarios: «El arrendamiento es desfavorable a la libertad. Abre los ciimientos para que se levanten diversas clases en la sociedad, amengua el amor a la patria y debilita el espíritu de independencia. El campesino arrendatario no tiene de hecho ni patria, ni hogar, ni altar doméstico, ni familia arraigada y solariega.»

El Banco Hipotecario y especialmente el Banco de la Nación, aplicando la ley de crédito agrario han hecho mucho, en la creación de la pequeña propiedad campesina, pero ello no es suficiente.

No es necesario que traiga las cifras de la enorme cantidad de tierra parcelada por la acción eficaz del Banco de la Nación, entregada al dominio y al trabajo de una pleyade numerosa de trabajadores rurales auténticos.

Ellas fueron citadas en el debate a que dió lugar la reforma de dicha ley y se consignan en la publicación de la revista de la expresada institución bancaria.

A pesar de ese esfuerzo, muy loable por cierto, se hace menester la acción coadyuvante de esta ley de colonización, que penetrará en lugares y satisfará intereses inalcanzables para la obra de dichas instituciones.

La estabilidad de nuestras masas rurales debe canalizarse por todos los medios.

En los núcleos coloniales que se funden y que se hagan prosperar al amparo de esta ley radicarán las células de la estabilidad social presente y futura de la República.

No basta sin embargo que la tierra se parecele y se cree con la subdivisión la pequeña propiedad campesina capaz de albergar a una familia agricultora.

La tierra materia del parcelamiento debe ser

apta para ser cultivada y tener las condiciones ecológicas necesarias, para que hagan viable una explotación económica y provechosa.

Dividir la tierra sin dichas aptitudes y entregarla a los agricultores, es plantear un programa de colonización fracasado antes de que tenga principios de iniciación.

El programa colonizador debe empezar, y ése es el criterio de la comisión, con las tierras fiscales, con las que posean los bancos e instituciones oficiales, con las que adquieran de éstos en las condiciones que se estipule y convenga, pero siempre que sean aptas para ser cultivadas racionalmente, y con provecho y que su ubicación permita el fácil y económico acceso de los productos a los mercados internos o internacionales de consumo.

Tengo en mi poder las planillas en que se señala la tierra en poder del Estado en la actualidad, donde se especifican las tierras que tienen los bancos y las instituciones oficiales estableciéndose la distinción de las que pueden ser objeto de explotación provechosa y conveniente, planillas que voy a pedir se agreguen, con el asentimiento de la Honorable Cámara, al Diario de Sesiones, al final de mi exposición. (1)

El programa colonizador debe contar también, con el elemento personal del campesino.

La tierra parcelada, no puede ser atribuida a cualquiera, sino a aquellos que por sus aptitudes reconocidas en las labores agrícolas, presupongan una capacidad suficiente, para organizar en las tierras que se adjudiquen una explotación provechosa y floreciente.

La solvencia moral y pecuniaria en los componentes de los núcleos coloniales que se constituyan, serán condiciones esenciales del programa colonizador a realizar, para que pueda ser llevado a feliz término.

No hay que olvidar que el fracaso de nuestras leyes colonizadoras, radica en que prescindieron en general de las condiciones ecológicas de las tierras que destinaron a la colonización y en que no tuvieron en cuenta para nada, las aptitudes de los hombres a quienes fueron entregadas para su explotación.

La colonización del país, ha sido impulsada por la labor de cada día, constante y tenaz, del que desbroza las malezas a golpe de hacha para después arrojar la semilla en el surco abierto en tierra limpia, pero para ello, ha debido el trabajador auténtico pagar su tributo previo,

(1) Véase páginas 227 y 228.

a los beneficiarios de la tierra argentina, como resultado de la dádiva política y de los planes colonizadores planteados en base de intermediarios inescrupulosos.

Para éstos y no para aquéllos, fué en general el apoyo y la protección del Estado.

De ahí, el fracaso de la acción colonizadora que esperamos no se repita.

Tierra apta y trabajador auténtico de la misma, deben ser los factores esenciales de la obra que se emprenda.

Nuestra colonización debe seguir los lineamientos de la verificada en Norte América, Canadá y Australia, en donde la tierra ha sido adjudicada a los agrarios en propiedad, previamente, amojonada y deslindada y pagada por éstos con su trabajo y con su esfuerzo.

En lo posible, su transferencia debe ser a precios reducidos, siguiendo el ejemplo de Canadá, en donde la tierra se vendió a 30 chelines el acre, contrastando con la colonización de Australia en que, siguiendo el plan Waterfield, su enajenación se efectuó hasta por una libra dicha medida.

Esta ley tiene fundamentales fines de carácter económico y aspira a la racionalización de las explotaciones agrarias y de la producción en general.

Mucho ha hecho el país en este sentido, pero es largo todavía el camino que falta por recorrer.

Las leyes de granos y de elevadores de granos; la ley de contralor de la producción y del comercio de carnes; las leyes reguladoras de la producción de la yerba mate y de los vinos, tienden a la racionalización de la producción argentina.

El Estado fomenta los cultivos, selecciona las semillas en semilleros que fiscaliza y que controla; extiende su acción de sanidad vegetal en todo el país; lleva las estadísticas minuciosas de las áreas cultivadas y del volumen de toda nuestra producción y por medio del crédito ampliamente dispensado, solventa a la agricultura y ganadería nacionales en las horas difíciles de su desenvolvimiento económico.

En esta acción el Estado ha ido todavía más lejos. En numerosas escuelas diseminadas en todo el país imparte la enseñanza necesaria y difunde los conocimientos precisos a los que desean dedicar sus actividades a las múltiples faenas agrarias.

La acción racionalizadora debe, sin embargo, intensificarse y tener más amplia difusión.

Así lo exigen los grandes intereses económicos del país, que esta ley aspira a satisfacer.

Cada día se vuelve más inquietante nuestro porvenir económico.

El nacionalismo económico se agudiza y las barreras aduaneras, lejos de derribarse, pareciera que adquieren una firmeza cada vez más incommovible.

Las naciones consumidoras, agobiadas por los déficit de sus presupuestos, tienden a bastarse a sí mismas.

En Europa se conciertan tratados en virtud de los cuales se compran cereales a cambio de armamentos y a nuestra producción se la somete a cuotas y a cupos.

Nuestro comercio con Norte América languidece, porque esta República, a pesar de los esfuerzos de su ilustre presidente, hasta se niega a comprarnos unas cuantas libras de carne para su marina de guerra, a pesar de que se la ofrecemos a precios mejores y de una calidad superior a la propia.

La racionalización en el trabajo y en la producción de nuestras explotaciones rurales, les llevará mayor bienestar y mayor eficiencia y obrará el milagro de reducir los costos de nuestra producción con notorio beneficio económico para el país.

Los núcleos colonizadores que se formen, contribuirán a cimentar nuestras instituciones sociales y políticas, y a dar una fisonomía propia a nuestra nacionalidad, en trance todavía de constituirse con relieves diferenciales de los otros pueblos.

Tendrán como base la unidad de la familia, que después se trasuntará en la unidad de la Nación.

El trabajo de sus componentes, racionalizado y protegido por el Estado, obrará con el andar del tiempo, su holgura económica, arraigando en sus espíritus el concepto del orden, de la jerarquía organizada y el culto por la libertad y por las instituciones de la República, que no tienen ni pueden tener otro fundamento.

En Francia, en Dinamarca, en Suiza, en Holanda, en donde más del 50 % de sus habitantes son propietarios, sus instituciones sociales y políticas descansan en estos conceptos profundamente arraigados en sus masas agrarias, estabilizadas en las tierras que trabajan.

Ellas son el baluarte inexpugnable, que en las horas más difíciles salvan la estabilidad de sus pueblos, y la pureza de sus instituciones democráticas.

El senador Benthon a que antes me he refe-

ruido decía: «Somos una República y deseamos que nuestro país continúe en ese régimen, entonces multipliquemos la clase de los propietarios libres.»

La comisión aspira a que esta ley de colonización, se desenvuelva y se cumpla gradualmente, sin lesiones ni agravios innecesarios por otra parte a derechos respetables que no debe ni le interesa desconocer.

Por eso, veda la expropiación de las tierras objeto de explotaciones racionales y directamente efectuadas por sus dueños y la prohíbe en predios inferiores a 1.000 hectáreas de superficie.

A las expropiaciones de predios particulares, sólo las autoriza para el caso de que el consejo agrario, estuviere imposibilitado de desenvolver su misión, por la carencia de otras tierras en condiciones ecológicas.

La comisión no ha juzgado necesario en el momento de nuestra actual evolución agraria, fundar la colonización que preconiza, en el avasallamiento, diría así, de la propiedad particular y privada.

La colonización que desea llevar a cabo, es del carácter de la implantada en Francia, Norte América, Australia y Nueva Zelanda, en donde la propiedad privada, ha cedido al interés de la colectividad y ha sido expropiada y parcelada de acuerdo a planes colonizadores, con el previo pago de la correspondiente indemnización a sus dueños.

Las leyes de colonización de Polonia, de Checoslovaquia, de Rumania y de las otras naciones de la Europa Oriental, y Central, dictadas después de la guerra, tendían a dar tierra a las fuerzas combatientes demobilizadas y abolir privilegios milenarios. Por ello, han tenido un carácter que a nosotros debe sernos completamente extraño.

Esta ley de colonización he dicho, tiene entre sus propósitos más fundamentales poblar al país y sobre todo, poblar el interior del país.

Lo que sucede en la República con respecto a la población es realmente desconcertante.

Tenemos cerca de 3.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie y nuestra población, según la Dirección de Estadística de la Nación, llegaba en diciembre de 1937 a tan sólo 12.760.880 habitantes.

El censo de 1914 al 1° de enero acusaba una población de 7.885.237 habitantes y en 23 años y 7 meses, que transcurre desde aquella fecha a diciembre de 1937, tan sólo aumenta en 4.875.643 habitantes.

En este aumento, corresponde al crecimiento vegetativo el 80,4 % y al aporte emigratorio tan sólo el 19,6 por ciento.

Los grandes procesos inmigratorios que tienen su principio de iniciación desde 1888 a 1890 y que se agudizan desde 1904 hasta 1914, fecha de la iniciación de la guerra mundial, decrecen desde 1914 a 1918 debido a este acontecimiento, para aumentar en los años posteriores, pero no con el vigor de los años a que me he referido anteriormente.

Diríase que el proceso inmigratorio de la República se ha detenido en 1914, de manera que el país desde entonces no cuenta con su aporte en la proporción que sería necesario, para el aumento creciente de su población.

Por otra parte, la República, en cuanto al crecimiento vegetativo de la población sigue la tendencia mundial de las tasas decrecientes.

«Los saldos naturales de los años siguientes al de 1932 hasta 1935 se presentan con cantidades declinantes, correspondiendo destacar el notable descenso de 1935, cuya cifra de 150.848 individuos es la más baja registrada desde el año 1921».

En 1937 hay una nueva declinación en el ritmo de los saldos naturales y es curioso hacer notar, que ella se observa en las provincias más ricas del país como San Juan, en que decrece con relación a 1936, en el 20,18 %; como Córdoba, en el 14,72 %; como Buenos Aires, en el 9,16 %; como Mendoza en el 15,42 %; y la Capital Federal, en el 5,65 por ciento.

Tomo estos datos de la Dirección General de Estadística de la Nación, encontrándose consignados en el informe número 62 serie D, número 3.

Mientras la población tiene este lento desarrollo, el valor de la producción en el decenio de 1910 a 1919 se calcula en \$ 3.190.000.000 moneda nacional. Diez años más tarde representa un valor de \$ 5.170.000.000 m/n. y desde 1930 a 1933 las cifras alcanzan a \$ 4.650.000.000 moneda nacional.

Las cargas fiscales se fijan el primer decenio en \$ 527.000.000 m/n. o sea en el 17 % del valor de dicha producción. En el segundo decenio se calculan en \$ 1.005.000.000 m/n. o sea en el 19 % del valor de la producción, y desde 1930 a 1933 en \$ 1.220.000.000 m/n. o sea en el 26 % de su valor.

El desequilibrio que crea estos hechos es realmente impresionante.

El ritmo que se constata en el aumento del valor de la producción es halagador y el aumen-

to de las cargas fiscales, difícilmente podrá ser detenido, por los motivos que no es el caso de analizar en estos momentos.

El problema urgente, es entonces vigorizar la densidad demográfica de la República, sin lo cual, como lo ha expresado el primer mandatario doctor Ortiz «no podemos ser una nación de primera magnitud».

El equilibrio debe restablecerse, a base del crecimiento acelerado de la población y él no puede ser el resultado del aumento vegetativo decreciente y lánguido que acusan las estadísticas, sino de la vigorización de las corrientes inmigratorias que nos vengan, como en otra hora, de la vieja Europa.

Cada día es más exacto el lema de Alberdi. La población en nuestro país, debe nacer de gajo y no de semilla, dijo, aludiendo a la inmigración europea que debe venir a poblarlo y a engrandecerlo.

Nosotros para poblar el país, no podemos seguir los procedimientos de Italia, fomentando simplemente la natalidad, porque nos faltan padres.

La medalla puesta por el Duce en el pecho de la madre italiana, en su homenaje porque le ha dado quince hijos a la patria, entre nosotros dará resultados insignificantes.

Al fenómeno de la despoblación del país, hay que agregarle otro que no es menos grave.

Me refiero a la inadecuada distribución de esa escasa población, en la vastedad de nuestro territorio.

De la población del país que en 1938 alcanza a 12.700.000 habitantes, tan sólo 3.320.000 viven en la campaña, y la cifra que desconcierta de 9.440.000, viven en los centros urbanos.

Es interesante hacer notar, que la despoblación campesina adquiere su mayor intensidad. tan luego decrece el proceso inmigratorio a la República, lo que evidencia que éste, en primer término, al poblar el país, es el que acrecienta la densidad demográfica de su vasto territorio interior.

La despoblación del país comporta, por otra parte, serias dificultades a su desenvolvimiento económico y de no ponérsele remedio, cada día irá trabando aún más su ulterior evolución, si se mantiene, como todo lo hace prever, el nacionalismo económico que soporta el mundo.

Producimos de todo, dije alguna vez, y no tenemos quien lo consuma.

Regulamos la producción del azúcar, de los vinos y de la yerba mate, y no tardará mucho en que tengamos que hacer lo mismo con el algodón y con el tabaco.

La técnica nos ha convertido en los grandes productores de cereales y de carnes, nobles productos que para ser mantenidos en sus precios, debemos a cada momento subvencionarlos.

No consumimos ni la cuarta parte del trigo que producimos y las carnes bovinas exceden en el 30 % a nuestro consumo.

El país, como lo ha dicho un gran órgano de opinión, no puede continuar subvencionando a su riqueza, porque entonces ésta deja de serlo.

Lo que sucede tiene su origen, no diré en absoluto, en la falta de población del país, pero sí que se debe en gran parte a este fenómeno.

Es ya hora de que nos preocupemos de crear nuestro consumo interno, y él será el resultado del acrecentamiento de nuestra población.

Norte América funda su poderío económico en la magnitud de su gran consumo interior, y las naciones europeas densamente pobladas proclaman el nacionalismo económico y levantan barreras aduaneras infranqueables, entre otras causas, porque dentro de sus fronteras, colocan su producción agraria y sus productos fabriles, que nosotros debemos exportar, ante la ausencia del consumo nacional.

Pero la población del país no puede ni debe ser incrementada, si no lo colocamos a éste en condiciones de ser trabajado racionalmente, primero por los que han despoblado nuestra campaña y después por el torrente inmigratorio que debemos suscitar por todos los medios a nuestro alcance.

Cuando el Poder Ejecutivo, desde 1932, viene dictando decretos restringiendo a la inmigración, no hace otra cosa que colocarse dentro de la desconsoladora realidad de la Nación.

Al torrente inmigratorio y al propio crecimiento vegetativo de la población deben precederlos planes colonizadores que hagan factible su ubicación en tierras aptas para ser trabajadas por los que se radiquen en las mismas, amparados por el Estado, que construya caminos, que levante escuelas para los hijos de los pobladores, que haga diques para proveerlas de riego, que las dirija en su explotación técnica, que agrupe en cooperativas a los que las trabajen y que les dispense el crédito necesario en las horas de su dificultosa evolución económica.

El momento es propicio para ello.

Se está cumpliendo el vaticinio de Sarmiento, cuando en 1850, aludiendo a la campaña de Buenos Aires, más poblada de ganados que de hombres, decía: «Que los ganados empiezan a desmerecer en los mercados europeos» y agre-

gaba «es posible que Europa se conmueva en sus cimientos, sepamos aprovechar los millones de hombres que se verán obligados a partir.»

Para cumplir las finalidades de esta ley, el despacho de la comisión crea un consejo agrario nacional con el carácter de institución autárquica, compuesto de cinco miembros, en el que estarán representados el Poder Ejecutivo, los bancos oficiales de la Nación e Hipotecario, las cooperativas de producción y los consejos de agrarios, formados por trabajadores auténticos de la tierra, que la misma ley crea.

Será un órgano descentralizado del Estado, de los que Duguit define en su obra *Las transformaciones del derecho público*, «como un sistema, según el cual, ciertas colectividades públicas, cuyo nombre y carácter varían según los países, son titulares de algunas prerrogativas de la soberanía para ejercerlas por órganos y por agentes propios y que se encuentran más o menos sometidos a una autoridad superior» y que Posada justifica diciendo «no hay duda que el Estado se transforma en un sistema de servicios públicos que se prestan por un régimen de gobierno y que se producen como una consecuencia de la sollicitación que la comunidad ejerce sobre sí misma. Interdependencia social, solidaridad social.»

Tendrá la autonomía funcional financiera y presupuestaria suficientes, para que pueda llenar el cometido que se le confía, al margen de la potestad jerárquica del Estado y sujeto tan sólo a su tutela administrativa.

El despacho establece por lo demás, las normas a las que deberán sujetarse los planes colonizadores; alude a la cooperación de las provincias y de los municipios en la obra de colonización, que esta ley ordena emprender y dispone los fondos iniciales y los que en el futuro servirán para cumplirla en todo el territorio de la Nación.

Debo destacar especialmente, la importancia que la comisión atribuye a la acción colonizadora que se preconiza por esta ley en las provincias y a la cooperación que espera de parte de éstas para que pueda realizarse de inmediato.

Felizmente, nada obsta para ello.

Al estado social y político, que en 1876, llevaba al legislador Oroño a oponer serias objeciones a la colonización de la Nación en los Estados federales, por entender que significaba un agravio a su autonomía y un peligro para su desenvolvimiento económico, ha substituído un clima, de amplia y absoluta solidaridad entre la Nación y los Estados provinciales, que

no hace ni siquiera pensar en semejantes escrúpulos.

La colonización de la Nación podrá ir a las provincias, sin trabas ni cortapisas, contando con el apoyo de éstas, para labrar su propio progreso y bienestar político, social y económico.

Como decía al principio de mi exposición, hace más de treinta años, espera la República una ley del carácter y de los propósitos de ésta, que el Parlamento argentino está, sin duda, en retardo en sancionar.

Debió darse antes que las otras de carácter agrario, que amparan y fomentan el trabajo y la evolución de nuestras masas rurales.

Debió ser la raíz que alimentara el árbol de frondosa ramazón que poco a poco va estructurando el derecho agrario argentino del futuro.

Injertemos con su sanción, señores diputados, en el grueso tronco que ahora colocamos las ramas que están en plena floración para que los frutos del futuro sean más abundantes y mejores. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados felicitan al orador.*)

Sr. Horne. — Pido la palabra.

Debo fundar nuestra posición en este debate, en el cual se ventila el problema fundamental que tiene el país: el de dar una ley agraria para toda la Nación, que contemple en forma amplia y orgánica la formación de una nueva estructura agraria, como manera de cimentar, en bases más firmes y más justas, el progreso general y el bienestar de todos los habitantes.

El partido a que pertenezco —en nombre de cuyos representantes en esta Cámara hablo— ha hecho de este problema uno de los puntos principales de su plataforma electoral, sancionada en la convención nacional de 1937. Los lineamientos se dan en el punto primero de la parte agraria de dicha plataforma y comprenden las siguientes bases: *a)* Creación de un consejo agrario nacional; *b)* Distribución de la tierra en propiedad entre los propietarios rurales, con limitación de superficie; *c)* Normas para evitar los latifundios, las tierras ociosas y la concentración; *d)* Orientación y formación de la capacidad técnica; *e)* Educación y organización de los agrarios en cooperativas y otras asociaciones para resolver el problema de las industrias propias, de las máquinas y colocación de los productos.

Como se ve, se dan las normas de una ley agraria nacional, en forma amplia y que contempla el problema agrario del país, tal como lo

plantea en sus puntos generales, aunque no en la forma que hubiéramos deseado, ampliamente, el despacho que está a consideración de la Honorable Cámara.

Ya durante la presidencia del doctor Alvear, en 1923, durante el ministerio del doctor Le Breton, se envió un proyecto de colonización a la Honorable Cámara, que, aunque simple en sus aspectos generales, tenía una buena orientación central y contemplaba el problema ya en forma moderna, dentro de las corrientes que se insinuaban en aquella época en esta materia. Dicho proyecto no tuvo sanción ni fué considerado en aquella circunstancia.

Más de ochenta iniciativas análogas se han presentado al Congreso argentino en estos últimos años, y no obstante la unanimidad de opiniones en el sentido de que era indispensable llegar a la ley orgánica de la materia, no obstante la formación de entidades especiales, como la Cámara Argentina de Colonización, la Comisión pro Consejo Nacional de Colonización, la de Amigos del Campo y otras, que han venido bregando intensamente por la sanción de la ley nacional de colonización; no obstante la presentación de todos estos proyectos y la formación de un ambiente que hacía necesaria la ley, hasta ahora los gobiernos habían permanecido sordos a este reclamo general de la Nación. Lo cierto es que estamos ahora frente a un despacho que a pesar de la discrepancia que podamos mantener en algunos aspectos de fondo y algunos detalles, a pesar de las discrepancias que se han insinuado en diversos puntos por entidades especializadas, lo cierto es que el despacho de la comisión que ha venido a consideración de esta Cámara es un trabajo serio y constituye en las actuales circunstancias una esperanza de solución del problema fundamental que tiene a resolver el país.

El señor presidente de la Comisión de Legislación Agraria, miembro informante de la misma, se ha referido ya a los antecedentes de esta iniciativa. Efectivamente, el año pasado presenté a dicha comisión un proyecto de despacho como manera de abocarnos de inmediato al estudio del problema. Busqué este camino porque lo consideraba más directo en vez de presentar un proyecto más a la Cámara, y es así que la comisión después de largas sesiones, con la presencia del señor ministro de Agricultura que ha colaborado, como lo recordó el miembro informante, en todas las deliberaciones, llegamos a elaborar el despacho tal cual se considera.

Si bien el mismo se aparta de algunos de los puntos básicos, de ideas sustentadas en mi trabajo, como decía hace un momento, el despacho es en general bueno. Creo que lograremos, de sancionarse tal cual se ha redactado, una buena ley, a cuyos lineamientos generales me he de referir, especialmente a los que no se ha referido el señor miembro informante.

No voy a hacer la historia del latifundismo en nuestro país. No hablaré tampoco del medio agrario actual de la Nación ni hablaré del estado en que se encuentra esta nueva clase incorporada en el siglo XIX, que ha venido formando conciencia poco a poco de su fuerza —como ha dicho Richard Coudenave Calergi—, me refiero a la clase campesina. Partiré de la base que existe en el país, el grave problema de la tierra concentrada en pocas manos, que se especula con ella como si fuera una mercancía y además que el productor, el agrario, sigue siendo un explotado, no obstante ser el factor principal de nuestra riqueza y nuestro poderío. Esto ya no se discute. Sólo se discute la forma y procedimientos para terminar con este estado de cosas, que en realidad es indignante e injusto. Las palabras de Mariano Moreno, escritas en su célebre *Representación de los hacendados de la provincia de Buenos Aires*, siguen siendo una terrible y amarga verdad en las tierras libres pero despobladas del continente americano. Moreno describió en ese célebre escrito el estado en que vivía la clase campesina en aquella época y terminaba sus palabras con esta frase: «El viajero a quien se le instruyese que la verdadera riqueza de la provincia consiste en los frutos que produce, se asombraría cuando buscando al labrador con su opulencia no encontrase sino hombres condenados a morir en la miseria». Todavía estamos, aunque hemos avanzado algo, dentro de ese severo juicio de Moreno de hace más de un siglo.

El individualismo económico ha traído como consecuencia la explotación del hombre por el hombre, y ha llevado al trabajador rural a perder sus tierras y a ser un paria dependiente del latifundista, nuevo señor feudal de la actual organización económica. Contra este estado de cosas se ha reaccionado en todos los países. Las reformas y leyes agrarias sancionadas en los países de América y de Europa, especialmente a partir de la guerra europea, tienden precisamente a evitarlo y a cortarlo definitivamente. Tienen, en consecuencia, ellas una profunda raíz social, porque, como

decía al principio, buscan la defensa del agrario, la distribución de la tierra y una nueva organización de los mismos basada en el levantamiento del nivel de vida por la educación, no sólo primaria sino también técnica, de todos los trabajadores del campo.

En primer lugar, debo decir que la ley que vamos a sancionar para la República no será una simple ley del tipo individualista, que sólo busca subdividir la tierra. Creemos llegado el momento de aprovechar la experiencia que tenemos en nuestro país y la experiencia extranjera durante siglos, para que la obra que va a realizar el Estado tenga una base seria y de fondo. Queremos que esta obra que va a emprender el Estado no pueda ser alterada ni modificada por el libre albedrío; queremos que la subdivisión de tierras que va a hacer el Estado en nombre de la sociedad que representa, no pueda ser burlada por la especulación sobre el valor de la tierra. Las cláusulas que hemos establecido en la ley, tienden a un beneficio común y también de los agrarios.

En mi concepto no se puede seguir subdividiendo tierras en todas las épocas, porque la tierra que se entrega hoy a los agricultores, si no se la rodea de los medios legales necesarios para la defensa de los mismos, con toda seguridad que será concentrada nuevamente por obra de la especulación que ejercen los grandes capitales y las grandes empresas. El Estado, por sobre toda consideración, debe tener los recursos para evitar que eso ocurra y por ello hemos establecido restricciones al dominio y hemos dado al Estado el resorte de la expropiación en forma amplia, como luego veremos, para que no ocurran las cosas como hasta ahora.

El despacho de la comisión comienza por fijar en el artículo primero, tal cual lo determinara en mi anteproyecto, la existencia de un plan agrario destinado a poblar el interior del país, introduce el racionalismo en la subdivisión de la tierra y tiende a radicar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y a llevar mayor bienestar a los trabajadores.

Estos puntos, como lo evidencia su simple lectura, abarcan un programa de acción intensa y se vincula a las funciones y deberes que acordamos al consejo agrario nacional organismo autónomo encargado de ejecutar ese programa en todo el país.

No voy a hacer un estudio detallado del texto del despacho. El miembro informante se ha referido a los puntos principales con detenimiento y acierto, interpretando el espíritu de la

Comisión de Legislación Agraria. Tomaré sólo algunos de los aspectos que considero fundamentales y en especial me referiré al punto de vista social del plan que es, a mi modo de ver, lo principal del mismo: el espíritu, por así decir, de ese cuerpo legal.

La orientación social se refiere a los tres aspectos que deben actuar en todo plan agrario: la tierra, el hombre y el capital.

La tierra, o sea el factor físico, lo tomamos dentro del concepto actual del derecho de propiedad, como muy bien lo ha dicho el señor miembro informante. Evidentemente nos apartamos de los puntos de vista del Código Civil que en materia de derecho de propiedad sigue la corriente del Código de Napoleón, de 1804, que establece el derecho absoluto de propiedad, sin hacer distinción entre derecho de propiedad rural y derecho de propiedad urbana.

Si bien no definimos en el despacho el derecho de propiedad, como en mi concepto, podríamos hacerlo tratándose de una ley básica agraria y dentro de una corriente moderna que se insinúa en el campo científico de la autonomía del derecho agrario, establecemos una norma que nos permite adoptar algunas disposiciones prácticas en la ley, que aseguren su éxito. En el último apartado del artículo 1º se dice que la propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley, de acuerdo al interés colectivo. Yo decía en mi proyecto de despacho que la propiedad de la tierra quedaba afectada al interés social. En realidad, aunque en el fondo se trata más o menos del mismo concepto, creo que la disposición que yo establecía era más amplia y el Poder Ejecutivo por medio del señor ministro de Agricultura había aceptado la forma de mi despacho, ya que en su interesante discurso de Bell Ville, pronunciado en el corriente año, en el que estudió, precisamente, la tierra en su función social, citaba como texto del despacho aceptado por la comisión, el texto de mi proyecto. Evidentemente se trata de una equivocación del señor ministro.

Lo cierto es que no podemos sancionar en las actuales circunstancias una ley moderna, una ley útil para el país, sin una cláusula análoga. Con esto no hacemos nada más que seguir la corriente universal, en materia de derecho de propiedad, que ya hoy no se discute en el campo de la doctrina, sostenida por diversos tratadistas y que según dos ilustres profesores de la Universidad de Nancy, Georges Renard y Luis Trotobas, tiene por origen las enseñanzas

de Santo Tomás de Aquino; para quien, como ha dicho Gino Arias: «Dios concede el dominio al hombre, subordinado necesariamente al fin, del cual deriva, la necesidad social del buen uso.»

Toda ley que crea derechos debe tener, como lo enseñara ya Ihering, un fin social. Está completamente cerrado el cielo que trazaran los derechos del hombre, de 1789, y el código de 1804, cuya tendencia individualista influenciará la legislación de un siglo. Las leyes actuales tienen un hondo sentido social. Las constituciones modernas dictadas en el presente siglo, especialmente a partir de la Constitución alemana de 1919, que establece el concepto de que la propiedad obliga y que en el artículo 153 dice que su uso ha de constituir, al mismo tiempo, un servicio para el bien general, casi todas las constituciones de estos últimos años, los códigos y leyes agrarias modernas, han consagrado el mismo principio.

En América ha repercutido esta tendencia, y es así que las modernas constituciones de Brasil, Colombia, Venezuela y por último la de Bolivia, sancionada en 1938, establecen el concepto de la función social para la propiedad.

En nuestro país estamos bajo el régimen de nuestro Código Civil. La Constitución no define el derecho de propiedad, y según autores y la misma jurisprudencia de la Suprema Corte, la ley puede marcar la evolución, estableciendo limitaciones y restricciones al dominio basadas en el interés social o en el interés común. En el célebre caso «Ercolano v. Lanteri de Renshaw», citado en varios debates en esta Cámara, la Suprema Corte expuso en un párrafo el siguiente concepto, que me voy a permitir leer por lo interesante como doctrina para sustentar esta tesis: «Ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho reconocido por la Constitución, reviste el carácter de absoluto. Un derecho ilimitado sería una concepción antisocial». Y agrega: «La limitación o reglamentación del ejercicio de los derechos individuales es una necesidad derivada de la convivencia social. Reglamentar un derecho es limitarlo, es hacerlo compatible con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los intereses superiores del Estado».

En consecuencia, la ley puede establecer limitaciones y restricciones al dominio, mucho más tratándose de una ley de derecho agrario, donde forzosamente es necesario al establecer la subdivisión de la tierra, crear un régimen legal para la misma, por lo menos para la obra

que va a realizar el Estado, ya que estas normas no adquieren el carácter de general.

Así tenemos dos situaciones dentro del despacho: primero, la situación creada antes de que el adjudicatario de la tierra obtenga el título definitivo. Vale decir que todavía no es propietario definitivo de la tierra. En este caso es indiscutible que el adjudicatario debe ajustarse, de acuerdo a los términos de la ley, especialmente del artículo 39, a todas las prescripciones, limitaciones y restricciones que se establecen en la misma, tanto a las que se refieren a la organización en sí, como a todas las otras que se fijan con una alta finalidad.

Las segundas limitaciones son ya de carácter permanente. Señala la cláusula del artículo 16, que en mi proyecto de despacho era más amplia, que el Estado se reserva el derecho de expropiar las tierras que subdivida hoy cuando se concentren de nuevo, es decir que se formen de nuevo latifundios, o se subdividan excesivamente, minifundios, y el precio se fijará de acuerdo a la productividad de la tierra, concepto también moderno, con indemnización de mejoras.

La Sociedad Rural, en una nota reciente, ha hecho varias objeciones a esta parte del despacho, especialmente en lo que se refiere a la indemnización al propietario teniendo en cuenta el valor de la producción de la tierra. El proyecto mío, no obstante su amplitud, salvaba tal vez las objeciones de la Sociedad Rural, especialmente la que se refiere a que el valor de la tierra pueda ser en cierto momento menor que el precio pagado por la misma, en cuyo caso el propietario tendría un perjuicio evidente; pero en cualquier forma, el principio es justo dentro del concepto de la propiedad en su función social.

Otra consecuencia de estas ideas son las normas que hemos proyectado para las tierras ociosas o abandonadas. El artículo 15 del despacho consagra el derecho del Estado para expropiar con indemnización, conforme a la productividad de la tierra —con lo que se mata toda tentativa de especulación—, toda tierra abandonada o no trabajada directamente por su propietario. El concepto se ha restringido algo en relación a mi despacho, pero es interesante que se haya aceptado por la comisión.

Tenemos abundantes antecedentes en este sentido. El III Congreso Universitario anual reunido en Córdoba en 1925 aceptó, después de una interesante discusión, una propuesta del

doctor Tomás Jofré, que decía «que debe ser derogado el artículo 2.510 del Código Civil y en su reemplazo establecerse la pérdida del dominio por su no ejercicio durante un tiempo prudencial». Hay también un proyecto en ese sentido, de 1921, de los diputados Beiró y Rodríguez.

La pérdida del derecho de propiedad por su no ejercicio está consagrada en diversas legislaciones. El Código Civil brasileño establece en el artículo 589 que el inmueble abandonado será considerado como bien vago, y pasará diez años después al dominio del Estado. En esta corriente puedo citar la ley mejicana, llamada de tierras ociosas, de 1920; una ley francesa de 1918 y la ley de laboreo forzoso de España, de 1931. En la Constitución alemana el artículo 155 establece la obligación de cultivar y explotar el suelo. En la de Bolivia, de 1938, se estipula que son bienes del Estado las tierras baldías, con todas sus riquezas naturales. Una ley muy interesante sobre este punto, es la ley de tierras número 200, de Colombia, que consagra la pérdida de la propiedad por el no uso o por abandono de la misma, es decir, cuando no se ejerce la función del trabajo. El artículo 1º establece: «Se presumen como baldíos, y de propiedad privada, los terrenos explotados económicamente por medio de hechos positivos, como las plantaciones o cultivos, la ocupación por ganado, etcétera». Y en el artículo 6º se establece en favor de la Nación la extinción del dominio o propiedad cuando se lo dejare de cultivar durante diez años.

Al establecer esta cláusula en el despacho, no consagramos el principio absoluto que informa estas legislaciones, sino que ampliamos simplemente el derecho de expropiación por el Estado, fijando así un concepto interesante de que la tierra debe ser explotada como conviene a los intereses de la colectividad, vale decir, que debe ser ejercitada sobre ella una función social; idea vinculada, por otra parte, a viejos conceptos de economistas y hombres de gobierno y aun a leyes de diversas épocas de la humanidad, especialmente en Roma, en donde hubo una ley, citada en *Noches Aticas*, que establecía la pérdida del derecho del sufragio para los que no cultivaban sus tierras. Nosotros hemos creado, como decía, el derecho de expropiación y hemos ampliado el concepto común de nuestro Código Civil y de las leyes actuales en la materia. La expropiación viene a ser como dice Wágner, una reserva jurídica de la comunidad, frente a la dominación del propietario sobre la cosa; no es, en consecuencia, en la ley, una

cláusula fría y artificial, sino un arma que damos al Estado para la defensa del interés colectivo.

—Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Honorable Cámara, don Juan G. Kaiser.

Por ello, por muy bien inspirada que esté la ley, es necesario que tenga una enérgica y correcta aplicación, en esta parte como en todas sus disposiciones.

Hasta ahora el Estado no ha tenido ningún arma legal para defender la obra que ha emprendido en muchos casos por leyes interesantes que han sido totalmente desvirtuadas en la práctica. Tenemos el caso de una que mandaba subdividir en leguas pastoriles tierras fiscales en el Chaco, las que se vendieron por el Estado a 9.500 pesos la legua y cuyo precio llegó a límites incalculables por el acrecimiento del valor derivado del progreso creciente de aquel territorio. Se formaron hasta empresas constituidas en el extranjero para especular con ese mayor valor de la tierra, las que vendieron aquellas leguas pagadas a 9.500 pesos, a razón de 80 y 90 pesos la hectárea, sin haber hecho absolutamente nada por el progreso de la región. Y el Estado tenía que aceptar esa situación cruzado de brazos porque, habiéndose pagado su precio, los propietarios habían adquirido ya un derecho que era imposible negar, al propio tiempo que se sentía impotente para evitar que se desvirtuara la ley dictada para fomento de los territorios.

Otro caso grave es el de las tierras de la Patagonia, terrible asunto para el país, que hace poco tiempo tuvo repercusión en esta Cámara a raíz de una minuta presentada por desalojos producidos en aquellos territorios. Como es sabido, actúan allí también compañías, sociedades anónimas, que especulan con el mayor valor de la tierra, que van formando grandes latifundios para dominar en forma absoluta la economía de los territorios nacionales. Son los palos blancos, como se ha dado en llamarlos y que el diario «La Prensa» en un artículo, creo que del mes de abril del corriente año, analizaba y denunciaba en duros términos, contestando a las buenas intenciones y a las buenas palabras del señor ministro de Agricultura en su discurso de Bell Ville a propósito del régimen de la tierra y de la necesidad de poblar el país.

Durante el gobierno del general Justo, siendo ministro de Agricultura el doctor Cárcano, especializado en derecho agrario, se dictó un

decreto muy interesante, en junio 17 de 1937, donde se establecen varias condiciones a los adquirentes de tierras, como la de residir en el lote, realizar una serie de mejoras, efectuar una explotación personal y directa, que no se cumple en muchos casos, y en el artículo 10 se dispone que «en los títulos de propiedad por tierras pastoriles que se enajenen a los arrendatarios, deberá insertarse una cláusula especial en la que se establezca que en ningún momento podrán esas tierras formar parte del patrimonio de sociedades anónimas, sean o no propietarias de tierras, ni de compañías o personas poseedoras de cualquier título de más de 1.000 hectáreas de superficie, establecida por ley número 4.167, no pudiendo los escribanos con registro o adscriptos intervenir en transferencias a favor de esas entidades de tierras pastoriles entregadas a los arrendatarios bajo la reserva antedicha.»

Como se ve, se trata de un decreto dictado con un hondo sentido de la realidad, aunque pueda discutirse su legalidad; y creo que por esta causa no se ha aplicado en los territorios. Podría tener, tal vez, un fundamento basado en puntos de vista de derecho administrativo, de que el Estado por la situación especial que tiene, puede al enajenar las tierras establecer esas restricciones, pero es evidente que por decreto no es posible hacerlo porque lo impiden las prescripciones del Código Civil.

Lo cierto es que hay que crear una legislación, tal vez aparte de ésta, que establezca las normas y recursos para impedir que estos abusos puedan cometerse. Quizás sea necesario dictar una legislación especialmente para las sociedades anónimas, que son en nuestro país las que se transforman en acaparadores de las tierras, que burlan la acción del mismo gobierno en los casos de subdivisión de la tierra y que burlan la acción de las instituciones oficiales, como el Banco Hipotecario Nacional, que ha realizado, según el miembro informante, una amplia acción en todo el país respecto de la subdivisión de la tierra, pero que desgraciadamente en épocas malas, como ha ocurrido desde 1930 hasta ahora, se ha transformado en el ambiente agrario en un factor de inquietud, porque la tierra, subdividida hasta ayer, ha sido rematada en bloque y ha pasado ahora a manos de grandes empresas, de grandes compañías, especialmente de compañías cerealistas que se han transformado así en grandes latifundios. Conozco varios casos, especialmente en el litoral argentino.

Frente a estos hechos, creo que será indispensable dictar normas con carácter general, dado que esta ley regirá solamente para las tierras que subdividirá el Estado, a partir de la sanción de la misma.

A propósito de este concepto de expropiación, aceptado por la comisión, recuerdo las ideas sustentadas por Mitre y Sarmiento en el mensaje que acompañó al proyecto del 20 de agosto de 1860, de compra de las acciones del Ferrocarril Oeste y de autorización para expropiar los campos por donde atravesaría el ferrocarril, para ser divididos en quintas y lotes.

Dice el mensaje: «Pero la expropiación por causa de utilidad pública, remedia la imprevisión de nuestras leyes coloniales, pues el derecho a la propiedad que las leyes civiles aseguran a los individuos, cesa desde que el interés colectivo de la comunidad se pone de manifiesto». Estamos en realidad dentro de lo que querían Mitre y Sarmiento en 1860.

Veamos otras disposiciones importantes. El Estado puede comprar y además utilizará para la colonización regular todas las tierras fiscales, las de los bancos e instituciones particulares. Desaparece, con este proyecto, la colonización particular, individualista y desorientada que se realiza en la actualidad por bancos, instituciones y empresarios de colonización. Hoy la obra de colonización la consideramos de inminente interés público y, como tal, la colocamos bajo el amparo del Estado que ejercerá el contralor, aun de la colonización particular, por intermedio del organismo central que se crea.

Establecemos también otras restricciones, como, por ejemplo, la del artículo 30: no puede venderse sin consentimiento del consejo agrario. Y la del artículo 62: no puede gravarse.

Se dan diversas normas para la explotación y fijación de la superficie de los lotes y en este sentido, si bien en la ley no se fija la superficie de los lotes, se establece un criterio que tiende a limitarla, y especialmente se fija el concepto de que la superficie a adjudicarse no debe ser superior a la que necesite cada colono para trabajarla directamente con su familia. Ya es una limitación que se impone: que la propiedad no puede ser acordada por el Estado sino para ser trabajada directamente por el propietario y para que éste viva en ella con su familia.

El otro aspecto a que me refería hace un momento es el aspecto hombre. Generalmente las leyes de colonización consideran sólo el aspecto

tierra y olvidan al hombre, que es el que con su trabajo crea la producción y ejerce la función social que se ejerce sobre la tierra. Hasta ahora en nuestro país no se han dictado leyes, o son muy pocas las existentes, tendentes a crear una defensa de los productores agrarios, de los trabajadores del campo. Tenemos una legislación obrera, en gran parte repercusión de las leyes dictadas en otros países con otras características, especialmente de los países industriales. Nosotros somos un país eminentemente agropecuario pero no tenemos leyes que contemplen el problema de la vivienda, de la alimentación, de la jornada y todas las demás disposiciones que tienden a reglamentar el trabajo del hombre en el campo, y un ejemplo palpable de esto lo tenemos en la excepción que hace la ley de accidentes del trabajo al excluir a los trabajadores del campo de ella, no obstante el espíritu y la teoría que fundamenta dicha ley, que hace irrazonable cualquier argumento que pudiera hacerse en contra.

Como decía Adolfo Posada, en un interesante estudio publicado en «La Nación» en octubre 7 de 1938, «en un régimen de armonía debe en primer lugar elevarse el trabajo humano —que no puede reducirse a un concepto material de mercancía,— a la categoría y condición en el trabajo de función social.»

«La organización económica y social de los agrarios es también elemento fundamental de todo régimen agrario», ha dicho con acierto el doctor Tomás Amadeo.

En nuestro despacho contemplamos al hombre en diversos artículos, especialmente en el artículo 33 que podríamos decir es el artículo eje de todo el despacho, por la organización que impone del trabajo en el campo. Por este artículo se establece que en cada inmueble que se subdivida en más de 30 parcelas, se formará una explotación con orientación, individualidad y organización propias, con miras a la diversificación de la producción y a la implantación de industrias rurales anexas. Tendrá un consejo de agrarios, un director técnico designado por el consejo nacional y una reserva fiscal para la instalación de chacras experimentales, estaciones zootécnicas, etcétera. El consejo estimulará y fomentará especialmente en cada colonia la constitución y funcionamiento de sociedades cooperativas, agrarias, de producción, de consumo, de comercialización y de industrialización, además se levantarán escuelas rurales y se constituirán consejos de colonos, cuyo origen

lo encontramos en el único ensayo de colonización de tipo social realizado en el país, el de la Colonia San José organizada por Urquiza y por don Alejo Peyret. Es lástima que estos consejos no se elijan entre los mismos colonos como lo proponía en un despacho y como los tiene la ley de transformación agraria de Entre Ríos, donde actúan con gran éxito.

Las cooperativas, así como esta organización que se da a cada núcleo o colonia, permite la defensa del agricultor en sus tareas agrarias. La cooperativa, está de más decirlo, permite la organización en el trabajo y permite la solución del problema de las grandes maquinarias, de las pequeñas industrias, formación de galpones colectivos para almacenamiento de cosechas, la comercialización también de los productos. Además contribuye a formar un ambiente de solidaridad. Todas las leyes modernas buscan por esta vía la solución principal de los problemas del campo.

Por algunas leyes se llega a la explotación integral de la tierra por medio de las cooperativas; en otras se establecen las cooperativas para la solución de problemas vinculados a tareas rurales, como lo establece el despacho. En la ley chilena se fija la organización cooperativa a las colonias llamadas a preparar colonos. Se hace la distribución de las utilidades dado que los trabajos se realizan en común, de modo que el colono no sólo aprende a trabajar con otro sistema distinto a la forma en que se trabaja hoy en el campo, en modo personal e individualista, sino que desde el principio adquiere una nueva cultura que luego será aprovechada en las colonias, cuando llegue a las colonias que organiza el Estado.

Esta forma de organización de las colonias, con sus viveros, su director técnico, sus semilleros en forma colectiva y demás aspectos de esa explotación agraria, permite asegurar que los colonos se encuentren unidos entre sí para defenderse en forma eficiente de todos los que los explotan y también que obtengan un mejor provecho de su labor.

Hay otros dos puntos de vista que creo interesante señalar; uno de ellos, está vinculado al problema tratado en esta Cámara hace días y que preocupa enormemente al país, referente a las colonias formadas por extranjeros, y el otro, es el relativo a las colonias de frontera.

De todas las iniciativas, merece señalarse la llevada a cabo en el Brasil, que comenzó con una experiencia referente a una colonia fundada en San Pablo, experiencia que luego se reflejó

en la legislación dictada el año 38 por decreto en acuerdo de ministros. Se estableció que en las colonias que se fundaran por el Estado no podrá introducirse sino un número determinado de extranjeros. En la colonia referida había colonos de seis nacionalidades.

Nosotros hemos establecido en el artículo 27 del despacho que en las colonias se reservará el 25 % de los lotes para inmigrantes extranjeros, de modo que esas colonias estén formadas no por núcleos cerrados de una sola nacionalidad, que impida la asimilación al medio y la adaptación a la vida y costumbres nacionales, como pasa con algunas colonias citadas varias veces aquí, especialmente algunas del territorio de Misiones. Conozco, por ejemplo, la colonia de Puerto Rico, fundada por colonos que se llaman a sí mismos brasileños-alemanes, que son hijos de colonos alemanes y que aun no han aprendido ni el portugués ni el castellano. Creo que en la forma de que hablo se evitará el problema de los círculos cerrados, como ha ocurrido en el Brasil, país donde el problema se presentó en forma aguda.

Con relación a las colonias de fronteras, ha sido solucionada la cuestión en el artículo 58 estipulándose que las tierras de fronteras serán destinadas a la población con colonos argentinos. Creemos que por este camino será más fácil la argentinización de nuestras fronteras y que es menos violento que tomar otras disposiciones como la que se citaba en el decreto o acuerdo dictado en la época del general Justo, que establecía la prohibición a los extranjeros de tener tierras en las fronteras o la prohibición que establece la nueva Constitución de Bolivia, sancionada en el año 1938, en igual sentido.

El último aspecto del problema es el capital. El despacho contempla dos casos de agrarios a quienes se adjudicaría la tierra primero, el que dispone de los fondos necesarios para instalarse, hacer los alambrados y mejoras y adquirir animales en cantidad suficiente para su explotación. A estos agrarios se les da un lote con boleto de compraventa, abonando el 10 % del precio al contado y siempre que no sea propietario de inmuebles agrícolas. Segundo, el que no dispone de lo necesario pero que tiene origen agrario y las condiciones de selección que establece la ley, en cuyo caso entra en carácter de arrendatario hasta hallarse en condiciones de pagar el 10 %, en cuyo momento se incorporará ya como adjudicatario con derecho a la compra de la tierra.

También establecemos algunas normas de habilitación para los agrarios e hijos de agrarios. Así, fijamos una habilitación hasta de \$ 6.000 moneda nacional para los hijos de agrarios que no tuvieran el capital para adjudicarse la tierra. Además, decimos que por cada cuatro hijos varones que tenga un propietario se le podrá adjudicar un lote más. Por este camino se puede fomentar la natalidad. Hay dos iniciativas, según me lo han expresado, una del señor ministro y otra del señor diputado Guillot, en el sentido de que se le den mayores facilidades para el fomento de la natalidad.

Otro punto interesante es el fondo de ahorro creado por la ley para asegurar a los colonos, en el caso de pérdida de la cosecha, el pago del precio de su tierra sin correr el riesgo de atrasarse en los años malos y perder así sus derechos. Los artículos 37 a 42 tratan este punto.

El Banco de la Nación, por medio del crédito agrario, por otra parte contribuirá, además, con el crédito directo, al arraigo del colono y a su independencia, así como también facilitará la acción de las cooperativas, especialmente en la formación de industrias o en la comercialización en conjunto.

Con respecto al consejo agrario nacional, el señor miembro informante se ha referido a la forma de constitución y a sus atribuciones, por lo que creo que no hay necesidad de insistir sobre el punto. Mantengo alguna discrepancia respecto a la forma de constitución del consejo, pero no obstante ello he firmado el despacho. Es el punto en que más discrepancia se advierte, porque todos quieren tener representación en el consejo agrario.

Recientemente en el congreso de cooperativas que acaba de realizarse, se ha dado un voto en el sentido de que esta ley sea ejecutada por el Banco de la Nación. Evidentemente se trata de un voto dado sin considerar lo que representará esta ley y la enorme tarea que tendrá el organismo que la ejecute para que pueda cumplir su alta finalidad. La única razón que se ha dado públicamente para ello y que me han dado los representantes del congreso agrario, ¿es que para qué se va a crear un nuevo organismo, con sueldos, etcétera? Pero, evidentemente al Banco de la Nación en las actuales circunstancias, aparte de la obra específica que realiza, que es bastante, para poder cumplir con esta ley habría que endosarle algún nuevo organismo. De manera que la comisión mantiene su despacho en la forma en que está.

Entre las facultades del consejo agrario,

que son amplias, cuyo análisis me llevaría mucho tiempo, destaco solamente una y es la tarea de poblar el interior, organizar la campaña para aumentar la población rural del país. A este efecto podrá realizar convenios para atraer nuevos inmigrantes, etcétera.

Este punto contempla dos aspectos, uno organizar la campaña para aumentar la población rural del país, buscando por todos los medios realizar una mejor distribución de la misma, haciendo propaganda para que los agrarios o hijos de agrarios se orienten hacia las tareas rurales, para que no abandonen el campo, evitando el fenómeno —que es universal, pero inexplicable en un país como el nuestro, agropecuario por excelencia— del éxodo de la campaña hacia las ciudades.

En este mismo punto cabría lo expresado en una insinuación hecha en el congreso de Mendoza, creo realizado en el corriente año, en que se expresó un voto para que el Estado realice una acción de restitución de los hijos de agrarios que hayan tenido que abandonar su zona de origen por diversos motivos; voto del doctor Eretilio Rodríguez, preocupado del problema de su provincia, de Corrientes, en que muchos abandonan la provincia por falta de perspectivas y se van a los territorios nacionales, especialmente al Chaco.

Con relación al problema de la inmigración nos hemos de referir al mismo dentro de breves sesiones, con motivo de la interpelación planteada al respecto.

Es indiscutible que habrá que realizar una obra orgánica en todo el país, enérgica si se quiere, retomando los pasos iniciales de la República después de 1853; pero conjuntamente con ello, es decir de la obra a realizarse en materia de colonización, es indispensable cambiar el medio del campo argentino. Hoy tanto los agricultores como los ganaderos pequeños viven al margen de las inquietudes que afectan a la República, y también sin los medios más elementales que la civilización impone para vivir en un ambiente de progreso, como podrían vivir nuestros agrarios. Entiendo que el Estado no puede negarle, a todo agrario que quiera, trabajar tierras. Hay que concederles todas las ventajas para que las tengan, y rodearlos de todas las garantías para que no sigan siendo las víctimas propiciatorias de los voraces capitalistas o comerciantes en productos o en tierras. La superficie que se les conceda no debe ser mayor que la que necesita todo agrario para trabajar con su familia, como lo establece uno de los

preceptos de la ley. Debe terminar la dilapidación de la tierra pública. No se pueden acordar más, grandes extensiones de tierra a especuladores del mayor valor, como lo han hecho muchos gobernantes argentinos, que crearon así, a costa del progreso que engendra el trabajo colectivo, una nueva clase dentro de la clase agraria: la de los productores urbanos. Muchos de ellos, que no conocen ni sus propiedades ni saben lo qué es una vaca o lo qué es un arado y, lo que es peor, que no conocen el esfuerzo de sus humildes labriegos, o peones de sus estancias que carecen de los elementos más necesarios para la vida civilizada, viviendo en galpones, sin hogares, sin alimentación y sin educación.

Es necesario cuidar la tierra, pero también al hombre. He ahí, señores diputados, la base que sustenta el despacho que estamos considerando. El despacho es bueno en sus fases generales y en sus lineamientos; pero necesitará, como decía hace un momento, una correcta y enérgica aplicación.

Para terminar, voy a recordar una frase de Sarmiento que podría servir de lema al consejo agrario nacional, para que nadie se aparte del espíritu de justicia, de profunda justicia que debe orientar la obra. Decía Sarmiento: «En este país cualquier hombre que tenga brazos para trabajar tiene en ellos el título de propiedad.» (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Ministro de Agricultura. — Pido la palabra.

El problema agrario es objeto de una preocupación universal. En nuestro país, por su extensión, por su población, por la fisonomía de su producción, por su aspecto social, es de una permanente actualidad.

En el desenvolvimiento económico de la Nación, el monto de la producción agropecuaria llega a cubrirlo casi totalmente, si a la materia prima directamente comerciable se agrega el valor de las industrias extractivas y transformadoras de la misma. Nuestra riqueza está en la tierra, y por consiguiente nuestra preocupación debe ser darle el régimen que le permita desarrollarse en toda su amplitud y procurar colocar sus productos. Hay una preocupación fundamental para que se consiga el más alto valor de ellos y el más bajo costo, para que se obtenga la colocación integral de los mismos.

Hasta hace algunas décadas, la tierra fué objeto de un activo comercio como un medio posible de hacer dinero. Se procuraba especular con ella y realmente se lograba dinero, por-

que el mercado exterior y el interior lo permitían. Por otra parte los resultados de su trabajo eran promisorios.

Capitales abundantes, fácil mercado de colocación y trabajo barato a causa del *standard* de vida inferior en que se colocaba a nuestros obreros, permitieron precios remuneradores y se obtuvieron productos a bajo costo.

Al mismo tiempo, regía ampliamente el liberalismo económico. Y la ley de la oferta y la demanda actuaba en toda su amplitud. Pero notemos que no sólo regía para los productos que se negociaban, sino también para el trabajo con el cual se los alcanzaba —jornales, esfuerzo humano—, y para el instrumento, la tierra, de la cual aquél se servía para conseguirlo.

La evolución económico-social de los últimos años planteó nuevos problemas como consecuencia del aumento de la capacidad de producción en el hombre y despertó una mayor y mejor comprensión sobre el trabajo. Debía procurarse el bajo costo de producción, pero partiendo del mínimo que el hombre necesita para vivir con dignidad y cuidando de que la tierra no fuese objeto de especulación, sino un instrumento para quien la trabaja, con un valor derivado de la producción que se obtenga. Por consiguiente, realizando un acto de justicia distributiva y sirviéndose del factor económico, se procuraba la estabilidad social; es decir, que la riqueza que se consiga no escape de quienes fueron factores para producirla. Se comprende la importancia que para ello tiene el régimen según el cual se trabaja, y se percibe la especial gravitación para obtenerla que se tendría, si el instrumento de que se sirve fuese de su propiedad. Es el problema milenar de la humanidad que se procura resolver. Y si alguien pudo decir «que el problema de la propiedad es, después del problema del humano destino, el más importante que puede ofrecerse a la razón, pero el último que ésta logrará resolver», es porque a quien lo enunció sólo le preocupaba la producción de riqueza como fenómeno económico, sin pensar en su aspecto social y en la trascendencia moral que su solución tendría.

En este sentido, para muchos sería un caso de conciencia el aclararlo; para otros, de conveniencia el comprenderlo, y para todos —aun para los más reacios— sería la fuerza de una disposición legal que terminaría por imponerla.

Por otra parte, con la posesión de la tierra que se trabaja se propende a radicar el agrario

en el campo; éste se siente más seguro ante su destino y entrega su esfuerzo sin reatos, ante un porvenir que lo tranquiliza. Cargando un poco las tintas, para destacar mejor el motivo del cuadro, podría repetir las palabras de Young en el siglo XVIII: «Si se entrega a un individuo la posesión asegurada de una roca combatida por los vientos, la transforma en un jardín; pero si se le entrega un jardín por corto plazo, lo transforma en un erial.» La realidad es que la intensidad del esfuerzo está en relación con la finalidad que se desea alcanzar y la continuidad con la trascendencia que se le supone. Cuando la posesión es transitoria, la explotación es integral para conseguir el máximo de producción, aun a expensas de la conservación del medio explotado. Mientras tanto este último es un factor primordial en el procedimiento, cuando a la posesión se la sabe definitiva. La propiedad de la tierra estimula su producción y su conservación en estado de producir. El factor psicológico que actúa sobre el hombre en el sentido indicado, se transforma en norma colectiva. La experiencia agraria así lo demuestra.

Seguramente entre los factores que contribuyen a que nuestra población agraria se mantenga casi estacionaria en el país desde 1914, en 3.350.000 habitantes, habiéndose, apenas, triplicado desde 1869, 1.136.000, cuando la urbana aumentó más de quince veces (de 600.000 a 9.000.000) y la total entre siete y ocho, está su falta de radicación definitiva, como lo muestra el alto porcentaje de arrendatarios —63 %— sobre el total de explotaciones rurales. (440.000).

Como un dato comparativo, haré notar que ese porcentaje es sólo del 50 % en Estados Unidos, 34 % en Canadá y del 33 % en Sud Africa.

Y como una confirmación del concepto que expresé, voy a permitirme comparar lo que significa una explotación de cien hectáreas arrendadas, parangonándola con una explotación similar realizada por el propietario de la tierra. En cien hectáreas el valor de la producción llega más o menos a \$ 8.400 m/n., suponiendo la mitad cultivada con trigo y la otra mitad con lino; con una producción en el primer caso de 600 quintales al precio de \$ 6 m/n. y en el segundo de 400 quintales y \$ 12 m/n. de precio. El valor del arrendamiento, a un 25 % de la producción, sería de \$ 2.100 m/n., el costo de producción, \$ 3.600 m/n. y el beneficio familiar \$ 2.700 moneda nacional.

Esto, repito, en cuanto a un terreno de 100 hectáreas explotado por un arrendatario. Com-

paremos con un terreno de 50 hectáreas trabajado por el propietario. En este caso el valor de la producción, dentro de esos mismos factores, es de 4.200 pesos, el costo industrial, 1.800 y el beneficio familiar, 2.400 moneda nacional.

Es evidente que en el primer caso vive el arrendatario en el campo, y posiblemente el dueño del fundo en la ciudad. En el segundo, con 50 hectáreas, o sea la mitad del anterior, puede vivir un propietario del suelo, y en aquella misma extensión de 100 hectáreas podrían vivir dos hombres radicados en la tierra.

El arrendatario conoce lo percedero e inestable de su explotación y trata de obtener su máximo provecho mientras ella dure. No hace nada que signifique un mejoramiento futuro para la familia, cuyo porvenir no lo ve en el campo, y no le transmite su amor a la tierra porque posiblemente ya lo ha perdido. Por el contrario, manda a sus hijos a la ciudad próxima y los prepara para actividades distintas. La familia del arrendatario tiende, en plazo más o menos breve, a urbanizarse, y él mismo se siente un transeúnte en su propia explotación.

Debe tenderse, pues, a que la propiedad de la tierra sea de quienes la trabajen, pero en extensiones que contemplen su propio desenvolvimiento y el desenvolvimiento colectivo. Hay que propender, en tesis general, a la pequeña propiedad rural, pero dentro de límites económicos, es decir, que el agrario y su familia tengan un predio de dimensión suficiente para que le produzca no sólo lo que le permita vivir con comodidad, sino que, además, obtenga una producción de riqueza equivalente a un costo que facilite su posible comercialización. Con lo primero se contribuye a fundamentar la estabilidad social, haciendo posible la vida de quien trabaja; con lo segundo se contribuye a formar el capital de reserva que fundamenta el desarrollo económico del país, acrecentando sus medios de intercambio. Se ve así que «pequeña», refiriéndose a la propiedad rural, tiene más el alcance de una definición que de una expresión gramatical; no tiene únicamente un significado cuantitativo, sino también cualitativo. Su extensión sola no la individualiza: se la debe completar con lo que se puede producir por el trabajo de una familia agraria. Lo que en la Patagonia estaría dentro del término dado, en la provincia de Buenos Aires sería un latifundio. Es por eso que aclararía mejor la idea, si se dijese «adecuada propiedad rural», en

lugar de «pequeña propiedad rural», supeditada la expresión a los dos conceptos que dejo citados.

Implicítamente, está comprendido en ello que sea apta para las funciones a las cuales se la destina. No es posible pensar en que se tienda a realizar un trabajo en un medio agrícola impropio. Hay que procurar que éste responda a aquél en términos generales, porque nada significaría ser propietario de la tierra, si a ésta le faltasen condiciones ecológicas o de productividad suficientes.

Pero la subdivisión de la tierra en extensiones económicamente convenientes y la posibilidad de adquirirla en propiedad, son medios necesarios —pero no suficientes— para incitar a que se la trabaje, formar al agrario y su familia y radicarlo en el predio adquirido. En primer lugar necesita tener la orientación necesaria sobre el rumbo que debe dar a su explotación y adquirir la educación técnica indispensable para vencer las dificultades que el trabajo cotidiano le ofrece. Además, el trabajador de la tierra necesita elementos adecuados para poderlo hacer y contar, por consiguiente, con préstamos cómodos, que le permita adquirirlos; pero, a veces, sus posibilidades financieras son inferiores al valor del útil o herramienta, que con su empleo abarata el costo de producción y que le sería conveniente para luchar contra la competencia. Entonces surge la necesidad de la asociación, agremiación o consorcio por métodos cooperativos en los agrarios que se sienten animados de los mismos propósitos y que le permitirá adquirir, para uso común, el elemento faltante de trabajo. Cuando el agrario haya adquirido la costumbre de la asociación cooperativa, habrá agregado a las ventajas que ofrece la pequeña propiedad rural, las que presenta el capital necesario para una gran explotación, como sería en efecto, la resultante de la suma de los pequeños capitales que cada uno puede poseer. Se fortalece de esta manera la pequeña propiedad y se le da como base para su tranquilo desarrollo, una fuerte y bien saneada financiación.

Pero hay que procurar también darle un alcance de posible convivencia social, vigorizando a la población agraria con una policía vigilante e imparcial, con una justicia de paz activa y accesible, con la asistencia oportuna a la salud y con la escuela próxima para la educación adecuada.

Es necesario, señor presidente, haber con-

vivido en el campo con los que dedican sus afanes a la producción y a acrecentar nuestra economía, para comprender cómo muchas veces el esfuerzo que se inicia termina en una angustia, cuando no tiene las elementales posibilidades necesarias, no sólo como garantía para su salud, sino para su propia vida.

La cooperativa, de una indudable realización económica, al aproximar con ese fin a los agrarios, puede contribuir a que se conozcan y constituyan centros de reunión y esparcimiento para las horas libres. Y contribuirá a radicarlos en el campo, porque encontrarán una suficiente retribución a su labor por una parte y, por la otra, les ofrecerá algo de lo que en la vida de la ciudad encuentran, tanto más necesario hoy, cuanto que, por los buenos caminos y económicos transportes mecánicos, las distancias son más cortas y las comunicaciones más fáciles.

Pero, conjuntamente, hay que propender a que se comprenda lo que para el hombre significa la vida en el campo; y servirse de la escuela, en primer lugar —de la escuela primaria—, para alcanzarlo. No sólo se debe combatir el analfabetismo enseñando a leer, sino también la ignorancia agrícola. Junto con las primeras letras, junto con las primeras nociones que sobre la vida civil se destacan para el niño, en las escuelas rurales se les debe enseñar, con preferente atención, las primeras nociones agrícolas, explicarles el motivo de la roturación de los campos y hacerles comprender, sencillamente, simplemente, cómo de la semilla que en el surco se coloca, surge la vida vegetal: enseñarles a distinguir las especies botánicas comunes de la región y a conocer más tarde primariamente sus órganos vitales. Mostrarle cómo si la tierra se trabaja y si en la tierra se siembra, ella da, o la flor que embellece el paisaje o el fruto promisorio del cual aquélla es anuncio, que alimenta y sustenta. Y obtener que él mismo haga una siembra y vea su evolución, para que sea testigo del milagro de la eclosión de la semilla en planta y de la planta en flor y en fruto, es decir, en sedante o en sostén para la vida. Y tantas otras cosas que una maestra capaz puede mostrarle para despertarle una inquietud que no es difícil tranquilizar, y formar el carácter y el alma campesina en el niño. En él la idea, como en el surco la semilla, hará eclosión y lo convertirá mañana en un hombre que quiere al campo, que lo trabajará con esmero y lo observará con pasión.

Algo de esto tuve oportunidad de decir, cuando a invitación del presidente del Consejo Na-

cional de Educación, conversé con maestras rurales que se reunieron en Buenos Aires a principio de este año, porque no es posible ni hay razón para que la enseñanza en las escuelas de campaña se realice como la que se da en las ciudades. Quizá por la simplicidad del método, estoy convencido de su eficacia, siempre que haya fervor en quien enseña, fe en quien dirige y estímulo para aquéllos, no sólo con la palabra que alienta sino con la consideración que se merecen quienes tienen misión tan fundamental que cumplir.

Que no se agoste el entusiasmo que provocaron los resultados que se presentan, es obra de la legislación adecuada que tratamos de conseguir con el proyecto que se discute.

Después vendría la educación técnica, lograda o por medio de la escuela especializada o como consecuencia de la experiencia agrícola, orientada por funcionarios del Ministerio de Agricultura, sirviéndose de la chacra experimental o de demostración, la primera dirigida y controlada por aquéllos, la segunda trabajada por familias de agricultores elegidos entre los más capacitados, pero bajo la visión de los que estuviesen preparados para hacerlo.

En esta forma, se tomarían los recaudos necesarios a fin de que el hombre que trabaja y el suelo en el cual lo haga, tengan las características precisas para que la explotación agraria pueda dar resultado.

En el país, desde la Revolución de Mayo hasta nuestros días, se ha tenido la preocupación agraria, es decir: poblar nuestros campos con hombres que lo trabajen. No era obstáculo para ello las azarosas horas que se vivían, primero en el período de nuestra emancipación y después en el de nuestra organización nacional. Aparte de las observaciones que a Moreno le sugiere el estado agrícolasocial y que lo expresa en la «Representación en nombre de los obradores y hacendados del Río de la Plata», cabe destacar las medidas tomadas por la junta en octubre del año 1810 para la venta de terrenos en el pueblo de la Ensenada, porque coinciden en lo fundamental con la teoría moderna en cuanto se sostiene que la propiedad de la tierra es justa cuando se aprovecha de ella como instrumento de trabajo, pero que es injusta cuando se convierte en capital inactivo que espera su valorización por el esfuerzo extraño.

Me voy a permitir leer los términos en que la junta se expidió, dada la importancia que tienen los conceptos que la misma vierte. «El fomento de esa población, que la junta ha re-

suelto sostener a toda costa, excitará la codicia de algunas personas poderosas que en semejantes ocasiones compran terrenos dilatados por el interés de la reventa o para establecer grandes posesiones que quitan a los pobladores la esperanza de ser algún día propietarios. Para evitar este mal ha resuelto la junta que la venta de terrenos en el pueblo de la Ensenada no pueda pasar de una cuadra cuadrada, que todo propietario de más terreno sea obligado a vender una cuadra o menos a todo comprador que lo solicite; que las ventas se hagan por tasaciones de peritos, sin ser arbitrio del dueño el fijar el precio; que todo comprador deba empezar su edificio con sujeción al plan delineado en el término de dos meses después de comprado y el que no lo verificase será obligado a venderle a cualquier comprador que afiance su edificación en el término fijado.»

Pareciera, señor presidente, que fueran las preocupaciones de la hora presente las que tuvieron los miembros de la Junta de la Revolución de Mayo, cuando planearon y fijaron los conceptos de la distribución de la propiedad en la Ensenada. Posteriormente, el año 12 inicia Rivadavia una nueva era, —cuya realización posterior se vió aplazada por su separación del gobierno—, en el régimen agrario del país, cuando dispone gratuitamente para los nativos «suertes de estancias proporcionadas y chacras para la siembra de granos, bajo un sistema que asegurará el establecimiento de poblaciones y la felicidad —agrega— «de tantas familias», que siendo víctimas de la codicia de los poderosos, vivían en la indigencia y en el abatimiento, con escándalo de la razón y en perjuicio de los verdaderos intereses del Estado.»

Con las medidas adoptadas se propuso corregir el defecto originario en la legislación existente y combatir la propiedad individual de la tierra pública, conseguida con la anuencia y el favoritismo del gobierno y facilitar el acceso a la misma a los que deseaban trabajar, sin destinar sumas de dinero cuya obtención era en muchos casos imposible conseguir. Pasando por alto la determinación de las asambleas de los años 1813 y 1816, referentes al problema agrario, que muestran las disposiciones que animaban a quienes las dictaron, para no detenerme sino en aquellas que marcan un rumbo claro en cuanto a él atañe, llegamos a julio de 1822, cuando Rivadavia, como ministro de Martín Rodríguez, dictó el decreto en el cual se prohibía la venta de las tierras que estuviesen en poder del Ministerio de Hacienda y que

permitiría que fueran puestas en enfiteusis. Pero fué en marzo del año 1826, que Rivadavia, presidente de la República, para salvar la despoblación y sacar al pueblo de su atraso, mejorando su régimen de vida en momentos en que la agitada política interna complicaba la vida política del país, promulgó su célebre ley de la enfiteusis, la llamada perfeccionada o neoenfiteusis, en que el canon se pagaba al Estado, para distinguirla de la clásica del tipo individualista que enriquecía en otras partes a particulares.

Breve plazo pudo mantener este primer ensayo orgánico de la utilización de la tierra pública, que permitió al Estado no desprenderse del dominio de ella, porque, como entonces se dijo al discurrirse la ley, «el precio se consume y la renta se conserva», puesto que en los años 1828 y 1829 se disminuyó su plazo de 20 años, creando numerosas causas de caducidad en los contratos existentes, en 1832 se suprime al enfiteuta todas las garantías que le acordaba la ley, para, en 1837, declarar caduca la casi totalidad de las enfiteusis existentes. Posteriormente se intensifica el sistema de donaciones de tierras próximas a los fortines o solarés de los pueblos; por otra parte, las ventas de tierra que se habían hecho en forma privada, se las realizó por medio de remate. El sistema se lo continuó con posterioridad casi hasta el año 1857.

En los últimos 82 años las leyes dictadas por el Congreso, que alcanzan más o menos a veinticinco, pueden clasificarse en cuatro rubros: 1º leyes convenios de colonización con empresas privadas; 2º leyes de colonización e inmigración; 3º leyes generales de tierras y 4º leyes especiales. No entraré al detalle y estudio de cada una de ellas. Ya ha sido realizado en un ambiente más propicio. Lo único que nos queda es aprovecharnos de la experiencia recogida para dar a la nueva legislación características que permitan abordar el problema sin las fallas que aquéllas presentaron y que fué dable constatar.

Se ensayaron, aunque muchas veces en condiciones precarias, los cuatro sistemas clásicos de colonización: la enfiteusis, la donación, la venta y el arrendamiento. Nuestra legislación sobre tierra pública se caracterizó por oscilar entre las dos tendencias posibles: la que prohíbe su venta y la que estimula su enajenación. Los resultados no han sido los que se esperaban, o bien porque no hubo constancia en el procedimiento o porque fallaron detalles que

debieron tenerse en cuenta y se olvidaron. La lucha con el indio primero, la falta de medios de comunicación, después, reaggravados por las vallas levantadas durante la organización nacional y más tarde el acaparamiento, la especulación incontentida —animadas sólo por el espíritu de lucro que las llevaba a los extremos más contradictorios—, el costo desproporcionado de los arrendamientos, los altos fletes para la producción agraria durante cierto período, el olvido, por otra parte, de la verdadera orientación que debió tener nuestra legislación —dar al hombre capacitado el instrumento adecuado en su justa medida y en su verdadero valor para trabajarla—, fueron factores que retardaron la solución del problema básico de nuestra economía agraria, y sembraron el confusiónismo sobre los sistemas y la desconfianza sobre los resultados que pudieran alcanzarse.

Entretanto las iniciativas que llegan al Congreso —parlamentarias unas, del Poder Ejecutivo otras—, referentes a tierras, colonización o fomento agrario, fueron numerosas, pasando posiblemente del centenar. En ellas se traduce la preocupación dominante sobre un aspecto tan principal de nuestra economía, se emiten las ideas más diferentes, colocándose en puntos de vista distintos, que lógicamente debieran converger hacia un mismo propósito —pero que a veces resultarían contradictorios por las distintas bases de las cuales parten— a pesar de lo cual se nota que en definitiva, especialmente en los proyectos presentados en los últimos años, se coincide en conceptos básicos, sirviéndose de los cuales con perseverancia y con lealtad, se cree acercarse a la solución definitiva del problema agrario: constitución de la pequeña propiedad rural, facilidades para adquirirla, asociación de productores con métodos cooperativos, educación técnica, vivienda rural, crédito agrícola, seguridad y atención de la vida en el campo.

Está dentro de esas directivas el proyecto del Poder Ejecutivo enviado en septiembre de 1936, los anteproyectos de los diputados Horne y Palacio y los proyectos de los diputados Cafferata, Pinto y Eyto, que han servido a la Comisión de Legislación Agraria para formular su despacho, que cuenta con el voto favorable de todos sus componentes y la aprobación del ministro que habla, como pudo expresarlo en el seno de la comisión al estudiarse su estructuración definitiva.

Se podría desarrollar, si el Congreso le presta su sanción, un nuevo ambiente agrario en el país. Su artículo 1º sintetiza sus propósitos.

muestra el amplio campo que abarcará su acción y deja percibir lo fecunda que puede ser su realización, si es bien comprendida y lealmente ejecutada.

El problema demográfico del interior del país, exige la presencia de agrarios de fácil adaptación al medio, con cuyo esfuerzo —que se procura sea compensado— se tenderá al resurgimiento económico y social de regiones que en otra época pudieron llegar a ser las abastecedoras del consumo interno de la República. Es por eso que la ley los buscaría primero entre los agricultores nativos, que actualmente como arrendatarios no encuentran aliciente para una radicación definitiva y para una producción ordenada y que tengan capacidad suficiente y los medios necesarios para alcanzar aquellos propósitos. Procurará, también, la ubicación de los hijos de agricultores y de los egresados de escuelas agronómicas que tendrían como pocos las condiciones requeridas para el trabajo. Pero no se descuidará la posibilidad de radicar extranjeros, provenientes de regiones que se caractericen por su fácil asimilación a nuestro ambiente, en un porcentaje en cada colonia que no pasará del 25 %, y previendo aún en este caso, que la totalidad de los mismos no corresponda a agricultores de una misma nacionalidad. Idéntica precaución se tomará aún en aquellas colonias que se creen exclusivamente, en virtud de los convenios que la ley autoriza a celebrar con grupos de familias residentes en el extranjero o con instituciones de reconocida solvencia y responsabilidad, para radicarlas en la República, mediante contratos de compra o arrendamiento con opción a compra, siempre que esas familias dispongan de medios para iniciar la explotación y tengan las condiciones de asimilación, a que antes me he referido.

La legislación contiene así las ideas básicas para un probable aumento de población en el país, y es un marco que comprende una posible solución al acrecentamiento de nuestro caudal inmigratorio.

Los resultados, satisfactorios o no, que puedan conseguirse de la aplicación de la ley que se estudia, responderán, en gran parte, a la clase de agricultores que se sirvan de ella. Hay que realizar la selección del buen colono, según sea su capacidad económica, profesional y personal, como la ley lo establece; el trabajo de la tierra produce, pero requiere un duro esfuerzo, y es por eso que hay que evitar que lo inicie el que así no lo comprenda y no llene aquellas condiciones. Su fracaso, que se tra-

ducirá en ser desalojado de su predio, mediante la rescisión de su contrato, aparte de la trascendencia económica y social que significa por no haber creado un agricultor, y por el retraso de una fuente de producción, tendría una gran influencia moral o psicológica de desprestigio, que hay que evitar. Todo cuidado que se ponga para conseguir el buen colono, será siempre bien recompensado en cuanto a la realización de la ley se refiere; no hay, pues, que ahorrarlo.

Para llevar el mayor bienestar posible a estos trabajadores del campo, el proyecto dispone la enajenación de la tierra que se destina a colonización en la siguiente forma: venta directa del predio, al agricultor que abone por lo menos el 10 % de su precio al contado, y el saldo hasta reducirlo al 50 %, con una amortización acumulativa del $\frac{1}{2}$ % y un interés del $2 \frac{1}{2}$ %. El 50 % restante, con una amortización anual acumulativa e intereses iguales a los que están en vigencia en el Banco Hipotecario Nacional; en este caso se solicitará la transferencia al mismo banco.

Como un medio de propender a la formación de la familia rural y al aumento de la población agraria, sin que se traduzca en una disminución de su economía, se ha propuesto a la comisión como inciso c) del artículo 28, el siguiente: «La deuda será reducida en un 6 % de su valor inicial, por cada hijo legítimo nacido en la propiedad, al alcanzar dos años de edad, después del segundo hijo vivo nacido antes o después de instalados en ella».

En la pequeña o adecuada propiedad rural, la madre —como integrante de la familia— ayuda en su explotación, ya sea en los quehaceres del hogar, en los trabajos de la granja familiar y a veces en los trabajos de explotación extensiva del predio. Es lógico entonces que en casi seis meses del período prenatal y en un año o año y medio después del nacimiento de su hijo, su capacidad de trabajo disminuya, pudiendo traducirse este hecho en una merma de producción o en una lógica elevación del costo. Con el propósito de contemplar esa posible disminución y las preocupaciones inherentes al cuidado y a la educación del niño, se ha propuesto la compensación en el saldo deudor proveniente de la compra del predio, en la forma que dejo expresada.

En el caso de que los agricultores reúnan las condiciones requeridas, pero no puedan abonar el 10 % del precio inicial al contado, podrán arrendar los predios con opción de compra, hasta por el término de cinco años, abonando como precio anual el 3 % del precio de venta. El

consejo agrario podrá declarar la prolongación del contrato a su vencimiento, o su caducidad en cualquier momento, si constatará la imposibilidad de reunir las condiciones necesarias para convertirse en propietario en el primer caso, o la incapacidad del agrario en el segundo. Aun en el caso de venta directa, el contrato podrá ser rescindido si el agricultor no reside con su familia en el predio y no lo trabaja, o bien si no cumple otras disposiciones que la ley o el contrato de compraventa establecen.

Con el doble objeto de aumentar el fondo de amortización para saldar el precio del predio adquirido, o de reunir la cantidad necesaria para trabajar en la parcela arrendada, y de servir en ambos casos como fondo de reserva para las contingencias agrícolas, mientras no se instituya el seguro agrario nacional, después de abonar el porcentaje correspondiente como parte del precio de compra o como importe de la locación, abonará una suma variable cuyo monto anualmente no podrá exceder del 4 % del precio de venta.

Se ha propuesto, como un primer agregado al artículo 32, que en caso de que el arrendatario se decidiese por la compra del predio al final de su contrato y abonase el 10 % de su valor, deberá hacerlo con los intereses correspondientes durante el plazo que se sirvió de él, sin haberlo comprado, a fin de evitar el abuso que se produciría de no existir esa cláusula; pues sería de conveniencia evidente, para el que quiera comprar no pagar el 10 % al contado y arrendar con opción de compra, para abonarlo al final de la primera y servirse entretanto de ese porcentaje.

Como un segundo agregado al mismo artículo, se ha propuesto que en caso de que el arrendatario optara al final de su contrato por no comprar el predio, el fondo de ahorro que formó, deberá pasar a integrar el precio del 3 % ya pagado por el arriendo. Es una forma de interesar al arrendatario en la compra, y en caso de que no lo hiciera, de que abone la lógica compensación por el predio abandonado y que en ningún caso podría superar el 7 por ciento.

Ahora bien; es interesante constatar las reducciones que sufre el término de la amortización del predio comprado, según sean las variaciones del porcentaje del fondo de ahorro que se abona además de la suma normalmente estipulada.

Si no se establece fondo de ahorro, el período de amortización durará 35 años. Si se establece el 1 % de fondo de ahorro, el término de la constitución del fondo de ahorro será de nueve

años y el término del período de amortización, diecisiete años. Si se establece el 2 % como fondo de ahorro, el término de su constitución será de cinco años y la duración de la amortización será de doce años.

Si se fija como fondo de ahorro el 3 %, su constitución durará cuatro años y el período de amortización llegará a nueve años. En cambio, si el fondo de ahorro es el máximo permitido, o sea 4 %, su constitución se realizará en tres años y la amortización bajará a ocho años.

Es claro que sólo he supuesto términos de ahorro regulares; en el caso de que variase de un año para otro, también variará su término de constitución; así como el período de amortización. Pero sabemos que los límites entre los cuales el primero puede variar está entre nueve y tres años, y el segundo entre treinta y cinco y ocho años.

Con el fin de facilitar la iniciación conveniente de agrarios con condiciones suficientes para emprender una explotación, ya sean compradores o arrendatarios con opción de compra, pero que carecieren de medios suficientes, el consejo podrá habilitarlos con un adelanto de hasta \$ 6.000 m/n., para adquirir animales, árboles, semillas, instrumentos de labranza o máquinas. El consejo establecerá para este fin una reglamentación adecuada, fijando los plazos y las formas en que deberá ser devuelto el préstamo, y no podrá invertir en estas operaciones más del 10 % de los recursos que le acuerda la ley que se estudia.

Con el propósito de propender a la más segura y definitiva radicación del agrario, se ha propuesto un artículo por el cual se tiende a dotarlo de casas adecuadas; con ese objeto, hará estudiar el consejo agrario nacional casas de tipo conveniente y económico, que podrán ser construídas a requerimiento del agricultor, quien deberá abonarlas en las mismas condiciones que se establecen para el pago del precio de la tierra.

La acción del plan de colonización que la ley comprende debe procurarse realizarla en las mejores tierras, ubicadas en buenas zonas agrarias. Se utilizarán para llevarlo a la práctica: 1º, las tierras fiscales que se consideren aptas, las que estén en poder de bancos oficiales, ministerios u otras reparticiones públicas nacionales que no se encuentren afectadas a otros fines del Estado. Habría que tener presente que sean aptas para poder realizar la colonización por sus condiciones ecológicas y por su capacidad agrológica; 2º, las que adquiera directamente de particulares, por licitación pública o

por remate y, en caso de que así no lo consiguieran por expropiación sobre tierras que no fuesen objeto de una explotación agraria racional, verificada directamente por los propietarios o en extensiones que sobrepasen mil hectáreas de superficie, con una indemnización que no será superior a la suma que surja de su valor de producción en los últimos diez años y dentro de la zona agraria en que estuviesen ubicadas; y 3º, las tierras del dominio privado o de las provincias o municipalidades que sean ofrecidas para incorporarse al régimen de la ley. La base que servirá al consejo agrario para determinar el valor de los predios que deba adquirir, será la tasación realizada según la producción en la zona en la cual se encuentren situados, en un período de diez años, computados los productos al precio medio obtenido en el mismo período. Para realizar el cálculo de la capitalización a que se refiere la ley, habrá que descontar previamente el costo de producción.

Será necesaria una gran cautela para determinar las tierras que siendo utilizables deben ser adquiridas para colonizar. Atribuyo al acierto con que se proceda, gran parte de los beneficios que con esta ley puedan conseguirse. El estudio del suelo en su aspecto agrológico, las condiciones meteorológicas de la región y, por consiguiente, la capacidad de producción; la distancia de los centros poblados, estaciones o puertos, son factores que analizados con atención y prudencia, indicarán la conveniencia de una adquisición. Su tasación posterior, que surgirá de un análisis bien claro del valor antes determinado, deberá ser hecha con todo cuidado, a fin de evitar que se pague un precio superior al que corresponde a la renta que efectivamente puede producir.

Una vez adquiridas las tierras, las colonias que se formen se subdividirán en lotes económicamente apropiados para el desenvolvimiento del agrario y su familia. Se harán reservas necesarias para crear explotaciones técnicas y experimentales orientadoras, y la escuela, en caso de que no existiese a cinco kilómetros de distancia.

La aplicación en forma permanente de la ley de colonización, será ejercitada por un consejo agrario nacional con jurisdicción en todo el país, compuesto de cinco miembros, en la forma que ya ha sido indicada por el señor miembro informante de la comisión. Este consejo tendría la autarquía suficiente, la flexibilidad necesaria y los medios adecuados para la ar-

dua tarea que le tocaría desarrollar, comprendiendo que la colonización no tiene una tendencia comercial, sino que cumple una función social con una finalidad económica.

Se ha hablado de la posibilidad de no crear el consejo agrario nacional, entregando sus funciones a instituciones ya existentes, ante el temor de abultadas creaciones burocráticas. Es un error de miraje: son tantas las funciones y tan grande la preocupación que nuestro problema agrario presupone, que su desenvolvimiento necesita una dedicación integral que no pueden prestarle quienes tienen ya la obligación de cuidar nuestro patrimonio bajo otro aspecto; a lo cual se agrega que la burocracia que pudiera crearse, sería la misma en uno o en otro caso, puesto que o los empleados existentes tenían ya funciones específicas que no pueden abandonar y, por consiguiente, no pueden agregárseles otras nuevas, o bien no las tienen, y en ese caso hoy estarían de más; lo que es imposible suponer. Por otra parte, en el nuevo organismo sería visible el crecimiento, mientras que en los existentes, se produciría lo mismo, pero no podría ser constatado: sería casi invisible.

Dentro de cada colonia y aun en los sitios en los que, no siéndolo, el consejo agrario nacional estime conveniente su existencia, funcionarán consejos agrarios locales, presididos por el gerente del Banco de la Nación o el agrónomo regional o el presidente de la cooperativa e integrados por los representantes de los colonos, nombrados por el consejo agrario nacional.

Estos consejos colaborarán en la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones de la ley, coadyuvando con el Ministerio de Agricultura y el Banco de la Nación en las funciones que ambos deben desempeñar en defensa, orientación y fomento del agricultor y en la racionalización de su producción. Tutelarán los intereses de los trabajadores agrarios representándolos ante los poderes públicos en sus presentaciones y reclamos.

El plan agrario, que la ley comprende, se cumplirá invirtiendo en su ejecución hasta la cantidad de \$ 100.000.000 m/n., en la forma que la misma lo expresa. Ese fondo se acrecentará con el producido de la venta y arrendamiento de tierras que se rijan por la misma ley, y las sumas que se recauden en virtud de lo dispuesto por las actuales leyes de tierras y bosques y su reglamentación. Es apenas una iniciación que deberá ser complementada, una

vez que la experiencia que surge de su aplicación muestre la utilidad que con ella se alcanza. Los 15 ó 20.000 colonos que podrán instalarse de acuerdo con los fondos que la ley prevé, serán la avanzada en la realización que el país emprende; se deberá ser cuidadoso al establecerlos para que el éxito conseguido sea el acicate que mueva a decuplicar la suma fijada, en un plazo de 25 a 30 años, sin temor por el monto que pudiera representar, si con ello se permitiera radicar de 150 a 200.000 familias agrarias, puesto que con la estabilización de ese millón de argentinos, entregados a una productiva labor, con un *standard* de vida superior, serían como las raíces que darían consistencia a nuestra organización económicosocial que nos permitiría permanecer tranquilos ante las transformaciones que pudieran amenazarnos, ya que no ofrecerían mejores perspectivas que las que proporcionarían las alcanzadas como resultado de nuestra propia experiencia.

Es por eso que deberá procederse sin premura, pero también sin tardanza, sin apresuramientos peligrosos, pero con orden y perseverancia.

El ejemplo servirá también para que pueda iniciarse la colonización privada —dentro de límites que es difícil suponer—, sirviéndose de los medios que la ley crea y de las formaciones agrícolas que por su imperio aparecerán; y como nuestro problema agrario —exceso de campos en escasez de población— se resuelve en términos complementarios del de las viejas civilizaciones —exceso de población en escasez de campos— es de esperar que el equilibrio, al cual el mundo siempre tiende, contribuya a fundamentar la evolución bosquejada. Y así, con el trabajo de sus pobladores, con la riqueza de su suelo y con la ayuda y vigilancia de la Nación, se llegará a radicar y a aumentar nuestra población agraria como fermento necesario para labrar nuestra grandeza.

He terminado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Repetto. — Pido la palabra.

Señor presidente: me propongo hacer una exposición un poco larga; y como la Cámara ha escuchado ya tres discursos muy importantes, no querría, ahora, someterla a esta nueva prueba. Por consiguiente, pido que se levante la sesión y que esta discusión continúe el miércoles próximo.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a dar cuenta de un mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PALACIO

Tierras del Banco de la Nación Argentina

Aptas para ser subdivididas:

	Hectáreas	Hectáreas
Buenos Aires	10.836	
Córdoba	13.881	
Entre Ríos	4.066	
Santa Fe	34.182	
Santiago del Estero	7.799	
Tucumán	2.175	
San Luis	287	73.216

Totales del Banco en esas provincias:

	Hectáreas	Hectáreas
Buenos Aires	10.972	
Córdoba	34.598	
Entre Ríos	6.450	
Santa Fe	495.962	
Santiago del Estero	57.326	
Tucumán	2.175	
San Luis	2.393	609.786

Otras provincias y territorios 135.166

Total general: 794.952 hectáreas

Tierras en posesión del Consejo Nacional de Educación en condiciones de subdividirse para explotaciones agropecuarias.

	Hectáreas	Hectáreas
Buenos Aires	4.677	
La Pampa	20.000	24.677

Total general: 117.231 hectáreas

Tierras en posesión del Instituto Movilizador en condiciones de subdividirse para explotaciones agropecuarias.

	Hectáreas	En con- dominio Hectáreas	De deudores del Instituto Hectáreas
Buenos Aires	8.044	5.685	22.415
Córdoba	32.332	3.059	54.032
Santa Fe	6.823	—	5.343
Entre Ríos	12.454	—	—
Corrientes	4.013	—	—
San Luis	4.993	—	—
Mendoza	6.862	—	1.450
La Rioja	9.000	—	—
Santiago del Estero	5.484	27.851	17.093
Tucumán	—	5.175	—
Misiones	30.119	—	194.955
	110.124	41.770	295.288

Total de propiedad del Instituto Movilizador 446.694 hectáreas

Total de deudores del Instituto Movilizador 1.046.421 hectáreas

Propiedades adjudicadas al Banco Hipotecario Nacional dentro de las zonas aptas para colonizar

SUCURSAL	Superficie	Valor del préstamo \$ m/n.	Promedio por ha.
Bahía Blanca	67.340	6.780.000	100
Pehuajó	11.508	2.670.000	230
Pergamino	3.373	1.550.000	460
Tandil	640	120.000	190
Rafaela	29.004	2.380.000	80
Santa Fe	26.272	1.000.000	40
Concepción	9.563	1.500.000	160
Concordia	77.151	8.620.000	110
Paraná	16.492	1.100.000	70
Córdoba	4.252	460.000	110
Bell Ville	1.231	165.000	140
Río Cuarto	29.421	1.680.000	60
Corrientes	17.153	280.000	16
Goya	30.163	910.000	30
San Juan	2.008	1.000.000	500
Tucumán	21.857	920.000	40
La Pampa	258.049	13.860.000	50
Total para ser subdivididas	605.477	45.000.000	
Otras provincias y territorios	1.137.121	14.000.000	
Total	1.742.598	59.000.000	

En posesión 819.793

Destino de las tierras propias que el Banco a arrendado, 1.343.888 hectáreas:

Ganadería	695.935 hectáreas
Agricultura	432.175 "
Mixto	215.778 "

Tierras improductivas 328.979 "

Dirección General de Tierras

Tierras agrícolas subdivididas en 1937-1938-1939

	Lotes	Hectáreas	Extensión máxima	Extensión mínima
Chaco	3.536	233.210	98	1
Formosa	1.189	158.950	600	50
Misiones	1.622	40.483	25	1 1/4
Neuquén	251	3.250	40	1
Río Negro	285	5.101	100	1
Chubut	383	4.207	100	1
Santa Cruz	312	13.200	625	1
	8.178	458.471		

Análisis de la tierra fiscal en poder de la Dirección de Tierras

(En miles de hectáreas)

	Tierra concedida en venta	Tierra escriturada	Disponible			Reserva	Libre de acción judicial
			Total	Arrendad.	Posesión		
Formosa	119	1.734	5.938	597	442	1.259	3.368
Chaco	214	2.927	7.243	165	329	312	6.435
Misiones	71	2.126	708	—	—	3	705
La Pampa	134	12.532	1.618	264	59	165	1.129
Río Negro	78	7.750	12.149	1.460	1.191	219	9.278
Neuquén	113	3.762	5.824	102	134	499	5.089
Chubut	379	4.494	17.552	4.789	2.139	953	9.673
Santa Cruz	197	4.748	18.639	10.854	1.453	346	5.985
Tierra del Fuego	1	662	1.357	385	31	40	900
Los Andes	—	—	5.696	—	—	—	5.696
Córdoba	6	159	16	—	—	0,6	15
Santa Fe	0,3	29	0,8	—	—	—	—
Entre Ríos	0,6	58	8	—	—	0,3	8

Tierras agrícolas en condiciones de ser mensuradas
y subdivididas con miras a la colonización

	Hectáreas
Chaco	402.326
Formosa	472.961
Misiones	64.058
Neuquén	246.126
Río Negro	105.000
Chubut	100.000
Santa Cruz	27.000
Tierra del Fuego	2.000
Total	1.419.471